



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



**TESIS:**

**“VIOLENCIA Y MEDIDAS DE PROTECCION”**  
**(Estudio aplicado en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, de**  
**Enero a Julio del 2018)**

**ASESOR:**

**DR.AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE**

**PRESENTADO POR:**

**VICTOR HUGO MANAYAY RODRIGUEZ**

**PARA OPTAR**

**EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**LAMBAYEQUE, 2019**

**Tesis denominada “VIOLENCIA Y MEDIDAS DE PROTECCION” (Estudio aplicado en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, de Enero a Julio del 2018), presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por:**

.....  
**VICTOR HUGO MANAYAY RODRIGUEZ**  
**BACHILLER**

.....  
**AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO**  
**ASESOR**

**APROBADO POR:**

.....  
**ARMANDO HOYOS VASQUEZ**  
**PRESIDENTE**

.....  
**JUAN MANUEL RIVERA PAREDES**  
**SECRETARIO**

.....  
**LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ**  
**VOCAL**

## **DEDICATORIA**

A DIOS, por permitirme superar todos los obstáculos y darme las fuerzas para poder concluir satisfactoriamente mis estudios universitarios de la escuela profesional de Derecho.

A mi madre y mi padre, por ser los pilares fundamentales de mi vida que me apoyan, orientan, brindan atención y un amor incondicional para hacer de mí una mejor persona tanto en lo personal como en lo profesional.

A mi hermana y mi abuelo, por brindarme su apoyo y consejos en el transcurso de mi vida universitaria.

A mis tíos y tías, por apoyarme en mi vida tanto universitaria como en mi vida cotidiana y por compartir conmigo los buenos y malos momentos.

.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios, por ser mi guía que me ilumino y oriento para poder concluir esta hermosa carrera de Derecho, a mi madre por su apoyo incondicional, a mi padre por sus sabios consejos.

Agradezco a mi asesor de tesis, Dr. Amador Nicolas Mondoñedo Valle, por su apoyo y orientación en la elaboración y conclusión de la presente tesis, a mi querida Facultad De Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por formarme académicamente y profesionalmente en esta hermosa carrera que me apasiona.

Agradezco a todas aquellas personas que formaron parte de mi vida universitaria, que me apoyaron y fueron mi inspiración, ya sea a mis amigos como los docentes de la Facultad, gracias a ellos pude querer aún más la carrera de leyes y formarme personalmente como profesionalmente.

## **INDICE**

<b>DEDICATORIA .....</b>	<b>3</b>
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>RESUMEN .....</b>	<b>9</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>11</b>
<b>INTRODUCCION .....</b>	<b>13</b>

### **CAPITULO I: ASPECTOS METODOLOGICOS**

<b>1. ASPECTOS METODOLOGICOS.....</b>	<b>15</b>
1.1. Realidad Problemática.....	15
1.1.1. Planteamiento del Problema .....	15
1.1.2. Formulación del Problema .....	17
1.1.3. Justificación e Importancia del Estudio.....	17
1.1.3.1. Justificación del Estudio.....	17
1.1.3.2. Importancia del Estudio.....	18
1.2. Objetivos .....	19
1.2.1. Objetivo General.....	19
1.2.2. Objetivos específicos .....	19
1.3. Hipótesis.....	20
1.4. Variables.....	20
1.4.1. Variable independiente.....	20
1.4.2. Variable dependiente.....	20
1.5. Métodos.....	20
1.5.1. Generales .....	20
1.5.2. Jurídicos .....	21

## **CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL**

2. MARCO CONCEPTUAL .....	22
2.1. Antecedentes de la investigación .....	22
2.1.1. Tesis. ....	22
2.1.2. Artículos especializados. ....	24
2.2. Bases Teóricas .....	28
2.2.1. Violencia familiar contra los menores de edad.....	28
2.2.1.1. Definición de violencia.....	28
2.2.1.2. Definición de violencia familiar.....	32
2.2.1.3. Causas generadoras de la violencia familiar .....	34
2.2.1.4. Definición de violencia contra los menores de edad .....	36
2.2.2. Tipos de violencia .....	39
2.2.3. Tipos de violencia contra los menores de edad (maltrato infantil) .....	46
2.2.4. Consecuencias de la violencia ejercida contra los menores de edad .....	50
2.2.5. Derechos de los menores de edad .....	59
2.2.6. Derechos fundamentales de los menores de edad vulnerados por la violencia familiar .....	66
2.2.7. Medidas de protección contra la violencia familiar .....	79
2.2.7.1. Sobre la naturaleza de las medidas de protección .....	81
2.2.7.1.1. Medidas autosatisfactivas .....	81
2.2.7.1.2. Medidas cautelares .....	90
2.2.7.1.3. Medidas sui generis de tutela urgente .....	91

2.2.7.2. Definición de las medidas de protección .....	93
2.2.7.3. Naturaleza constitucional de las medidas de protección .....	95
2.2.7.4. Principios que sustentan las medidas de protección .....	96
2.2.7.5. Presupuestos de admisibilidad .....	97
2.2.7.6. Características de las medidas de protección.....	101
2.2.7.7. Autoridad competente para dictar las medidas de protección .....	103
2.2.7.8. Evaluación de las medidas de protección .....	104
2.2.7.9. Tipos de medidas de protección .....	104
2.2.7.10. Vigencia e implementación de las medidas de protección .....	118
2.2.7.11. Incumplimiento de las medidas de protección	121
2.2.8. Efectividad de las medidas de protección.....	123
2.2.8.1. El Estado Peruano garante de la plena vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales.....	123
2.2.8.2. Deber del Estado Peruano de intervenir cuando los derechos fundamentales son amenazados y/o violentados .....	125
2.2.8.3. Ejecución de las medidas de protección por la policía nacional del Perú.....	127
2.2.8.4. Protección y apoyo del servicio del serenazgo para una intervención oportuna y eficaz salvaguardando los derechos de las víctimas de violencia familiar .....	130

### **CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO**

3. MARCO METODOLOGICO .....	134
3.1. Tipo y Nivel de Investigación .....	134
3.2. Diseño de la Investigación .....	135
3.3. Población y Muestra .....	135
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	136

### **CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS**

4. ANALISIS Y RESULTADOS .....	137
4.1. Procesamiento de los Datos: Resultados .....	137

### **CAPITULO V: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS**

5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS.....	157
5.1. La efectividad de las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia de Chiclayo, para garantizar la protección de los derechos de los menores en los casos de violencia familiar, en el periodo de enero a julio del 2018.....	157
5.2. Análisis desde el punto de vista de los resultados .....	160
5.3. Aporte Científico .....	166

<b>CONCLUSIONES</b> .....	176
---------------------------	-----

<b>RECOMENDACIONES</b> .....	178
------------------------------	-----

<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	181
---------------------------	-----

<b>ANEXOS</b> .....	188
---------------------	-----



## **RESUMEN**

El presente estudio de investigación “VIOLENCIA Y MEDIDAS DE PROTECCION” (Estudio aplicado en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, de Enero a Julio del 2018), tiene como fin investigar si las medidas de protección dictadas por el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo son efectivas para poder garantizar la protección de los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar.

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es una realidad que ha persistido a lo largo de los años y es un problema social que no ha podido ser combatido para su erradicación o al menos disminuir los índices de violencia para este sector vulnerable. La violencia ejercida contra ellos por su situación de vulnerabilidad, denigran su dignidad e impiden un normal desarrollo a su integridad y personalidad, pero lo más alarmante y preocupante, es que los menores son víctimas de violencia en su propio núcleo familiar, este fenómeno social, presente en la sociedad actual sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, religión, sistema político o económico, afecta a tanto a la familia como a la sociedad. Por ello el Estado Peruano a lo largo de los años ha formulado y aplicado leyes, tratando de afrontar este problema social, sin embargo los resultados no han sido óptimos para poder combatir esta problemática (actos de violencia) que afecta a la sociedad y a la familia como célula fundamental de toda sociedad.

Actualmente contamos con la Ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, la Ley mencionada en su artículo 22 y su Reglamento en el artículo 37 establecen los Tipos de Medidas de Protección que pueden dictarse en los Procesos por actos de violencia contra las mujeres o los miembros del grupo familiar, estas medidas tienen como fin la protección inmediata de las víctimas de violencia, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, es decir esta norma vigente impone la atención inmediata por parte de los operadores de justicia, a fin de evitar que se siga

maltratando a la víctima; lo que se pretende en la presente investigación es investigar si las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia, en el periodo de enero a julio del 2018, garantizaron la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad víctimas de violencia familiar.

**Palabras Claves:** Violencia contra los menores de edad, efectividad, medidas de protección y derechos fundamentales de los menores de edad.

## **ABSTRACT**

The present research study "VIOLENCE AND MEASURES OF PROTECTION" (Study applied in the Second Family Court of Chiclayo, from January to July of 2018), its purpose is to investigate whether the protection measures issued by the Judge of the Second Family Court of Chiclayo are effective in order to guarantee the protection of the rights of minors when they are victims of family violence.

Violence against children and adolescents in our country is a reality that has persisted over the years and is a social problem that could not be combated for its eradication or at least decrease the rates of violence for this vulnerable sector . The violence exerted against them due to their situation of vulnerability, they denigrate their dignity and prevent a normal development of their integrity and personality, but the most alarming and worrisome is that children are victims of violence in their own family nucleus, this social phenomenon, present in today's society without distinction of race, geographic location, cultural level, religion, political or economic system, affects both the family and society. Therefore the Peruvian State over the years has formulated and applied laws, trying to address this social problem, however the results have not been optimal to combat this problem (acts of violence) that affects society and the family as the fundamental cell of every society.

We currently have Law No. 30364 (Law to prevent, punish and eradicate violence against women and members of the Family Group) and its Regulations approved by Supreme Decree No. 009-2016-MIMP, the Law mentioned in Article 22 and its Regulations in Article 37 establish the Types of Protection Measures that may be issued in the Proceedings for acts of violence against women or members of the family group, these measures are aimed at the immediate protection of victims of violence, especially those that are they find themselves in a situation of vulnerability, as is the case of children and adolescents, that is to say, this current norm requires immediate attention by the justice operators, in order to avoid further mistreatment of the victim; What is sought in the

present investigation is to investigate whether the protection measures issued by the Second Family Court, in the period from January to July 2018, guaranteed the protection of the fundamental rights of minors victims of family violence.

Key words: Violence against minors, effectiveness, protection measures and fundamental rights of minors.

## INTRODUCCION

La violencia es “cualquier acción o conducta que cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la víctima”, pero cuando tratamos de la violencia familiar, estamos hablando de un problema de índole social, porque esta no solo repercute negativamente a la familia sino a la sociedad, porque la familia es el pilar fundamental de toda sociedad, y si esta es afectada por ende la sociedad también es afectada. Por ello todo Gobierno - incluso el peruano - ha propuesto a lo largo de los años una serie de normas cuyo fin es enfrentar esta problemática sin embargo los resultados han sido infructíferos.

En la mayoría de los casos de violencia familiar, el agresor es aquel sujeto que posee poder y una situación privilegiada, por ello somete a sus víctimas a su voluntad, ordenando lo que deben hacer y no hacer, y en caso no obedezcan se siente legitimado de ejercer la fuerza física para castigarlo por el incumplimiento de sus órdenes. Por ejemplo, por lo general en las familias el sujeto con poder es el padre - ya sea porque es la fuente de ingresos o porque ejerce intimidación -, la esposa y los hijos deben obedecer al padre de lo contrario serán víctimas de violencia, e incluso esta violencia ejercida puede recaer hacia otro miembro de la familia (abuelo, primos, sobrinos, tíos) cuando comparten ese grupo familiar; no obstante el agresor también puede ser otro miembro familiar.

Las personas que son víctimas de violencia son aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la familia. En el caso de los niños, niñas y adolescentes al estar en una posición de vulnerabilidad, ya que tienen inferiores recursos para defenderse de lo que haría un adulto, este se aprovecha de su estatus de poder para violentarlos. Los menores de edad al estar en una etapa de formación y desarrollo, cualquier acto o conducta que afecte su dignidad e integridad (física, psicológica, sexual o moral), tiene consecuencias graves que afectan directamente a su personalidad, por otro lado los niños no solo pueden ser víctimas de una violencia física y/o psicológica cuando recaen directamente sobre él, sino también cuando son espectadores de la violencia, estas dos situaciones mencionadas - cuando los menores son víctimas directas e indirectas de la violencia familiar -, afectan inevitablemente a su desarrollo evolutivo a corto, mediano

o largo plazo; desde el punto de vista médico o terapeuta, estos actos de violencia, originan secuelas físicas, emocionales y psicológicas, ya sea adoptando una personalidad introvertida (inseguridad, culpa, vergüenza), personalidad depresiva (baja autoestima, insomnio, escaso rendimiento escolar) entre otros; desde el punto de vista jurídico se afecta los derechos humanos y fundamentales del menor, como su dignidad humana, integridad personal (física, psicológica, emocional o moral), libre desarrollo de su personalidad, derecho a la salud y el derecho a la vida porque al ser víctima de constantes maltratos entra en una fase de depresión, la cual es de tendencia al suicidio.

Por lo tanto es necesario la intervención del Estado Peruano, mediante las autoridades competentes para poder afrontar esta problemática –de violencia en el núcleo familiar-, en consecuencia de ello, se ha dictado a lo largo de los años varias normas con la finalidad para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pero la actual norma para combatir esta problemática social es la Ley N°30364 – se dictó el 23 de noviembre de 2015- y su Reglamento - aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP del 27 de julio de 2016-, en estas normas encontramos contemplados los mecanismos de protección que se deben dictar cuando una mujer o miembro del grupo familiar que se encuentran en situación de vulnerabilidad es víctima de violencia; por ello en el presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar, si estas medidas de protección previstas en la norma, las cuales son adoptadas y aplicadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, realmente garantiza la protección de los derechos de los menores de edad víctimas de violencia familiar, es decir si mediante estas medidas de protección, los menores de edad no vuelven a ser objeto de futuros actos de violencia por el agresor, de esta manera tutelándose los derecho a la integridad personal, desarrollo de la personalidad, dignidad humana, entre otros derechos fundamentales.

## **CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS**

### **1. ASPECTOS METODOLOGICOS**

#### **1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.**

##### **1.1.1. Planteamiento del problema.**

La violencia familiar es un problema de naturaleza social que ha existido desde la antigüedad, y sigue existiendo en nuestra realidad, por ello siempre es objeto de una serie de debates (académicos o legislativos), esta problemática no solo involucra a las víctimas sino también a toda la sociedad civil y al Estado, por lo tanto afecta a la familia como célula básica y principal de toda sociedad.

En la mayoría de los casos de violencia familiar, el agresor es el padre, que por poseer una fuerza física superior, somete a la esposa como a sus hijos, e incluso a otro miembro de la familia, cuando estos comparten ese grupo familiar, no obstante el agresor también puede ser la madre o algún familiar.

Por lo general las personas que sufren estas situaciones (violencia) son aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la familia. Por ello, quienes padecen estas situaciones –de violencia- tiene desconfianza y/o temor a denunciar lo que ocurre.

Las víctimas de violencia creen y se aferran a la idea de un cambio espontáneo de conducta del agresor, por otro lado aceptan las disculpas típicas del agresor, y creen las promesas que ya no lo volverá a hacer, también influye las convicciones religiosas y políticas; la cultura y los valores; la dependencia económica; el miedo al perjuicio social; la falta de confianza en la eficacia de los procedimientos jurídicos para el otorgamiento de medidas de protección; etc.

En el caso de los niños al estar en una posición de vulnerabilidad, tienen inferiores recursos para defenderse de lo que haría un adulto. En este sentido, el riesgo sería mayor porque trata de un sujeto con poder. Además se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. También debe tenerse en cuenta que los niños no solo pueden ser víctimas de una violencia física y/o psicológica cuando recaen directamente sobre él, sino también cuando son espectadores de la violencia, es decir viven en un hogar donde la violencia es algo normal o cotidiano en su vida, por lo tanto afectando su desarrollo evolutivo a corto, mediano o largo plazo; inevitablemente les originará secuelas físicas, emocionales y psicológicas; causando al menor temor, inseguridad, culpa, vergüenza, falta de concentración y escaso rendimiento escolar, baja autoestima, insomnio, depresión, falta de apetito, ira, estrés, ansiedad, enuresis (no contener la orina), entre otros; desde el punto de vista del derecho se afecta los derechos fundamentales del menor, como su integridad personal (física, psicológica, emocional o moral), desarrollo de su personalidad, dignidad humana, e incluso el derecho a la vida porque al ser víctima de constantes maltratos entra en una fase de depresión, la cual es de tendencia al suicidio.

Así mismo varios estudios universitarios o científicos han determinado que el 70%-80% de los agresores hombres han sido víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar en su infancia y/o niñez, entonces es importante y necesario la intervención del Estado, para protegerlos y orientarlos correctamente como futuros ciudadanos en valores; y el 70% de las mujeres adultas en su niñez han sido víctimas de violencia sexual por sus padres o algún familiar, generando un trauma que afecta directamente a la personalidad, es decir como consecuencia que en la infancia al ser víctima de este tipo de violencia no se pudo desarrollar y formar adecuadamente la personalidad del menor; también cuando las niñas viven en un hogar machista donde la violencia es predominante y ejercida por el padre, ella al ser protagonista y/o testigo de la violencia, su personalidad se va deformar, adoptando una personalidad introvertida, teniendo vergüenza, temor, inseguridad, baja autoestima, entre otros.



Por lo tanto es necesario la intervención del Estado Peruano, mediante las autoridades competentes para poder afrontar esta problemática –de violencia en el núcleo familiar-, en consecuencia de ello, se ha dictado a lo largo de los años varias normas con la finalidad para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pero la actual norma para combatir esta problemática social es la Ley N°30364 – se dictó el 23 de noviembre de 2015- y su Reglamento - aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP del 27 de julio de 2016-, en estas normas encontramos contemplados los mecanismos de protección que se deben dictar cuando una mujer o miembro del grupo familiar que se encuentran en situación de vulnerabilidad -por la edad o situación física- como el caso de las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, son víctimas de violencia (física, psicológica, sexual o económica). Mediante estos mecanismos de protección se pretenden garantizar a las víctimas, no vuelvan a ser objeto de futuros actos de violencia por el mismo agresor, de esta manera tutelándose los derechos a la integridad personal, desarrollo de la personalidad, dignidad humana, entre otros derechos fundamentales. Pero lo que nos importa en el presente trabajo de investigación es si estas medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, realmente garantiza la protección de los derechos de los menores de edad víctimas de violencia familiar.

### **1.1.2. Formulación del problema.**

¿Son efectivas las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo para garantizar la protección de los derechos de menores de edad, en los casos de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018?

### **1.1.3. Justificación e importancia del estudio.**

#### **1.1.3.1. Justificación del estudio.**

La razón de la presente investigación se justifica en determinar la efectividad de las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en garantizar la protección de los derechos de los menores, en el periodo de Enero a Julio

del 2018.

#### **1.1.3.2. Importancia del estudio.**

La presente investigación es relevante, debido al aumento de casos de violencia familiar en nuestro país, y de forma específica en la Provincia de Chiclayo, es decir esta investigación responde a un fenómeno social y jurídico, donde el número de casos reportados por los medios de comunicación, los cuales no todos son judicializados sino por el contrario forman parte de la cifra negra, surge la necesidad de investigar este problema actual de la sociedad.

Las víctimas que sufren este tipo de violencia son las más vulnerables, ya sea por su condición de sexo (por lo general mujer), edad o por su condición física -niño(a), adolescente, anciano, y discapacitado-, pero la presente investigación solo nos enfocaremos al menor de edad porque cuando este es víctima de violencia (física, psicológica o sexual) repercute notablemente en su desarrollo evolutivo ocasionándole al menor: i) Temor, inseguridad, culpa, vergüenza, falta de concentración y escaso rendimiento escolar, etc. (efectos en lo personal), y ii) baja autoestima, insomnio, depresión, falta de apetito, ira, estrés, ansiedad, enuresis (no contener la orina), entre otros (efectos en la salud); por otro lado varios estudios universitarios o científicos han determinado que el 80% o 70% de los agresores –por lo general los agresores son hombres- han sido víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar en su infancia y/o niñez, entonces es importante y necesario la intervención del Estado, para protegerlos y orientarlos correctamente como futuros ciudadanos en valores; también cuando las niñas viven en un hogar donde la violencia es usual y ejercida por el padre –por su condición de poder-, la menor al ser víctima y/o testigo de la violencia, su personalidad se va deformar, adoptando una personalidad introvertida, teniendo vergüenza, temor, inseguridad, baja autoestima, entre otros, por ello cuando ya son mujeres adultas toleran este tipo de violencia y no denuncia los maltratos realizados hacia su persona y a sus hijos.

Por lo tanto es importante esta investigación por que se pretende determinar si el

Estado peruano, a través de los Juzgados de Familia (órganos jurisdiccionales), específicamente en el Segundo Juzgado de familia de Chiclayo, las medidas de protección -previstas en la Ley N° 30364 y su reglamento- dictadas por su despacho, protege -y previene- al menor de futuros actos violentos por parte de su agresor (por lo general el padre), y por ende garantizarse la protección de sus derechos fundamentales (integridad personal, desarrollo de la personalidad, dignidad humana, entre otros derecho fundamentales).

## **1.2. Objetivos.**

### **1.2.1. Objetivo General.**

Determinar si las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo son efectivas para garantizar la protección de los derechos de los menores en los casos de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018.

### **1.2.2. Objetivos Específicos.**

- Cuantificar el número de resoluciones en las que se dictan medidas de protección a favor de los menores que fueron víctimas de violencia familiar, en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de Enero a Julio del 2018.
- Identificar cuales son las medidas de protección más comunes que se dictan en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores que fueron víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018.
- Delimitar si las Medidas de Protección dictadas, por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de las menores que fueron víctimas de violencia familiar, han sido oportunamente otorgadas para proteger a los menores de edad, en el periodo de Enero a Julio del 2018.
- Determinar si los agresores han cumplido las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de las menores que fueron víctimas

de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018.

- Verificar si la Policía Nacional del Perú cumple eficientemente su labor de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar, en el periodo Enero a Julio del 2018.

### **1.3. Hipótesis.**

Las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo no son efectivas para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad en los casos de violencia familiar, desde el periodo de Enero hasta Julio del 2018.

### **1.4. Variables.**

#### **1.4.1. Variable independiente.**

Las Medidas de Protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, desde el periodo de Enero hasta Julio del 2018.

#### **1.4.2. Variable dependiente.**

Protección de los derechos de los menores de edad víctimas de violencia familiar.

### **1.5. Métodos**

#### **1.5.1. Métodos Generales**

- **El Método Inductivo.**- en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizo este método, porque se demostro que de la revisión de determinado número de expedientes sobre casos de violencia familiar, el carácter no efectivo de las Medidas de Protección dictadas por el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad víctimas de violencia familiar.

- **El Método Deductivo.** -Partiendo de la importancia y necesidad social y jurídica de poder sostener de manera general la efectividad de las medidas de protección dictadas por los juzgados de familia, los cuales deberán ser tomados en cuenta por los operadores del derecho.
- **Analítico.** - Debido a que analizaremos cada expediente tramitado por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, específicamente el auto final que otorga las medidas de protección a favor de los menores, víctimas de violencia familiar, con el fin de obtener un análisis total del problema planteado.

### 1.5.2. Métodos Jurídicos

- **Literal.** – Porque analizaremos como regula el ordenamiento jurídico sobre las medidas de protección en los casos de violencia familiar, enfocándome específicamente en la protección del menor.
- **Sistemático.**- por cuanto el dictado de las medidas de protección obedece a principios y derechos contemplados en la constitución y al derecho en general.
- **Sociológico.** – se utilizará este método por cuanto la violencia familiar al ser un problema social que queja a la sociedad y al Estado peruano, es necesario analizarlo y saber los factores de su origen y existencia en la realidad, al menos de manera general y concisa, por otro lado, se encuentra las medidas de protección que el Estado a previsto para proteger a las víctimas de violencia de familiar, específicamente a los más vulnerables como es el caso de los menores de edad.
- **Dogmático.** – Siendo un método propio de las ciencias jurídicas que se ocupa de la “interpretación del derecho objetivo”<sup>1</sup> será utilizado para definir la violencia familiar

---

<sup>1</sup> RAMOS NUÑEZ, Carlos. Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Cuarta Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pag.100.

como problema social, y las medidas de protección reguladas y contempladas en el ordenamiento jurídico peruano, específicamente en la Ley N° 30364.

## **CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL**

### **2. MARCO CONCEPTUAL**

#### **2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. -**

Existen múltiples trabajos desarrollados que de alguna forma inciden en algunos aspectos de nuestra propia investigación, claro está que no desde el punto de vista que nosotros planteamos pero que, si reflejan ciertos lineamientos afines tales como la efectividad de las medidas de protección para garantizar la tutela de los derechos de los niños, en los casos de violencia familiar. Es así, que podemos mencionar investigaciones tales como:

##### **2.1.1. TESIS.**

La desarrollada por MELLADO SALAZAR, J. (2017), denominado “Medidas de protección dictadas por los juzgados especializados de familia en la tutela de las mujeres víctimas de violencia familiar, Huánuco 2015 – 2016”, realizada para optar el Grado Académico de Magister en Derecho Civil, planteo como objetivo general “Identificar las medidas de protección que dictan los jueces especializados de familia para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Huánuco, 2015 – 2016”, concluyendo que por lo general las medidas de protección han sido incumplidas y que solo el 5% de las medidas han sido cumplidas por los agresores.<sup>2</sup>

El desarrollado por BUSTAMANTE VERA, Laura (2016), denominado “Efectividad del cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la

---

<sup>2</sup> MELLADO SALAZAR, Julia. “Medidas de protección dictadas por los juzgados especializados de familia en la tutela de las mujeres víctimas de violencia familiar, Huánuco 2015 – 2016”. Tesis para obtener el grado académico de magister en Derecho Civil y Comercial. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huanuco, 2017, pp.18 y 113.

mujer”, realizada para obtener el título de abogado, planteo como objetivo general “Determinar si son efectivas las medidas de protección dictadas por el juez de familia en los casos de violencia contra la mujer, en el periodo enero – agosto del 2016, en la provincia de Canchis – Sicuani del departamento del Cusco”, concluyendo que las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia en los casos de violencia contra la mujer, en el periodo enero – agosto del 2016, en la provincia de Canchis – Sicuani del departamento del Cusco, no salvaguardan a las víctimas de manera efectiva, dado que las víctimas que han sufrido violencia manifiestan que sus agresores han vuelto a maltratarlas pese a que se dictaron medidas de protección por lo que señalan que sienten temor y desprotección por parte de las autoridades respectivas, sin que haya una acción conjunta y continua para el cumplimiento de las medidas de protección y por ende brindar tranquilidad a las mujeres víctimas de violencia.<sup>3</sup>

ALCÁZAR LINARES, A. y MEJÍA ANDIA, L., “Eficacia de los mecanismos incorporados por la ley N° 30364 para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Análisis de expedientes de los juzgados de familia de cusco diciembre-2015”. Tesis para obtener el título profesional de abogado, planteo como objetivo general Determinar si a través de la Ley 30364 se incorporan mecanismos eficaces para proteger a mujeres víctimas de actos de violencia, concluyendo que el procedimiento incorporado a través de la Ley 30364 para la emisión de medidas de protección es ineficaces. En efecto, dicha ley prevé que los Juzgados de Familia deben dictar medidas de protección en un plazo de 72 horas luego de ingresada la denuncia, buscando con ello una repuesta inmediata del Estado para proteger a las mujeres víctimas de actos de violencia, evitando con ello su repetición; y también que el procedimiento incorporado a través de la Ley 30364 para la remisión de los casos denunciados a la Fiscalía Penal es ineficaz.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> BUSTAMANTE VERA, Laura. “Efectividad del cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad Andina del Cuzco, Cuzco, 2016, pp. 11 y 105.

<sup>4</sup> ALCÁZAR LINARES, A. y MEJÍA ANDIA, L., “Eficacia de los mecanismos incorporados por la ley N° 30364 para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Análisis de

RIVERA CABALLERO, Julieta P., “Las medidas civiles de protección de los menores en los casos de violencia familiar”. Tesis para obtener el Título de Maestra en Derecho en el área terminal de Justicia constitucional, planteo como objetivo general analizar las acciones del Estado Mexicano en la búsqueda de adherirse a los diversos tratados internacionales en aras de la protección de la familia y en especial de los menores en los casos de violencia familiar, concluyendo que el Estado Mexicano además de adecuar su legislación, requiere de la generación de una nueva cultura y percepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos; recuperar y afianzar los valores éticos desde el interior de la familia, para con ello lograr adultos respetuosos de los derechos de los niños e impedir cualquier esbozo de violencia en su conducta. Esto es, conjuntamente con una regulación e infraestructura institucional que sustente y logre garantizar la protección y observancia de los derechos de la infancia, impulsar también una cultura social de respeto a los derechos de la infancia, conformándose de esta manera, un verdadero sistema integral que tutele los derechos de los niños; lo cual es indispensable en la actualidad, dado que es un hecho notorio que el resquebrajamiento social tiene su origen en las familias, máxime cuando existe violencia dentro de ellas. Así, la dirección de las políticas públicas en materia de menores, así como el sistema jurídico, debe tener lugar en el máximo nivel de decisión del país, dado que la infancia es un eje fundamental del Estado, y a pesar de que en la práctica no siempre ha sido considerada como tal, lo cierto es, que el desarrollo y evolución de cualquier país, depende de la prioridad que dé el mismo a la salvaguarda de los derechos de la infancia, independientemente de que además se trata de derechos humanos que el Estado debe cumplir y garantizar.<sup>5</sup>

### **2.1.2. ARTICULOS ESPECIALIZADOS. –**

-Los menores expuestos a la violencia de género: medidas civiles de protección (2011),

---

expedientes de los juzgados de familia de cusco diciembre-2015”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad Andina de Cuzco, Cuzco, 2017, pp.5 y 258.

<sup>5</sup> RIVERA CABALLERO, Julieta P., “Las medidas civiles de protección de los menores en los casos de violencia familiar”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad Autónoma de México, México, 2016, pp.10 y 40.



la autora es la Magistrada Auxiliadora Díaz Velázquez, jueza del Segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer-Las Palmas de Gran Canaria, mediante este artículo especializado la magistrada establece que los niños y niñas, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género son víctimas también de ese tipo de violencia, y como tales deben ser atendidos y contemplados por el sistema de protección. Así mismo la autora analiza que la atención integral a los niños y niñas, hijos de las mujeres víctimas de violencia de género debe ser abordada desde una perspectiva de género y una perspectiva de derechos. Concluyendo que: i) este tipo de violencia, asumida en ocasiones por los menores como “normal” afecta a su desarrollo emocional, social, cognitivo y físico, aparte de las lesiones físicas que hayan podido sufrir como consecuencia del maltrato, ii) las administraciones deben adoptar medidas apropiadas para su protección, sobre todo, cuando los menores viven en familias donde se ejerce este tipo de violencia, iii) es necesaria la adecuación del diseño y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios que se contemplan en el sistema de protección para evaluar y atender las necesidades de los niños y niñas de manera independiente a la atención que reciben sus madres, iv) los menores hasta ahora han sido invisibles para nuestra sociedad, como lo es a día de hoy, otras formas de violencia contra la mujer. Debemos comenzar a dar un paso hacia delante y solicitar por parte de la administración la realización de programas de recuperación e intervención específicos para los menores, respetando su individualidad como víctimas directas de la violencia de género, a través de medidas específicas de atención y protección en todos los ámbitos.<sup>6</sup>

-La Tutela de Prevención en los procesos por violencia familiar, por Marianella Ledesma Narváez, concluyendo que:<sup>7</sup>

a) La mejor respuesta que se brinde a la parte afectada en un proceso de violencia

---

<sup>6</sup> DÍAZ VELÁZQUEZ, María Auxiliadora. *Los menores expuestos a la violencia de género: Medidas Cíviles de Protección, Edición AJFV, N°3*. Las Palmas de Gran Canaria, Julio del 2016, p.13-14.

<sup>7</sup> Ledesma Narváez, M. (2017). *La Tutela de Prevención en los procesos por violencia familiar, Revista IUS ET VERITAS N° 54*, pp.172-183.

familiar será la que afirme las medidas de tuición a favor de la víctima y de los integrantes del grupo familiar violentado. Esto significa que la tutela judicial no solo debe estar orientada a materializar la punición o el resarcimiento en los casos de violencia; todo lo contrario, hay la necesidad de afirmar la tutela de prevención, a través de las medidas de protección.

b) El artículo 23 de la Ley, debe ser interpretado bajo parámetros constitucionales y no de simple legalidad, para afirmar lo siguiente:

b.1. No se puede equiparar los alcances de una medida de protección a la de una medida cautelar. Las medidas de protección seguirán vigentes, en tanto no haya desaparecido las condiciones de riesgo de la denunciante.

b.2. No se puede trasladar las categorías procesales propias de la tutela resarcitoria o de punición, a tutelas meramente preventivas o de tuición. Su escenario, será de no contienda, sino de tuición a la víctima.

b.3. La tutela preventiva, a partir de las medidas de protección, debe entenderse como una actividad judicial no jurisdiccional, unilateral, que no genera cosa juzgada.

c) Para abordar los temas de violencia familiar se requiere de jueces altamente activistas, que se comprometan con la tutela de prevención, al margen de la existencia o no del proceso penal. La naturaleza de la problemática así lo exige, por ello, cuando una o más personas se encuentren en un estado vulnerable, la tuición se torna altamente necesaria. El binomio riesgo-prevención debe activarse con la simple alegación de ser víctima de violencia.

-La violencia familiar un mal que se ha tornado en un problema cotidiano y que exige una solución integral, por Arturo Urbano San Martín y Marco Rosales Tuya,

concluyendo que<sup>8</sup>:

a) La familia como institución es la base de la sociedad, razón por la cual es importante y necesario el estudio de la violencia familiar, no solamente porque ocasiona daños en la vida emocional y social de sus componentes, la descomposición del núcleo familiar, sino también por las repercusiones que tendrá en la sociedad y el aumento en los índices de la delincuencia. La familia es donde el hombre aprende los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso los religiosos, y en base a ellos se relaciona socialmente. Por esta razón se debe expresar una auténtica educación que tenga como fin el desarrollo integral de la persona incidiendo en proporcionar, tanto en el hogar como en las instituciones educativas, además de conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas situaciones.

b) La violencia comienza en el hogar, por tanto, la violencia es aprendida a través del modo en que se relacionan sus integrantes y que se exterioriza con familiares, amigos, compañeros y otros miembros de la sociedad mediante actos de violencia comunes para quien vive en un ambiente en donde la agresión constante es una forma de vida. Por ello debemos remarcar que la comunicación es un mecanismo de prevención porque nos posibilita encontrar un espacio, ser protagonistas, aprender a respetar al otro; posibilita la capacidad de aceptar el error como incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda a superar las dificultades que se presenten.

c) La violencia en la familia es aquella que nace del ejercicio desigual de la autoridad en las relaciones de poder y de mando que surgen dentro del núcleo familiar y que se realiza periódica y sistemáticamente por un miembro de la familia, llamado agresor contra otro llamado receptor o víctima, a través de violencia física que, como lo hemos visto, es la más común, la psicológica o sexual, con el fin de mantener un estatus de jerarquía frente al receptor de las agresiones. Sin embargo, las víctimas

---

<sup>8</sup> San Martín, A. y Rosales Tuyá, M. (2014). *La violencia familiar un mal que se ha tornado en un problema cotidiano y que exige una solución integral*, Revista Investigaciones Sociales UNMSM-IIHS, Vol.18 (N°33), pp.217-226.

más frecuentes son las mujeres y los niños.

## **2.2. BASES TEORICAS**

### **2.2.1. VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LOS MENORES DE EDAD**

#### **2.2.1.1. DEFINICION DE VIOLENCIA**

Empecemos señalando ¿qué es la violencia?, la Real Academia de la Lengua Española, señala que la palabra Violencia proviene del latín violentia y significa “Cualidad de Violento. Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción de violar a otra persona, así mismo que es una fuerza física que aplica una persona sobre otra y que constituye el medio de comisión propia de algunos delitos, como el robo y los delitos contra la libertad sexual, entre otros”<sup>9</sup>.

El término violencia "deriva de la raíz latina vis que significa: vigor, poder, maltrato, violentarían, forzamiento, y a su vez de otro término latino, violo, que remite a los sentidos de: profanar, ultrajar, deshonorar<sup>10</sup>; entonces la violencia es aquel acto violento cuyo fin esa causar un daño, perjuicio o trato perjudicial a la integridad personal (salud física y/o psíquica de la víctima), la cual se puede producir en el nivel familiar, profesional, institucional o social<sup>11</sup>".

En doctrina se dice que la violencia supone "la utilización de cualquier medio físico o lógico (sic), por un individuo o grupo contra otro, destinado a inspirar temor o intimidación, o causar daño intencionalmente o voluntariamente"<sup>12</sup>, es decir la violencia es aquella acción (conducta o comportamiento) ejercida individualmente o

---

<sup>9</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2017), Rae.es: Definición de Violencia. Recuperado de: <http://dle.rae.es/?id=brdBvt6>

<sup>10</sup> NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos). Segunda Edición, Lima, EDICIONES LEGALES, 2014, p.11.

<sup>11</sup> Ibíd.

<sup>12</sup> AYVAR ROLDÁN, Carolina. Violencia Familiar, Interés de todos, Arequipa, Editorial ADRUS, Primera edición, 2007, p. 41.

colectivamente (por dos o más personas) destinada a producir un daño físico (golpes, empujones, cachetadas, entre otros) o psicológico (insultos, amenazas, entre otros) o sexual (tocamientos indebidos, relaciones sexuales no consentidas, mostrarle material pornográfico en contra de su voluntad, entre otros), cuyo fin es ocasionar en la víctima miedo, intimidación, subyugación o manipulación.

Para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto, o producido por maniobras políticas. El desequilibrio de poder puede ser permanente o momentáneo: en el primer caso, la definición de la relación está claramente establecida por normas culturales, institucionales, etc.; en el segundo caso, se debe a contingencias ocasionales. La conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza para la resolución de conflictos, se hace posible en un contexto de desequilibrio de poder, permanente o momentáneo.<sup>13</sup>

En el ámbito de las relaciones interpersonales, el comportamiento o conducta violenta del agresor, se debe a su status o poder, ya que al estar en una situación privilegiada o de mayor rango, cree que está facultado de ejercer cierto tipo de violencia sobre la víctima; por ello la violencia implica una relación de poder entre el agresor y agraviado, o victimario y víctima. Por ello Corsi, establece que la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra persona; es por eso que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de una persona hacia otra se denomina *relación de abuso*, y para comprender la dinámica de una relación de abuso es necesario definir con mayor precisión los conceptos de daño y poder<sup>14</sup>:

- Daño, entendido como cualquier tipo y grado de menoscabo para la integridad

---

<sup>13</sup> NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Op. Cit., p.14.

<sup>14</sup> CORSI, Jorge. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, Segunda Edición, 1997, p.24.

del otro. De ese modo, existen diferentes tipos de daño ocasionados en el contexto de una relación de abuso: daño físico, psicológico, familiar, etc.

- Desequilibrio de poder, en el que se basa toda relación de abuso, no es necesariamente objetivable para un observador externo. A menudo, es el producto de una construcción de significados que solo resulta comprensible desde los códigos interpersonales. Es suficiente que alguien crea en el poder y en la fuerza del otro para que se produzca desequilibrio, aun cuando una perspectiva «objetiva» no tenga existencia real.

Entonces, queda definido lo que se entiende por violencia, empero como cuestión final hay que completarlo con la distinción de las ideas de **agresión, abuso y maltrato**, que son muy manidas en la doctrina especializada. En efecto, respecto a la agresión hay que entenderla como la "conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o persona. La conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación de un instinto o pulsión de destrucción, como reacción que aparece ante cualquier tipo de frustración o como respuesta aprendida ante situaciones determinadas»<sup>15</sup>. Respecto al **abuso** debemos precisar que "se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación"<sup>16</sup>. En cuanto al concepto de **maltrato** "la Judicatura Nacional, ha observado que entre la definición de maltrato y violencia existe una línea tenue. Para muchos, la violencia contiene al maltrato; mientras que, para otros, los conceptos son distintos. De manera que habiendo diversidad de criterios, es menester buscar un lineamiento adecuado que

---

<sup>15</sup> NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Op. Cit., p.16.

<sup>16</sup> CORSI, Jorge: "¿Cómo se puede prevenir la violencia en la pareja?", en ECHE- BURÚA, Enrique y De CORRAL, Paz: Manual de violencia familiar, Siglo veintiuno de España Editores: Madrid, 2002, p. 177. Cit. por: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Op. Cit., p.18.

resuelva la problemática, puesto que en el primer caso se resuelve el conflicto a través de la vía establecida por la ley de violencia familiar, mientras que en el segundo se apertura un proceso de investigación tutelar cuyas implicancias a futuro será declarar al menor en estado de abandono y por ende promover posteriormente su adopción, rompiendo de esta forma su relación parental natural por la conducta de sus progenitores"<sup>17</sup>.

Pues bien, el fenómeno de la violencia en nuestro país, calificado por AMES de “omnipresente”<sup>18</sup>, tiene un origen cercanamente relacionado a la propia existencia del Perú como nación. Es que el Perú, como nación, surgió en virtud a la imposición violenta de la cultura española a la población del Incario. Tal encuentro, caracterizado por sus altas dosis de violencia, nunca fue resuelto a lo largo de los siglos, encontrándonos en una sociedad “estructurada sobre la violencia”<sup>19</sup>.

Estas manifestaciones de la violencia, sobre todo la de índole terrorista, ha condicionado en gran medida la situación de las familias peruanas en las dos últimas décadas, debido a sus efectos colaterales: desplazamiento, migración forzada, procesos de integración acelerados, etc.<sup>20</sup> Sin embargo una vez culminada esta violencia ejercida por este grupo subversivos- llámese Sendero Luminoso o MRTA, entre otros con la misma ideología-; el Estado y otras organizaciones recién empezaron a dar prioridad a la familia y a sus miembros, en especial a las mujeres y

---

<sup>17</sup> BELTRÁN PACHECO, Patricia: "El drama de la violencia familiar en el Perú", en *Revista Peruana de Derecho de Familia*. Lima: Diciembre, 2007, N° 2, p. 21. Citado por: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Op. Cit., p.18.

<sup>18</sup> AMES, Rolando. “Condiciones estructurales de violencia en el Perú”, en: A.A.V.V. Familia y Violencia en el Perú de hoy, Lima, 1986, p.16.

<sup>19</sup> AMES, ROLANDO, Op. cit., p. 16. Muy cercano Prado Saldarriaga subraya que “El incremento de la violencia familiar constituye un dramático resultado de la crisis social, económica y de valores por la que atraviesa la sociedad peruana”; así en: PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Sistemas penales comparados: Violencia en el ámbito doméstico y familiar (Perú)”, en: Revista Penal La Ley N° 10, Madrid, 2002, pág. 222.

<sup>20</sup> ESPINOZA MATOS, María Jesús (comp.). “Violencia en la Familia en Lima y el Callao”. Informe de resultados de la primera encuesta de hogares sobre vida familiar en Lima y El Callao, Ediciones del Congreso del Perú, segunda edición, Lima, 2001, p.40.

niños. El estado comenzó a proponer y realizar reformas (legales y/o políticas) para dar una mayor protección a los integrantes del grupo familiar, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños y niñas, personas de la tercera edad, y discapacitados), como consecuencia de estas reformas, surgió la derogada Ley N° 26260 (“Ley de protección frente a la violencia familiar”), posteriormente la vigente Ley N° 30364 (“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”). La violencia familiar es un fenómeno social de orden público que ha demorado su tratamiento debido a que en nuestro país ha existido siempre una especie de “tolerancia cultural” respecto al fenómeno de la violencia intrafamiliar<sup>21</sup>.

#### **2.2.1.2. DEFINICION DE VIOLENCIA FAMILIAR**

La violencia familiar según algunos autores; para Carolina Ayvar Roldán, la violencia familiar son “... las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y una de sus características es la cronicidad...”<sup>22</sup>; es decir la violencia familiar es el atentado directo o indirecto, a la salud, la vida, la libertad, la integridad moral, psicológica o física, producidos en el entorno de una relación familiar, siendo los cuadros habituales de esta caracterización los ataques ciertos, objetivos, físicos o psicológicos y aquellos en que los miembros, casi siempre los más desvalidos, presencian los actos de violencia familiar sin poder hacer nada en ese momento, debido a su inferioridad física o psicológica<sup>23</sup>.

El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia; entendida como la forma de interacción enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, siendo los dos ejes

---

<sup>21</sup> Ibíd. p.18; también: WAGNER, Karem. Op. cit., pp. 382-383.

<sup>22</sup> AYVAR ROLDAN, Carolina. Violencia Familiar. Op. Cit. p.45

<sup>23</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR (Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares)”. Lex y Iuris. Segunda Edición, Lima, 2013, p. 88.



de desequilibrio de dicho poder dentro de la familia el género y la edad. Además, es necesario subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica; por lo tanto, no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato aislado; constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares.<sup>24</sup>

Desde el punto de vista normativo, la derogada Ley N° 26260 establecía una definición para la violencia familiar, a diferencia de la actual Ley N° 303064 que establece dos definiciones: i) uno referida a la violencia contra las mujeres, y ii) contra los integrantes del grupo familiar. La derogada ley establecía que se entenderá por violencia familiar “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves”, que se produzcan entre: a. Cónyuges; b. Convivientes; c. Ascendientes; d. Descendientes; e. Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o f. Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.

La vigente ley N° 30364 en el primer párrafo del art.5, establece que la violencia contra las mujeres es “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”. Así mismo en su art.6, establece que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar “es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar”.

Como se puede apreciar en los párrafos precedentes, la actual ley a diferencia de la derogada ley, establece y define dos tipos de violencia contra quien se ejerce -una

---

<sup>24</sup> OPCIÓN, UNFV y MINISTERIO PÚBLICO: Violencia Familiar. Aspectos Sociales, Psicológicas y Adicciones, Lima: T. I, p. 44. Cit. por: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. Op. Cit., p.20.

referida a la violencia ejercida contra las mujeres y otra respecto a la violencia contra los integrantes del grupo familiar-, también incorpora la violencia sexual y la violencia económica, a diferencia de la derogada norma que solo precisaba maltrato sin lesión, amenazas o coacciones graves, debe entenderse que la actual ley ha prescindido de la definición de violencia familiar para incorporar dos definiciones contra quien se ejerce la violencia, sin embargo debe entenderse que la violencia familiar es aquella que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar, es decir la violencia ejercida por un integrante del grupo familiar contra los demás integrantes, así como lo define el art.6 de la ley 30364.

Conforme a lo descrito precedentemente, la violencia familiar puede manifestarse de diversas formas, ya sea violencia entre cónyuges, violencia hacia los niños, las mujeres, hacia los mayores de edad, los discapacitados, etc.

#### **2.2.1.3. CAUSAS GENERADORAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR**

Respecto a las causas generadoras de la violencia domestica recurriendo al mencionado “Informe de resultados de la primera encuesta de hogares sobre vida familiar en Lima y El Callao”, debemos mencionar un dato que consideramos necesario tomar en cuenta: los factores socioeconómicos son la principal fuente de problemas dentro de la pareja<sup>25</sup> y, en consecuentemente, en base a la influencia de los problemas de pareja en las relaciones paternales filiales de la familia<sup>26</sup>.

Las causas de la violencia en el espacio doméstico están directamente ligadas a los factores culturales y sociales que crean asimetrías entre hombres y mujeres. Los

---

<sup>25</sup> ESPINOZA MATOS, María Jesús (comp.). ob. cit., pág. 64. A distinta conclusión llega Tolentino Gamarra y otros, para quienes es la infidelidad la principal causa de maltrato sobre la mujer, con una incidencia de 28,3%; al respecto: TOLENTITO GAMARRA, Nancy y otros. “Violencia familiar desde una perspectiva de género”. Consideraciones para la acción, Promudeh, primera edición, Lima, 2000, p.92.

<sup>26</sup> TOLENTITO GAMARRA, Nancy y otros. Violencia familiar desde una perspectiva de género, Consideraciones para la acción, Op. Cit., p.94.

patrones culturales de relación, socialización familiar, educación formal y los sistemas legales definen las pautas de conducta aceptable para hombres y mujeres, las que son aprendidas desde la temprana edad y reforzadas a través de la presión de los padres, instituciones y medios de comunicación, a lo largo del ciclo vital del ser humano<sup>27</sup>.

La violencia familiar se origina en diferentes estratos sociales y lugares (área rural o urbana), sin embargo existe mayor incidencia en las familias que carecen de recursos económicos y que no tienen una formación cívica en valores. En realidad, la violencia familiar "se trata de un problema de mayor entidad porque su origen es estructural, es decir, nuestro propio sistema social y cultural, potencia que la mujer y los niños adopten una posición de subordinación con respecto al hombre"<sup>28</sup>.

Ya un reconocido penalista español como el catedrático Luis GRACIA MARTIN ha calificado que el fenómeno de la violencia domestica: "Se asocia fundamentalmente a estratos de población con bajo nivel económico y cultural, estigmatizados por la existencia en ellos de muy diversos "desordenes" subculturales"<sup>29</sup>. Ello, siguiendo a VASQUEZ MEZQUITA, se debería a que si bien en el entorno social medio y alto existe también problemas en el interior de las familias: "en estas se encuentra más desarrolladas las habilidades verbales y sociales para la expresión y canalización de la agresión"<sup>30</sup>.

Las afirmaciones propuestas por estos catedráticos españoles, si son aplicables a nuestra realidad, porque mayormente la violencia familiar o doméstica, tiene mayor incidencia en aquellos sectores o estratos sociales donde carecen de recursos

---

<sup>27</sup> NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Op. Cit., p.34.

<sup>28</sup> DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena: La Violencia Doméstica. Análisis Sociológico, Dogmático y Derecho Comparado. Editorial Comares, Granada, 2001, p.10

<sup>29</sup> GRACIA MARTIN, Luis. "Culpabilidad y peligrosidad criminal en el delito de violencia doméstica". Cit. por: REYNA ALFARO, Luis Miguel. "Delitos contra la familia y de violencia doméstica". Jurista Editores, Segunda Edición, Lima, 2011, p. 264.

<sup>30</sup> Ibíd. p. 265.

económicos y no han sido educados en valores para ser ciudadanos responsables y conscientes de sus actos, por otro lado la violencia se suscita pero con menor incidencia en el entorno social medio y alto de la sociedad, debido a que en este entorno la familia cuenta con los medios económicos necesarios para satisfacer sus necesidades, así mismo su nivel cultural (en valores) – y académico- ha sido desarrollado desde la niñez y/o infancia; no obstante si el agresor a pesar de haber recibido todo lo necesario para ser un ciudadano en valores, actúa de forma violenta y agrede a su familia o terceros, estaremos ante un disfuncional que debe ser reeducado, resocializado o sancionado. También es cierto, sin embargo, que existen otras causas detonantes de las disfunciones en la dinámica familiar de gran magnitud: la infidelidad y la incompatibilidad de caracteres. Eso muestra que la violencia doméstica puede afectar tanto a familias de bajos recursos como a las más adineradas<sup>31</sup>.

En síntesis, puede afirmarse que pese a que los factores económicos son los de mayor incidencia en las disfunciones de la dinámica familiar, ello no puede limitar los alcances del fenómeno de la violencia familiar a las clases sociales bajas. Estamos frente a una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto, sin distinciones<sup>32</sup>.

También debe tomarse en cuenta la probabilidad de que el agresor -hombre o mujer- haya sido en su oportunidad víctima o testigo del ejercicio de violencia en el seno de la familia durante su niñez, infancia o su adolescencia. Así, la psicóloga española Paloma PERLADO ha sostenido que “casi el 80% de los agresores han sido víctimas o testigos de malos tratos en el seno familiar”<sup>33</sup>.

#### **2.2.1.4. DEFINICION DE VIOLENCIA CONTRA LOS MENORES DE EDAD**

Para Ana María Arón, la violencia contra menores es "toda conducta que por acción

---

<sup>31</sup> REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Delitos contra la familia y de violencia doméstica”. Op. cit., p. 266.

<sup>32</sup> *Ibíd.*

<sup>33</sup> Cit. por: DE ESPINOSA CEVALLOS, Elena. La Violencia Domestica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho comparado, Op. Cit., pág. 18.

u omisión interfiera con el desarrollo físico, psicológico o sexual de los niños y jóvenes”<sup>34</sup>.

El Informe mundial sobre la violencia y la salud (OMS-OPS, 2002) define la violencia contra las niñas y los niños como “... el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas posibilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad”<sup>35</sup>.

La violencia contra menores o el "maltrato infantil es un problema social de primer orden. La violencia ejercida sobre un niño supone la máxima expresión de desamparo y desprotección, ya que se trata del ser más vulnerable de la unidad familiar. El principal problema que presenta el maltrato infantil es la gran dificultad de detectarlo porque queda encubierto por su propio entorno familiar y, además, es difícil distinguir los casos de negligencia de los supuestos de absoluta falta de capacidad de los padres para el cuidado de sus hijos.<sup>36</sup>

Por lo general las agresiones van dirigidas a la mujer, pero no solo es ella la receptora de dicha violencia que se suscita en el núcleo familiar; sino también suelen recaer en los hijos, al ser espectadores como se desarrolla la violencia entre sus padres o algún familiar que vive dentro del hogar familiar.

La violencia familiar que se origina en el hogar, tienen como beneficiario (receptor) directo a los hijos (menores), aun cuando éstos no hayan sido agredidos directamente,

---

<sup>34</sup> Cit. Por: AYVAR ROLDAN, Carolina: Op. cit., p.63.

<sup>35</sup> Cit. Por: COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA PROPONER LOS LINEAMIENTOS "PRIMERO LA INFANCIA" (2014, 30 de abril). Documentos técnicos de sistematización de evidencias como parte del trabajo elaborado por la Comisión Multisectorial para proponer lineamientos “Primero la Infancia”, aprobada por Resolución Suprema N° 413-2013-PCM. Recuperado de [file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/DT\\_Violencia\\_Menores.pdf](file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/DT_Violencia_Menores.pdf)

<sup>36</sup> DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena. La Violencia Domestica. Análisis Sociológico, Dogmático y de derecho comparado. Op. Cit., p.32.

es decir son testigos de la violencia que se desarrolla en el hogar.

La mayoría de la doctrina especializada afirma que los malos tratos hacia los niños no solo son acciones de maltrato físico (contusiones, golpes, empujones, heridas con instrumentos punzantes o cortantes, quemaduras por solidos calientes u objetos específicos, como cigarrillos, la plancha, etc.), o maltrato psíquico (coacciones, gritos, encierros prolongados, castigos excesivamente severos), sino que también se trata de maltratos por omisión<sup>37</sup>. Por tanto, también son malos tratos las carencias físicas, el abandono o falta de aporte alimenticio o de protección frente al frío y carencias afectivas, pues estas son igualmente nefastas para la evolución del niño. Aunque estas últimas, la omisión de atenciones vitales al niño aparecen con frecuencia asociadas a contextos de extrema precariedad<sup>38</sup>. Tratándose de aquel sector de la población, en el que los padres no pueden solventar todas sus necesidades básicas de la familia, y por ende no puede proporcionar una vida acomodada o adecuada –o digna- a sus menores hijos, surge la necesidad de preguntarnos: ¿Se debe sancionar a los padres por no otorgar un adecuado estilo de vida a sus menores hijos? O ¿El Estado debe intervenir en dichas familias, y brindar el apoyo necesario con el fin de garantizar una adecuada protección a los menores?, es evidente que no se solucionará nada sancionando a los padres, sin embargo si el Estado interviniera en dichas familias proporcionando los medios necesarios para la subsistencia de estos, y otorgar posibilidades de trabajos a los padres del menor, ya se estaría combatiendo este tipo de maltrato involuntario, porque los padres al tener al menos un salario mínimo vital cumplirían con las necesidades básicas del menor y de la familia en general, ostentando una vida digna y adecuada.

Así mismo las carencias afectivas en un modo pasivo de maltrato, porque todo niño para que pueda desarrollarse y crecer psicológicamente sano es necesario que reciba afecto, atención, apoyo y valoración; y al no recibir afecto en sus diversas

---

<sup>37</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR. Op. Cit., p.88.

<sup>38</sup> DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena. La Violencia Domestica. Análisis Sociológico, Dogmático y de derecho comparado. Op. Cit., pp.38-39

manifestaciones, las consecuencias serán negativas, repercutiendo directamente en la psiquis del menor y por ende en su personalidad. Este tipo de maltrato se caracteriza porque “el niño no tiene acceso emocional a sus padres, sufre períodos prolongados de incomunicación, se crea una barrera de silencio; y por la baja interacción con sus padres, se hace evidente la falta de atención aún con la presencia de estos; por ejemplo, no comer juntos, no compartir las experiencias cotidianas del niño, no preguntar ni menos aún asesorarlo en las tareas escolares, no velar por sus necesidades (salud, vestimenta, educación, etc.); y como consecuencias de la falta de atención frecuentemente los menores tienen accidentes, caídas, quemaduras, extravíos en la calle, enfermedades crónicas, etc.”<sup>39</sup>.

Cuando los menores de edad (niños, niñas y adolescentes) son espectadores o testigos –presencian- de la violencia en sus hogares, son ellos los que llevan la peor parte porque por ser seres vulnerables y aún no han desarrollado su personalidad, suelen sufrir traumas o secuelas -como consecuencia de presenciar la violencia-, los cuales perduran hasta la juventud o adultez sino son tratados por especialistas. Los niños, niñas y adolescentes no solo deben ser considerados víctimas, cuando las agresiones físicas o psicológicas recaen directamente sobre su persona, sino también cuando son testigos de toda la violencia desarrollada en sus hogares, porque repercute gravemente en la integridad física o psicológica del menor. “Aun cuando no hubieren recibido golpe o grito alguno; en estos casos no sólo se ve atacada la integridad física de la mujer sino también, y muy especialmente, la integridad psicológica o moral y cuando no física de los hijos y directamente por la especial posición de interdependencia que ocupan en la relación paterno o materno filial”<sup>40</sup>.

### **2.2.2. TIPOS DE VIOLENCIA**

Una vez descrito en los párrafos precedentes sobre la violencia y la violencia familiar, procederé a señalar e identificar los tipos de violencia ejercidos sobre las víctimas, los cuales son:

---

<sup>39</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR. Op. Cit., p.100.

<sup>40</sup> Ibíd. p.100.

**2.2.2.1. violencia física.** - es “la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación”<sup>41</sup>. Por ejemplo: golpes, empujones, jalones, patadas, aventar objetos para lastimar a la víctima, ahorcar o asfixiar, agredir con objetos punzocortantes, quemadura con cigarro e incluso disparo de arma de fuego, entre otras.

Se dice que "no hay violencia física sin previa agresión psicológica. Una vez conseguido el objetivo del dominio y control de la víctima, el agresor no suele detenerse en ese estadio: si no que, reforzado en su conducta, al haber obtenido la sumisión incondicional de la mujer, toma como una provocación la falta de respuesta de ella, y entonces pasa a la acción física. (...)”<sup>42</sup>.

El temor de la víctima a las represalias de su agresor – o la familia del agresor- impide muchas veces que se dirijan a un centro médico (postas, hospital o clínicas), para que sus lesiones sean atendidas, y más aun no tienen la fuerza de voluntad suficiente para poder denunciar a su agresor. Varios estudios universitarios o científicos desde el punto de vista de la psicología, han llegado a la conclusión que las lesiones de orden psicológico o psíquico que padecen las víctimas –de violencia física- son consecuencia de las agresiones físicas sufridas, especialmente en la niñez o infancia, no obstante las sufridas en la etapa de la juventud o adultez también pueden causar traumas pero significativos los cuales puede ser tratados por especialistas, en cambio las sufridas en la niñez causan bastante impacto porque deforman e impiden el normal desarrollo de la personalidad, causando una personalidad introvertida, baja autoestima, vergüenza, depresión, temor, e inseguridad.

---

<sup>41</sup> Art.8 literal a) de la Ley N° 30364.

<sup>42</sup> NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Ob. Cit., p.53.



**2.2.2.2. violencia psicológica.** - es “la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo”<sup>43</sup>. Por ejemplo: insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, omisiones, menosprecio, burlas, dejarle de hablar, avergonzarlos(as), menospreciarlos(as), decirles que son feos(as), compararlos con otros(as); amenazar con irse del hogar conyugal, dañar a los hijos; encerrar a cualquier integrante del grupo familiar; prohibirle salir o que los visiten; hacerles sentir miedo; hacer que los hijos o parientes se pongan en su contra; no tomarlos en cuenta, no brindarles cariño; amenazar con matarlos, matarse o matar a los hijos.

Este tipo de maltrato puede ser reflejo de diversas actitudes por parte del maltratador: hostilidad, que se manifiesta en forma de reproches, insultos y amenazas; desvalorización, que supone un desprecio de las opiniones, de las tareas o incluso del propio cuerpo de la víctima, e indiferencia, que representa una falta total de atención a las necesidades afectivas y los estados de ánimo de la mujer<sup>44</sup>.

La psiquiatra Marie-France Hirigoven causó una verdadera conmoción en Francia, con la publicación de su libro sobre el hostigamiento moral; donde muestra cómo es posible destruir por completo la personalidad de otro valiéndose de la violencia psíquica, hasta el extremo de que el ensañamiento característico de este tipo de violencia pueda compararse con un auténtico asesinato psicológico<sup>45</sup>. La reconocida psiquiatra nos quiere decir que los que ejercen violencia psicológica, pretender tener el control sobre su víctima, es decir desean que la víctima este una total obediencia

---

<sup>43</sup> Art.8 literal b) de la Ley N° 30364.

<sup>44</sup> ECHEBURÚA, Enrique y De CORRAL, Paz. Manual de Violencia familiar. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2002, p.2.

<sup>45</sup> Cit. por: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Ob. Cit., p.55

o subyugación, y de esta manera se lograría destruir la identidad personal de la víctima. Es un error interpretar que “la violencia psicológica sea una modalidad del maltrato de menor entidad que el maltrato físico: cuando en realidad es la fase primordial de todo maltrato, que desprovee a la víctima de su propia identidad”<sup>46</sup>.

En definitiva, la violencia psicológica es aquella conducta o acción que se manifiesta - o exterioriza - en forma de amenazas, intimidaciones, insultos, vejaciones, desprecios, entre otros actos que persiguen dañar la autoestima y la dignidad de la víctima.

**2.2.2.3. violencia sexual.** - son “aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación”<sup>47</sup>.

Tanto los estudios académicos como el trabajo directo realizado con las víctimas revelan que los padres -en proporciones muy superiores a las que públicamente se conocen- cometen abusos sexuales y violación con sus hijas, y en menor medida también con sus hijos. Los datos hasta ahora conocidos cifran en una proporción del 71% de las niñas frente al 29% de los niños, la probabilidad de sufrir abusos sexuales perpetrados por sus padres (López Sánchez, E. "Abusos sexuales a menores. Lo que se acuerdan de *mayores*" Ministerio de AA. Sociales Madrid, 1994); Judith Hermán en "Trauma j' "recuperación" (cap. "Abuso Infantil", Espasa. 2004, Madrid) afirma que "si en la vida adulta el trauma repetido erosiona la estructura de la personalidad formada, en la infancia forma y deforma la personalidad" hasta el extremo de que "la niña atrapada en un entorno de abusos (...) debe encontrar la manera de conservar un sentido de confianza en personas en las que no se puede confiar, de seguridad en una

---

<sup>46</sup> Ibíd. p.56.

<sup>47</sup> Art.8 literal c) de la Ley N° 30364.

situación que es insegura, de poder en una situación de indefensión"; el diagnóstico médico en estos casos suele ser casi siempre: "estrés postraumático."<sup>48</sup>

Luis Rolas Marcos, el psiquiatra español ejerciente en los Estados Unidos (1995), ha observado que muchos violadores, más que perseguir el placer sexual, lo que buscan es satisfacer de ese modo violento sus ansias de dominio, de competitividad, masculinidad y poder. Y esto se puede aplicar perfectamente al caso español. Siempre con la dificultad que representa la carencia u opacidad de los datos de que se dispone, teniendo en cuenta que en términos generales solo se denuncia una de cada seis agresiones sexuales; en el caso de que la violación provenga del esposo o conviviente, el porcentaje no llega al 1%; siendo esa impunidad con que cuenta el violador la razón de la ignorancia que sobre el particular se da en la sociedad<sup>49</sup>.

Sin embargo, durante la aplicación del programa integral se revela que las mujeres violadas por su pareja sufrieron, asimismo, en un 55%, abusos sexuales durante la infancia en la siguiente proporción: o bien por algún miembro varón de la familia (padre, abuelo, tío, hermano) con un porcentaje del 80%, o bien por ajenos a ella (vecinos o amigos varones) en cuantía del 18%; mientras que la violación por desconocidos está representada por el 2% restante (CARRMM. 1999)<sup>50</sup>.

La violencia sexual en sus diferentes manifestaciones (tocamientos indebidos, relaciones sexuales no consentidas, mostrar material pornográfico sin consentimiento, entre otros), repercute directamente a la psique de la víctima, implicando consecuencias (secuelas) psicológicas muy graves y por lo general de difícil recuperación, sometiéndose a tratamientos por especialistas psicólogos y/o psiquiatras. Estos actos de violencia deforman la personalidad de la víctima, - especialmente si la víctima es un menor de edad ya que está en pleno desarrollo- así

---

<sup>48</sup> Cit. por: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Ob. Cit., p.58.

<sup>49</sup> Ibíd.

<sup>50</sup> Ibíd.

mismo sienten soledad, indefensión, abandono, desconfianza, miedo y una total apatía por el prójimo, estas actitudes o sentimientos que tiene la víctima, las conlleva a no decir nada respecto a lo ocurrido, por ello cuando las someten a un interrogatorio –ya sea por la policía, el psicólogo, el fiscal o el juez- sobre los hechos ocurridos en el cual fue víctima de violencia sexual, optan por callar, porque desconfían de todos y prefieren olvidar antes que recordar.

Este tipo de criminalidad sexual - cometida sobre menores de edad- tiene efectos sumamente dañosos de órdenes no sólo físicos sino principalmente psicológicos y morales. En este sentido, la sentencia del 20 de enero de 1998, emitida por la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por los magistrados MORANTE SORIA/ PEÑA BERNAOLA/ MAITA DORREGARAY, cuyo fundamento séptimo refiere, en un caso de violación sexual cometido por un padrastro en agravio de su hijo varón de tan solo siete años de edad: “en el caso de autos, no sólo existe daño físico ocasionado al agraviado conforme lo establecen las pericias médicas ya señaladas, sino que además existe daño psicológico, por cuanto como ya se ha expuesto, el menor agraviado se encuentra trastornado por la agresión sexual de que ha sido víctima, sufre ansiedad y angustia por los recuerdos traumáticos vividos y ha tenido retroceso escolar, necesitando tratamiento psicológico para poder superar dichos recuerdos traumáticos; más aún, el daño moral que ha sufrido el menor, al ver destruida su confianza con la persona que ejercía sobre él la autoridad y la figura paterna, puesto que siempre conocía al acusado como si fuese su padre, llamándolo ‘papá’; daños incalculables materialmente, que repercuten en la salud mental y que siempre afectarán su desarrollo social y sexual, con el resquebrajamiento de los conceptos familiares”<sup>51</sup>.

**2.2.2.4. violencia económica.-** es cuando “la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier

---

<sup>51</sup> Negrita y cursiva es mío, disponible en: Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, N° 20, Lima, junio del 2000, pp. 192-199.

persona, a través de: 1. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 4. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”<sup>52</sup> .

Por lo tanto, la violencia económica en el ámbito familiar, son todas aquellas acciones u omisiones por parte del agresor -por lo general el padre por su condición de poder-, que causan menoscabo a los recursos económicos o patrimoniales de la familia, los cuales se han obtenido con esfuerzo por parte de los integrantes, y así mismo afecta la sobrevivencia de la mujer y de sus hijos(as). Este tipo de violencia se va a manifestar a través de: i) el despojo o la destrucción de los bienes personales de la víctima o de la sociedad conyugal, es decir el agresor por su condición de poder económico y ser la fuente de ingresos de la familia, se va aprovechar de dicha situación, para pretender vender o donar: la vivienda, los enseres o el equipamiento doméstico, los objetos personales de la víctima o de sus hijos -como la vestimenta, joyas, juguetes-, entre otros; ii) la renuencia del agresor de otorgar una pensión de alimentos a su cónyuge y a sus hijos, así como limitar los recursos económicos para que puedan satisfacer sus necesidades o no otorgar dichos recursos para que puedan ostentar una vida digna; y iii) limitar o controlar los ingresos de la víctima, es decir existe una explotación por parte del agresor hacia su víctima porque su remuneración o salario no es disfrutado por ella sino por su agresor.

Por lo tanto, la violencia familiar es todo acto o conducta que causa un daño físico, psicológico, sexual o económico, llevadas a cabo por un miembro del grupo familiar que por su condición de poder siente que tiene la potestad o atributo para intimidar y

---

<sup>52</sup> Art.8 literal d) de la Ley N° 30364.

controlar a la víctima, su característica predominante es la continuidad que es ejercida la violencia sobre la víctima, sin embargo, solo basta una agresión para que pueda identificarse como tal. Las víctimas de violencia familiar por su situación de vulnerabilidad pueden ser mujeres, niños(as), adolescentes, ancianos y discapacitados. Sin embargo, el presente trabajo de investigación nos interesa tratar sobre los menores de edad y los efectos o implicancias que puede generar la violencia sobre su persona, por ello a continuación trataré sobre los tipos de maltrato a menores (maltrato infantil).

### **2.2.3. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS MENORES DE EDAD (MALTRATO INFANTIL)**

La violencia hacia las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos y discapacitados) puede ser de varios tipos conforme lo descritos en los párrafos precedentes, pero para fines del presente trabajo de investigación, y para un mejor enfoque didáctico y pedagógico es necesario conocer las diferentes formas de maltrato (acción u omisión) hacia un niño, donde la relación de poder va a caracterizarlo.

A continuación se desarrollara sobre los **Tipos de Maltrato Infantil**<sup>53</sup>, y sus diferentes formas de clasificarlas, una de estas es la siguiente:

**a. Maltrato psicológico.** Se manifiesta a través del desprecio, insulto, rechazo, amenazas, descalificaciones, exponiendo al menor a hechos traumáticos, pudiendo provocar graves daños psicológicos. Igualmente, presionarlos o avergonzarlos para que sobresalgan en el colegio, deporte o vida social puede causarles un sufrimiento emocional crónico; es el más difícil de ser identificado y aún de ser probado.

**b. Maltrato físico.** Es cualquier acción que provoca daño en el cuerpo del niño, se

---

<sup>53</sup> OPCION, UNFV Y MINISTERIO PÚBLICO, Op. Cit. T.I. p.266 y sig. Cit. Por: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos), Op. Cit. p.76.

contempla desde una contusión leve hasta una lesión mortal; es un fenómeno que se manifiesta en grupos étnicos, religiosos, económicos y culturales, siendo, por lo tanto, la forma de maltrato más frecuente: puede incluir hematomas, cortaduras y/o lesiones internas, puede ser el resultado de uno o dos incidentes relativamente aislados, o bien constituir una situación crónica de abuso.

Las condiciones que predisponen a esta forma de maltrato incluyen una historia de maltrato en la familia de origen, sentimientos de inferioridad y baja autoestima, necesidad de control sobre el entorno, etc., mientras que los factores precipitantes son cualesquiera que sean percibidas por el adulto como amenaza a su control sobre la situación.

**c. Negligencia.** Podemos diferenciar dos tipos:

**c.1. Psicológica.** Es un modo pasivo de maltrato, no brindando afecto, atención, apoyo y valoración que todo niño necesita para crecer psicológicamente sano. Mientras más temprano se presente esta forma de maltrato, mayores serán las consecuencias en el niño. Se caracteriza porque el niño no tiene acceso emocional a sus padres, sufre períodos prolongados de incomunicación, se crea una barrera de silencio; y por la baja interacción con sus padres, se hace evidente la falta de atención aún con la presencia de estos; por ejemplo, no comer juntos, no compartir las experiencias cotidianas del niño, no preguntar ni, menos aún, asesorarlo en las tareas escolares, etc. Cuando los que están a cargo del niño no velan por sus necesidades, frecuentemente tienen accidentes, caídas, quemaduras, extravíos en la calle, enfermedades crónicas, etc.

**c.1. Física.** Se manifiesta cuando las necesidades físicas del niño, tales como alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones de riesgo y/o cuidados médicos no son atendidas temporal o permanentemente. En muchos casos, el niño ha padecido lesiones o daños físicos como consecuencia directa de la conducta negligente de sus padres o tutores, habiéndose requerido atención médica.

Esta negligencia en la conducta de los padres puede determinar que el niño presente retrasos importantes en su desarrollo (intelectual, físico, social, etc.)

**d. Abuso sexual infantil.** Es tal vez la forma de maltrato más difícil de aceptar. Las estadísticas muestran, según Corsi, lo grave del problema al determinar que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente abusados antes de llegar a los 16 años.

En más del 90% de los casos el abusador será masculino y en más del 80% una persona conocida por el niño. Esta forma de abuso incluye desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del menor.

Los menores de edad no solo pueden ser víctimas de una violencia directa sobre su persona e integridad, sino también son víctimas indirectas cuando son testigos y meros espectadores de la violencia ejercida en su hogar, por lo general la ejercida por el padre sobre su pareja (madre de los menores espectadores de la violencia). Por lo tanto, podemos definir que la violencia de género es “aquel poder conferido al varón sobre la mujer, que él aprende no sólo a instancias de la socialización sino, principalmente, cuando niños y niñas se ven obligados a soportar desde su infancia el ejercicio de esta violencia en el ámbito familiar”<sup>54</sup>.

La Unicef reconoce tres categorías de violencia intrafamiliar (Violencia de pareja, maltrato infantil y violencia contra las personas de la tercera edad), dependiendo quien es la víctima de los malos tratos, pero para fines de la presente investigación solo se mencionará a los referidos a la violencia contra los menores (ver tabla 1).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> PÉREZ DEL CAMPO, A. (2011, 09 de setiembre). Los Jóvenes frente a la Violencia de Género. REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, N° 86. Recuperado de: <file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/RJ86-07.pdf>

<sup>55</sup> ALARCÓN FORERO, Laura C., ARAÚJO REYES, Angélica P., GODOY DÍAZ, Andrea P., VERA RUEDA, Manuel E. (2010, 25 de MAYO). Maltrato infantil y sus consecuencias a largo plazo. Revista MedUNAB N° 13. Recuperado de: [file:///C:/Users/user1/Downloads/1155-Texto%20del%20art%C3%ADculo%20\(sin%20nombre%20de%20autor\)-3406-1-10-20100826.pdf](file:///C:/Users/user1/Downloads/1155-Texto%20del%20art%C3%ADculo%20(sin%20nombre%20de%20autor)-3406-1-10-20100826.pdf)



**TABLA 1: VIOLENCIA CONTRA LOS MENORES – MALTRATO INFANTIL**

Maltrato infantil: si las víctimas de maltrato o abandono son niños o niñas, y adolescentes hasta 18 años.	Maltrato físico	Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables	Empujones, golpes, bofetadas, zarandeo, quemaduras, etc.
	Maltrato emocional o psicológico	Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, ridiculizaciones, indiferencia y rechazo explícito o implícito hacia el menor o adolescente	Rechazo, aislamiento, aterrorizar, ignorarlos y corromperlos. Se incluye ser testigo de violencia de los padres.
	Negligencia	Falta de protección o cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo	No atención de necesidades básicas tanto físicas, sociales, psicológicas y/o intelectuales
	Abandono	Grado extremo de negligencia por parte de los adultos	El menor o adolescente es dejada sola en forma permanente por familiares o cuidadores; incluye: personas institucionalizadas que no son asistidas por sus familiares o si son obligadas a salir de la casa
	Abuso sexual	Cualquier clase de práctica sexual con un niño, niña o adolescente, por parte de un adulto, sea este un familiar o cuidador que tenga una posición de autoridad o poder sobre este.	<p>Abuso sexual: cualquier forma de contacto físico o no, con o sin acceso carnal, realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Incluye: penetración vaginal, anal u oral, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas.</p> <p>Agresión sexual: cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal con violencia o intimidación y sin consentimiento.</p> <p>Exhibicionismo: abuso sexual sin contacto físico</p> <p>Explotación sexual infantil: prostitución, tráfico sexual, turismo sexual.</p>

(\*) Fuente: Adaptado del libro “El Maltrato deja Huella”, editado por la UNICEF<sup>56</sup>.

Actualmente muchos estudiosos tratan el tema de la violencia de género como un tipo de violencia que también afecta al menor de edad, por ello algunos países ya contemplan una regulación legal para afrontar este problema social, en el caso peruano, este tema no está desarrollado a plenitud, ya que nuestros legisladores solo se limitaron a definir que la violencia de género es aquel tipo de violencia (física, psicológica, sexual o económica) ejercida sobre la mujer por su condición, es decir la violencia de género únicamente se configura cuando la víctima solo es mujer; a diferencia de otras legislaciones como la española, francesa, alemana, entre otras, ya tratan el tema de la violencia de género como aquella que afecta a los menores de edad por ser testigos de la violencia ejercida sobre su madre.

Los hijos e hijas de la violencia no son, como a veces se afirma con excesiva superficialidad, meramente “testigos” de la barbarie que desarrolla en la casa el perpetrador de tales agresiones (sean físicas, psíquicas, sexuales, económicas o de

<sup>56</sup> Cit. Por: Ibíd., p.105.

acoso litigioso, etc.); propiamente son víctimas directas de las mismas. Pues la dinámica del perpetrador es la de combinar una diversidad de formas coactivas como medio de mantener bajo control la sumisión familiar, y en este caso especialmente la de los hijos, que le servirán de instrumento eficaz para doblegar en tanto que madre cualquier eventual resistencia de la mujer.

Por lo tanto, la violencia contra los menores debe ser entendida como cualquier acción, conducta u omisión que les cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, en consecuencia afectándose la salud, desarrollo integral o dignidad del menor, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.

#### **2.2.4. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LOS MENORES DE EDAD**

Los menores de edad, pueden ser víctimas de violencia directa y/o indirecta, y esto implica una serie de consecuencias dañosas para el desarrollo integral y evolutivo del menor de edad. A continuación, se describirá las consecuencias que genera este tipo de violencia directa e indirecta:

La violencia Directa como ya lo hemos señalado, es cuando el menor sufre directamente violencia física, psicológica o sexual, y generando daños físicos, emocionales (psicológico), cognitivos y alterando el comportamiento:

- A nivel físico: aparecen retraso en el crecimiento, problemas de sueño, trastornos de la conducta alimentaria y síntomas psicosomáticos como alergias, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, etc.
- A nivel emocional: aparecen problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, déficit de habilidades sociales, estrés post-traumático y aislamiento social.
- A nivel cognitivo: pueden aparecer retrasos en el desarrollo verbal y del lenguaje y alteración del rendimiento escolar.

- A nivel de comportamiento: conductas violentas hacia los demás, inmadurez, déficit de atención, retraimiento y conductas autodestructivas.

El maltrato en la infancia, genera consecuencias negativas a largo plazo en su desarrollo evolutivo, integral y en su personalidad. Para poder desarrollar esta temática tomare como base lo desarrollado por la Institución Estadounidense CHILD WELFARE INFORMATION GATEWAY<sup>57</sup> (servicio de información financiado y ordenado por el Congreso de la Oficina de Niños de los Estados Unidos, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos):

#### **A. Consecuencias de la Salud Física**

Los efectos físicos inmediatos del abuso o la negligencia pueden ser relativamente leves (moretones o cortadas) o severos (huesos rotos, hemorragias o hasta la muerte). En algunos casos los efectos físicos son temporales; sin embargo, el dolor y sufrimiento que le causan a un niño no deben ser descartados.<sup>58</sup>

El abuso y la negligencia de menores pueden tener una multitud de efectos a largo plazo sobre la salud física. Según investigadores de NSCAW, “en algún momento durante los 3 años después de una investigación de maltrato, el 28 por ciento de los niños involucrados sufrieron de una condición crónica de salud”.<sup>59</sup>

Existen investigaciones sobre el maltrato infringido al recién nacido, denominado **Traumatismo craneoencefálico por maltrato o síndrome del bebé sacudido**, “es aquella lesión infligida a la cabeza y sus contenidos causada por una sacudida y un

---

<sup>57</sup> CHILDWELFARE (2013, noviembre). Consecuencias a largo plazo del Maltrato a Menores. Child Welfare Information Gateway. Recuperado de: [https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp\\_long\\_term\\_consequences.pdf](https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp_long_term_consequences.pdf)

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2007). Special health care needs among children in child welfare (NSCAW Research Brief N°. 7). Recuperado de [http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/special\\_health.pdf](http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/special_health.pdf)

impacto contundente, el traumatismo craneoencefálico por maltrato es la causa más común de muerte traumática para los bebés”<sup>60</sup>. Hay un desarrollo cerebral significativo que ocurre durante la infancia, y este desarrollo se ve comprometido en los niños maltratados. Una de cada cuatro víctimas del síndrome del bebé sacudido muere, y casi todas las víctimas experimentan serias consecuencias de salud<sup>61</sup>.

**A.1. Mala salud física.** Varios estudios han demostrado que existe una relación directa entre algunos tipos de maltrato de menores y la mala salud. Los adultos que experimentaron abuso de niños son más propensos a sufrir de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y del hígado, hipertensión, diabetes, asma y obesidad<sup>62</sup>. También existe una conexión entre condiciones particulares de salud física y tipos de maltrato. Según una investigación, niños que experimentaron negligencia estaban a riesgo más alto de diabetes y problemas pulmonares, mientras que el abuso físico incrementó el riesgo de diabetes y desnutrición<sup>63</sup>. Además, se ha comprobado que el maltrato de menores aumenta la obesidad en los adolescentes. Un estudio longitudinal encontró que niños que experimentaron negligencia tenían índices de masa corporal que incrementaron a una tasa mucho más rápida en comparación con niños que no habían sufrido negligencia<sup>64</sup>.

## **B. Consecuencias Psicológicas**

Los efectos emocionales inmediatos del abuso y la negligencia—aislamiento, miedo y desconfianza—pueden tener consecuencias para toda la vida, incluyendo

---

<sup>60</sup> Ibíd.

<sup>61</sup> Ibíd.

<sup>62</sup> Felitti, V. J., y Anda, R. (2009). The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders, and sexual behavior: Implications for healthcare. En R. Lanius, E. Vermetten, y C. Pain (Eds.), *The hidden epidemic: The impact of early life trauma on health and disease*. Recuperado de: [http://www.acestudy.org/yahoositeadmin/assets/docs/LaniusVermetten\\_FINAL8-26-09.12892303.pdf](http://www.acestudy.org/yahoositeadmin/assets/docs/LaniusVermetten_FINAL8-26-09.12892303.pdf)

<sup>63</sup> Widom, C., Czaja, S., Bentley, T., y Johnson, M. (2012). A prospective investigation of physical health outcomes in abused and neglected children: New findings from a 30 year follow-up. *American Journal of Public Health*, 102(6), pp. 1,135-1,144.

<sup>64</sup> Shin, S., y Miller, D. (2012). A longitudinal examination of childhood maltreatment and adolescent obesity: Results from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (AddHealth) study. *Child Abuse & Neglect*, 36(2), p. 84-94.

baja autoestima, depresión y dificultades interpersonales. Los investigadores han relacionado el abuso y la negligencia a las siguientes consecuencias:

**B.1. Dificultades durante la infancia.** - Cuando bebés y niños jóvenes entran en cuidado fuera de casa debido a abuso o negligencia, el trauma causado por el cambio en su proveedor de cuidado principal puede tener un impacto negativo sobre cómo experimentan vínculos positivos con otras personas<sup>65</sup>. Casi la mitad de los bebés en cuidado de crianza que han experimentado maltrato muestran alguna forma de retraso cognitivo y tienen un coeficiente intelectual más bajo, dificultades de lenguaje y desafíos neonatales en comparación con niños que no han sido abusado o descuidados<sup>66</sup>.

**B.2. Mala salud mental y emocional.** - Experimentar trauma y adversidad en la niñez, como el abuso físico o sexual, es un factor de riesgo para trastornos de la personalidad, la depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Un estudio usando datos del estudio ACE encontró que aproximadamente un 54 por ciento de los casos de depresión y el 58 por ciento de los casos de intento de suicidio en las mujeres estaban conectados a experiencias adversas en la niñez<sup>67</sup>. El maltrato de menores también afecta negativamente el desarrollo de la habilidad de regular las emociones, y esto a menudo persiste en la adolescencia o la edad adulta<sup>68</sup>.

**B.3. Dificultades cognitivas.** Investigadores de NSCAW encontraron que niños involucrados en denuncias comprobadas de maltrato estaban a riesgo de problemas severos de desarrollo y cognitivos, incluyendo el tener que repetir un

---

<sup>65</sup> Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2012). *Instability and early life changes among children in the child welfare system* (NSCAW Research Brief N°. 18). Extraído de <http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/resource/national-survey-of-child-and-adolescent-well-being-no-18-instability-and>

<sup>66</sup> ZERO TO THREE. (2011). A call to action on behalf of maltreated infants and toddlers. Extraído de <http://www.zerotothree.org/public-policy/federal-policy/childwelfareweb.pdf>

<sup>67</sup> Felitti, V. J., y Anda, R. (2009). Op. Cit.

<sup>68</sup> Messman-Morre, T., Walsh, K., y DiLillo, D. (2010). Emotion dysregulation and risky sexual behavior in revictimization. *Child Abuse & Neglect*, 34(12), p.967-976.

grado en la escuela<sup>69</sup>. En el reporte final sobre el segundo estudio de NSCAW<sup>70</sup>, más del 10 por ciento de los niños y jóvenes de edad escolar mostraron algún riesgo de problemas cognitivos o bajo rendimiento académico, el 43 por ciento mostraron problemas emocionales o de comportamiento y el 13 por ciento mostraron ambos<sup>71</sup>.

**B.4. Dificultades sociales.** Los niños que son descuidados tienen más probabilidades de desarrollar hábitos y rasgos antisociales a medida que van creciendo. La negligencia paterna o materna también está relacionada con los trastornos de la personalidad, problemas de vínculos positivos o de comportamientos afectivos con personas desconocidas o poco conocidas, el modelar comportamientos adultos inadecuados y la agresión<sup>72</sup>.

### C. Consecuencias en el Comportamiento

No todas las víctimas del abuso y la negligencia de menores experimentarán cambios en su comportamiento. Sin embargo, los problemas de comportamiento parecen ser más probables dentro de este grupo. Según NSCAW, más de la mitad de los jóvenes involucrados en denuncias de maltrato están en riesgo de un problema emocional o de comportamiento<sup>73</sup>. El abuso y la negligencia de menores parecen hacer que lo siguiente sea más probable:

---

<sup>69</sup> Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2012). Adolescents with a history of maltreatment have unique service needs that may affect their transition to adulthood. Extraído de: <http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/youthspotlight v7.pdf>

<sup>70</sup> Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2007). *Special health care needs among children in child welfare* (NSCAW Research Brief N°. 7). Extraído de: [http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/special\\_health.pdf](http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/special_health.pdf)

<sup>71</sup> Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2011). *NSCAW II baseline report: Child well-being*. Extraído de: [http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/nscaw2\\_child.pdf](http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/nscaw2_child.pdf)

<sup>72</sup> Perry, B. (2012). Supporting maltreated children: Countering the effects of neglect and abuse. Adoption Advocate. Extraído de: <https://www.adoptioncouncil.org/images/stories/documents/NCFAADOPTION ADVOCATE NO48.pdf>

<sup>73</sup> *Ibíd.*

Las dificultades durante la adolescencia. Los datos de NSCAW demuestran que más de la mitad de los jóvenes involucrados en denuncias de maltrato están en riesgo de tener que repetir un grado, abuso de sustancias, delincuencia, absentismo escolar o embarazo<sup>74</sup>. Otros estudios sugieren que los niños abusados o descuidados tienen más probabilidades de arriesgarse sexualmente al llegar a la adolescencia, aumentando así sus probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Las víctimas de abuso sexual de menores también corren un mayor riesgo de violación en la edad adulta, y la tasa de riesgo aumenta de acuerdo a la gravedad de la experiencia o las experiencias de abuso sexual de menores<sup>75</sup>.

La delincuencia juvenil y criminalidad adulta. Varios estudios han documentado la correlación entre el abuso de menores y la futura delincuencia juvenil. Los niños que han experimentado abuso son nueve veces más propensos a involucrarse en actividades criminales<sup>76</sup>.

El abuso del alcohol y las drogas. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que los niños abusados y descuidados tienen más probabilidades de fumar cigarrillos, abusar del alcohol o consumir drogas ilícitas durante sus vidas. De hecho, niños varones con una calificación ACE de 6 o más (han tenido seis o más experiencias adversas durante la niñez) tenían una mayor probabilidad, de más de 4,000 por ciento, de usar drogas por vía intravenosa en el futuro<sup>77</sup>.

### **C.1. El comportamiento abusivo.**

Los padres abusivos frecuentemente fueron abusados durante su propia niñez. Los datos del Longitudinal Study of Adolescent Health, un estudio longitudinal de la salud adolescente, mostraron que las niñas que experimentaron abuso físico durante

---

<sup>74</sup> Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2012). *Adolescents with a history of maltreatment have unique service needs that may affect their transition to adulthood*. Extraído de: [http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/youth\\_spotlight\\_v7.pdf](http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/youth_spotlight_v7.pdf)

<sup>75</sup> Felitti, V. J., y Anda, R. (2009). Op.Cit.

<sup>76</sup> Gold, J., Wolan Sullivan, M., y Lewis, M. (2011). The relation between abuse and violent delinquency: The conversion of shame to blame in juvenile offenders. *Child Abuse & Neglect*, 35(7), pp. 459-467.

<sup>77</sup> Felitti, V. J., y Anda, R. (2009). Op.Cit.

su niñez tenían del 1 al 7 por ciento más probabilidades de convertirse en autores de violencia juvenil y del 8 al 10 por ciento más probabilidades de cometer violencia interpersonal (o IPV, por sus siglas en inglés). Los niños varones que experimentaron violencia sexual durante la niñez tenían del 3 al 12 por ciento más probabilidades de cometer violencia juvenil y del 1 al 17 por ciento más probabilidades de cometer IPV<sup>78</sup>.

#### **D. Las Consecuencias Sociales. –**

Aunque el abuso y la negligencia de menores casi siempre ocurren dentro de la familia, el impacto no termina allí. Toda la sociedad paga el precio por el abuso y la negligencia de menores, tanto en términos de costos directos<sup>79</sup> como indirectos<sup>80</sup>. Los menores de edad no solo pueden ser víctimas de la violencia, cuando esta recae

---

<sup>78</sup> Xiangming, F., y Corso, P. (2007). Child maltreatment, youth violence, and intimate partner violence: Developmental relationships. *American Journal of Preventative Medicine*, 33(4). Extraído de: <http://www.ajpm-online.net/article/PIIS0749379707003492/fulltext>

<sup>79</sup> Los costos directos. El costo de por vida del maltrato de menores y las fatalidades relacionadas en 1 año asciende a \$124 mil millones, según un estudio financiado por los CDC. El maltrato de menores es más costoso anualmente que los dos principales problemas de salud, el derrame cerebral y la diabetes tipo 2 (Xiangming, Brown, Florence, y Mercy, 2012). Por otro lado, los programas que previenen el maltrato han demostrado ser más beneficiosos y menos costosos. El programa U.S. Triple P System Trial, financiado por los CDC, tiene una relación beneficio/costo de \$47 en beneficios para la sociedad por cada \$1 en costos del programa (Mercy, Saul, Turner, y McCarthy, 2011). **Cit. Por:** CHILDWELFARE (2013, noviembre). Consecuencias a largo plazo del Maltrato a Menores. Child Welfare Information Gateway. Recuperado de: [https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp\\_long\\_term\\_consequences.pdf](https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp_long_term_consequences.pdf)

<sup>80</sup> Los costos indirectos. Los costos indirectos representan las consecuencias económicas a largo plazo para la sociedad a causa del abuso y la negligencia de menores. Esto incluye los costos asociados con el uso incrementado del sistema de cuidado de salud, la actividad criminal juvenil y adulta, las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y la violencia doméstica. Prevent Child Abuse América calcula que las estrategias para la prevención del abuso y la negligencia de menores pueden ahorrarle a los contribuyentes \$104 mil millones cada año. Según el Schuyler Center for Analysis and Advocacy (2011), por cada \$1 gastado en servicios de visitas al hogar se obtiene un retorno de \$5.70 en la inversión en Nueva York, y esto incluye la reducción en denuncias comprobadas de abuso, la reducción en las inscripciones familiares en Ayuda Temporal Para las Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, o TANF, por sus siglas en inglés), la reducción en visitas a salas de emergencia, la reducción en la tasa de detenciones de madres y un aumento en ingresos mensuales. Un estudio encontró que todas de las ocho categorías de experiencias adversas de la niñez se asocian con un mayor riesgo de problemas de empleo, problemas financieros y el absentismo (Anda et al., 2004). Según los autores, estos costos a largo plazo, tanto para la fuerza laboral como para la sociedad, son evitables. **Cit. Por:** CHILDWELFARE (2013, noviembre). Consecuencias a largo plazo del Maltrato a Menores. Child Welfare Information Gateway. Recuperado de: [https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp\\_long\\_term\\_consequences.pdf](https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp_long_term_consequences.pdf)



directamente en su persona, sino también cuando estos son espectadores de la violencia, por lo general los menores son testigos como su padre agrede -física y/o psicológicamente – a su madre, este tipo de violencia ejercida indirectamente sobre el menor - al ser espectador de la violencia - es llamada violencia de Género.

En la Violencia (genero) encontramos tipologías sobre las consecuencias que implican; la mayoría de autores distinguen problemas físicos, emocionales, cognitivos, conductuales y sociales, que se originan ante la existencia de la llamada violencia de genero.

Para un mejor desarrollo pedagógico y didáctico, se tomará como referencia a Wolak (1998) y Barudy (2004), los cuales proponen la siguiente **tipología de las consecuencias de la violencia de género en los menores**<sup>81</sup>:

**a. Problemas físicos:**

- Retraso en el crecimiento.
- Trastornos de la conducta alimentaria (inapetencia, anorexia, bulimia)
- Dificultad problemas del sueño.
- Regresiones, menos habilidades motoras.
- Síntomas psico-somáticos (alergias, asma, eczemas, cefaleas, dolor abdominal, enuresis nocturna...)

**b. Problemas emocionales:**

- Ansiedad, Ira y Depresión.
- Aislamiento y Trastornos de la autoestima.

---

<sup>81</sup> BÓRRAZ PALLARÉS, R., LEDESMA VERA, R., GÓMEZ PRECIADO, G. Una mirada hacia los hijos e hijas expuestos a situaciones de Violencia de Género (Orientaciones para la intervención desde los Servicios Sociales en Aragón). [en línea], ARAGON: Instituto Aragonés de la mujer (IAM), pg.25 [consulta: 5 noviembre 2018]. Disponible en: [file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/menes\\_hijasas\\_mujers\\_victimass%20de%20violencia%20de%20genero.pdf](file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/menes_hijasas_mujers_victimass%20de%20violencia%20de%20genero.pdf)

- Trastornos del apego y de la vinculación.
- Estrés post-traumático y proceso traumático.

**c. Problemas cognitivos:**

- Retraso en el aprendizaje del lenguaje y desarrollo verbal.
- Retraso del desarrollo cognitivo.
- Alteración del rendimiento escolar.

**d. Problemas de conducta:**

- Violencia hacia los demás (agresión delincuencia, crueldad con los animales).
- Rabietas, desinhibiciones, inmadurez, absentismo escolar.
- Déficit de atención-hiperactividad.
- Toxodependencias.
- Conductas autodestructivas.

**e. Problemas sociales:**

- Escasas habilidades sociales.

Desde otros ámbitos se describe la sintomatología como problemas presentes en los menores de manera internalizada (cognitivas o emocionales) o de manera externalizada (problemas conductuales y sociales)<sup>82</sup>.

Los menores por su condición, están en pleno desarrollo de aprendizaje y formación de su personalidad, por ello al ser espectadores de la violencia, interiorizaran este tipo de conductas agresivas y cuando crezcan aplicaran u ejercerán estas conductas violentas, y lo grave de este problema es que cuando formen una familia lo transmitirán a sus hijos, convirtiéndose un ciclo de violencia intergeneracional; esta situación es llamada por los científicos como “transmisión intergeneracional de las conductas agresivas por aprendizaje durante la infancia, niñez y adolescencia”<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Ibíd. pg.26.

<sup>83</sup> Ibíd. pg.27.

### **2.2.5. DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD**

Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico peruano y en la Constitución Política, así como en los Tratados internacionales sobre derechos fundamentales, y específicamente sobre derechos de los niños.

En nuestro ordenamiento interno, contamos con el Código de los Niños y Adolescentes, que regula sobre los derechos de los menores, y dispone que los menores se les debe respetar los siguientes derechos: derecho a la vida e integridad (art. 1); a vivir en un ambiente sano (art.3); integridad personal (art.4); a la libertad (art.5); a la identidad (art.6); a vivir en una familia (art.8); a la libertad de opinión (art.9); a la libertad de expresión (art.10); a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art.11); a la libertad de tránsito (art.12), entre otros derechos<sup>84</sup>; pero el reconocimiento jurídico de estos derechos se ven reforzados por el primer párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes que dispone: “en la interpretación y aplicación del presente código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios ratificados por el Perú.”; de acuerdo a este artículo todos los derechos de los menores de edad deben ser interpretados y aplicados en conformidad con la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, y

---

<sup>84</sup> El Código del Niño y adolescente reconoce al menor una gama de derechos fundamentales, como el derecho a la integridad y la identidad, lo que implica mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral sin limitación, y, que se le reconozca y respete como un ser autónomo y distinto a los demás individuos. En seguida se les reconoce derechos económicos, sociales y culturales, así el niño, niña o adolescente tiene derecho a la educación, cultura, deporte, recreación; a trabajar en condiciones laborales justas y favorables; y, a la salud. Como es evidente nos encontramos ante el principio «favor minoris», fundamento principal en la interpretación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que concreta esa protección específica prometida en el título preliminar, reconociendo «prima facie» la defensa y salvaguarda preeminente de los intereses de los niños y niñas que coadyuve a un desarrollo armónico y equilibrado de su personalidad. Cit. Por: RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR (Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares)”. Op. Cit., p. 77.

cualquier otro tratados o convenio ratificado por el Perú (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos de Internacional de derechos Civiles y Políticos, entre otros), en este sentido las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño formarían parte de nuestro ordenamiento jurídico y serian de observancia obligatoria por voluntad soberana. La Constitución Política, establece en el artículo 4 que: “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”. Entonces vemos que los derechos de los menores se encuentran amparados tanto por nuestra constitución como en los tratados internacionales (Convención y Declaración sobre los Derechos de los niños).

El Código de los Niños y Adolescentes, reconoce que el niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica (Art. II del T.P). Así pues, desde una óptica constitucional y más concretamente legal, coherente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “se reconoce el principio de protección especial de los niños y niñas -menores de 18 años- que en buen romance no es otra cosa que brindar auxilio, ayuda, resguardo, salvaguarda, preeminentes en forma personal, específica y exclusiva a dicho grupo etario”<sup>85</sup>.

El Tribunal Constitucional al resolver el caso J.A.R.R.A. y V.R.R.A. en el expediente 01817-2009 -PHC/TC, que contiene el proceso de habeas Corpus promovido por Shelah Allison Hoefken, a favor de sus hijos identificados con las siglas precitadas en contra Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador (padre de éstos), dijo en sus fundamentos 6 y 7 de la sentencia que: «el constituyente ha reconocido el principio de especial protección del niño, que se fundamenta en la debilidad, inmadurez (física y mental) o inexperiencia en que se encuentran los niños, y que impone tanto al Estado como a la familia, a la comunidad y a la sociedad, entre otras acciones y deberes, la obligación de brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las medidas adecuadas de protección para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral”. “En buena cuenta, en virtud de este principio el niño tiene derecho a disfrutar

---

<sup>85</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR (Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares)”. Op. Cit., p. 75.

de una atención y protección especial y a gozar de las oportunidades para desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en condiciones de libertad y de dignidad. Por ello, ningún acto legislativo puede desconocer los derechos de los niños ni prever medidas inadecuadas para garantizar su desarrollo integral y armónico, pues en virtud del artículo 4 de la Constitución, el bienestar (físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del niño se erige como un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la sociedad, la comunidad, la familia y el Estado».

Está claro que además de los derechos que a toda persona humana les corresponde, el principio de protección especial del niño, es además una regla de acción que tiene lugar en todo ámbito normativo sustancial y adjetivo, pero sobre todo en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la salud, la educación, la protección de su familia que seguramente garantizará al niño o niña un adecuado desarrollo integral de su personalidad<sup>86</sup>.

En el ámbito Internacional, existen instrumentos en relación con los derechos de los menores; entre ellos tenemos:

- i) La Declaración Universal de Derechos Humanos, y en su art. 25.2 recoge expresamente el derecho de la infancia a cuidados y asistencia especiales.
- ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagran derechos ya reconocidos por otros tratados internacionales e incluso por el propio ordenamiento jurídico de cada país, pero impone a los Estados que los suscriben y ratifiquen ciertas obligaciones para su efectividad.
- iii) La Declaración de los Derechos del Niño de 1924, llamada Declaración de Ginebra, en la que se señalan cinco aspectos fundamentales: a) El niño debe ser

---

<sup>86</sup> Ibíd. p.77.

puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual; b) El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados, c) El niño debe ser primero en recibir socorro en caso de calamidad, d) El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación, y e) El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.

- iv) El segundo documento trascendental en materia de niños, está representado por la "Declaración de los Derechos del Niño", que fuera proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, enunciando una serie de derechos del niño proclamando como inicial principio el reconocimiento a todos los niños sin excepción, distinción o discriminación. En tanto que los derechos reconocidos son: la protección especial al nombre y a la nacionalidad, a los beneficios de la seguridad social, a cuidados especiales y, en su caso, a los que requieran sus circunstancias especiales, al entorno y amparo familiar, a la educación, a la prioridad de socorro y protección, a la protección contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, o prácticas discriminatorias<sup>87</sup>.
- v) La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea de las Naciones Unidas que entra en vigencia el 2 de septiembre de 1990.

Tratándose del Marco Internacional, en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959, de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU; adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386 (XIV), en cuyos principios 2, 6 y 9 se estableció

---

<sup>87</sup> Ibid.p.74

que: i) El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño; ii) El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole; iii) El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

A su vez, en el preámbulo de la citada Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990, y aprobada mediante Resolución Legislativa N° 25278, publicada el 4 de agosto de 1990, entro en vigencia el 4 de octubre de 1990, se recordó que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia, desde su procreación, tiene derecho a cuidados y asistencia especiales necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y que debería estar plenamente preparada para una vida independiente en sociedad y ser educada en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, particularmente, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, teniendo en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo.

Así en el artículo 19.1. de la citada Convención sobre los Derechos del Niño se

estableció lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.

Por lo tanto, el Estado Peruano tiene el deber supranacional (internacional) y constitucional de garantizar y proteger al niño, así mismo los padres y los miembros de la familia tienen la obligación de velar por ellos. El Estado Peruano tiene el deber de erradicar cualquier acto de violencia física, psicológica o sexual, ejecutadas en contra de un niño(a), ocasionado por sus propios padres, tutores o personas responsables de éstos; así como eliminar cualquier descuido intencional del niño al que se le niegan los cuidados y los elementos indispensables para su crecimiento y desarrollo, como sería alimentación, atención médica, salud, higiene, vestido y educación, entre otros.

Mediante la Convención sobre los Derechos del Niño, recién se comienza a dar prioridad a la protección de la niñez, este nuevo orden normativo de nivel internacional “se abandona la doctrina de la Situación Irregular y se pasa a la doctrina de la Protección Integral, es decir el niño o niña, titular de derechos legal y constitucionalmente garantizados”<sup>88</sup>. La Convención impone a los Estados firmantes que deben reconocer que los menores de edad (niños, niñas y adolescentes) son titulares de derechos fundamentales; por ende los Estados que la suscriben deben

---

<sup>88</sup> Ibid.p.75



adecuar sus normas, medidas sociales, mecanismos, instituciones a los postulados de dicha Convención. El contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño no es otra cosa que la versión de la Declaración Universal de Derechos Humanos en personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, incorpora un principio novedoso e interesante en virtud de la protección de los menores, este principio es denominado “el interés superior del niño”. Este principio está consagrado en el art. 3.1, en los siguientes términos: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño”. Este principio del interés superior del niño y del adolescente es reconocido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico mediante el artículo IX del Título Preliminar del Código del niño y del adolescente, dispone que: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”.

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos<sup>89</sup>, ha establecido en sus fundamentos 56, 57, 58, 59 y 60 de la Opinión Consultiva OC-17/2002, que este principio a favor del niño(a), tiene su fundamento en: 1) la dignidad misma del ser humano, 2) en las características propias de los niños, 3) en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, 4) en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así mismo la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior del niño (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización

---

<sup>89</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto del 2002. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_17\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf)

de todos los derechos contemplados en ese instrumento, se trata como puede verse de un punto de referencia para garantizar la vigencia efectiva de los derechos contemplados en la Convención, estamos hablando de las medidas concernientes a los niños, entiendo que se habla de las medidas restrictivas o extensivas para el ejercicio de sus derechos, contenidos en los artículos precitados y ciertamente de todos los reconocidos en la Convención y en nuestros instrumentos internos<sup>90</sup>.

## **2.2.6. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD VULNERADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR**

### **A. La Dignidad Humana. -**

Elena B. Marín de Espinosa Ceballos, citando a Gracia Martín sostiene; «la dignidad humana es un atributo totalizador, una síntesis de la totalidad de dimensiones físicas y espirituales específicas de la persona humana, traducidas en el mundo jurídico en una diversidad de bienes jurídicos personalismos diferenciados y de derechos personalísimos reconocidos constitucionalmente como fundamentales. Todo bien jurídico de carácter personalismo: vida, integridad física, salud personal, libertad, honor, etc. Es reconducible finalmente a la dignidad humana, de modo que todo atentado a cualquiera de dichos bienes supone, sin duda una lesión del respeto debido a la dignidad de la persona<sup>91</sup>.

La dignidad humana como fundamento último de los derechos fundamentales solo sería aceptable tras una vinculación con el valor libertad, aunque considera que lo que realmente se constituye en el fundamento último de los derechos no es la dignidad humana, sino, "la vida humana digna posición a que me siento adscrito pues entiendo que cada persona como ser individual tiene un particular proyecto de vida que se desarrolla conforme a su voluntad y que la concreción de ella hace que su vida

---

<sup>90</sup> Ibid.p.79.

<sup>91</sup> MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena B. "La violencia doméstica". Análisis sociológico dogmático y de derecho comparado, Edit. Comares S.L., Granada, 2001, pp. 175-176.

sea digna, ello evidentemente se desarrolla en un ámbito de libertad por ende no se puede hablar de dignidad si no es posible ser libre”<sup>92</sup>.

La dignidad humana constituye tanto un principio como un derecho fundamental; en tanto principio actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte de los operadores constitucionales, y como derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, donde las posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a exigir la intervención de los órganos Funcionales para su protección ante las diversas formas de afectación de la dignidad humana<sup>93</sup>.

#### **A.1. La dignidad humana como principio. -**

La dignidad como principio es un mandato de optimización; se entiende que dicho mandato opera a lo largo de todo proceso y no solo eso, su reconocimiento como derecho fundamental le otorga un status de derecho subjetivo, vale decir como una expectativa positiva y negativa adscrita a todo ser humano, y, aunque dicha consideración la circunscriben al ámbito de los operadores constitucionales, consideramos que nada obsta para que el operador de justicia de cualquier nivel tenga que tener en cuenta dicho principio, no solo en la aplicación y ejecución de las normas como lo precisa el Tribunal Constitucional, sino también en la creación, interpretación e integración de los dispositivos normativos sustanciales y rituales, adjetivos o procedimentales, como quiera llamárseles, más si la legitimidad del Estado y la sociedad se asienta precisamente en el respeto de la dignidad de la persona humana; siendo este un principio legitimador, confluye en ella: “ideas, postulados éticos, o criterios fundamentales, básicos, positivizados o no, que condicionan y orientan la creación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico escrito (legal y jurisprudencial) y consuetudinario”<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op. cit. p. 52.

<sup>93</sup> TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Consulta de causas, consulta 10 de noviembre del 2010, <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html>.

<sup>94</sup> TORRES VASQUEZ, Aníbal, “Introducción al derecho”. Op cit., p. 483.

Trasladada el principio a los mecanismos de protección legal frente al conflicto intrafamiliar, permitirá que se optimicen los procedimientos, suprimiendo y evitando los innecesarios o corrigiendo el contorno normativo de los existentes, lo cual es plenamente factible a la luz del paraguas normativo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el nuevo contexto jurídico del Estado de Derecho Constitucional, atribuyéndosele al actor jurisdiccional mayor activismo en la solución del caso, de tal manera que éste, al establecer parámetros de solución en el caso concreto, de un valor fijo y constante al nuevo modelo de Estado de Derecho, así, si la norma sustantiva o adjetiva no ha previsto un mecanismo efectivo de protección jurídica le corresponde al operador de justicia optimizar el principio generando reglas del caso que permitan adoptar mecanismos razonables y eficaces de protección de derechos fundamentales, dándole contenido regulativo a los principios<sup>95</sup>.

#### **A.2. La dignidad humana como derecho fundamental. -**

El Tribunal Constitucional es explícito al decir que como derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, donde las posibilidades de los individuos se encuentran legitimadas a exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección ante las diversas formas de afectación de la dignidad humana<sup>96</sup>.

Evidentemente el carácter axiológico de la dignidad humana, se ve reforzada por su reconocimiento como derecho fundamental, más, su efectividad, se concreta en la efectividad de los demás derechos, lo que incluye el ejercicio del derecho de acción como exigencia de tutela jurisdiccional efectiva, gracias al cual se asegure la paz, el bienestar de la persona u otros valores éticos que se decida adoptar o reconocer como fundamentales, máxime que: “todos los derechos humanos tienen su origen

---

<sup>95</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op. cit. p. 54.

<sup>96</sup> Ibídem, p. 55.

en la dignidad y el valor de la persona humana”<sup>97</sup> sin importar si éstos fueron o no positivizados; como puede verse el Tribunal Constitucional incorpora una protección jurídica autónoma para todos los derechos humanos cuyo origen sea la dignidad, estén o no ubicados en una fuente normativa determinada<sup>98</sup>.

Por lo tanto conforme lo expuesto, el menor de edad (niño, niña y adolescente) por su condición de ser humano y ser un individuo vulnerable, tiene derecho a que su dignidad humana se respetada y garantizada para el pleno goce y ejercicio de los demás derechos fundamentales, por ende no debe ser violentado, por ningún acto privado - por un familiar - ni acto público - de algún servidor o funcionario público -, porque si se llegar afectar no se permitiría que el menor ejerciera efectivamente el pleno goce de sus demás derechos (derecho a la salud, integridad persona, derecho al bienestar, libre de violencia, entre otros).

#### **B. Derecho a la vida. -**

Qué duda cabe, la vida es el primero de los derechos humanos reconocidos en los distintos ordenamientos jurídicos; y, es que la vida ocupa un lugar central y fundante en la sistemática de los derechos humanos, “es la piedra angular de donde emergen todos los derechos inherentes de la persona humana (...) para que sea efectivo el derecho a la vida, es imperativa su protección. El ordenamiento jurídico, a través de todas sus ramas, tutela este derecho, según la naturaleza de cada derecho sustantivo”<sup>99</sup>, y aunque como cualquier otro derecho humano, no es un derecho absoluto, la nota distintiva de dicha tutela radica en su inviolabilidad, pues, sin el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad de la vida, los otros derechos quedan frágiles o en expectativa, ello ha dado lugar a su consagración en los textos internacionales<sup>100</sup>(art.1 de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del

---

<sup>97</sup> NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra, Derecho internacional de los derechos humanos, Academia de la Magistratura, Lima, 2004, p. 31.

<sup>98</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op. cit. p. 55.

<sup>99</sup> ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas. Tercera edición, Editorial Huallaga, Lima, 2001, p.127.

<sup>100</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op.cit. p. 56.

hombre; art.3 de la declaración Universal de los derechos humanos; art.3 de la Convención Americana sobre derechos humanos; art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.6 de la Convención sobre derechos del niño), y en los textos nacionales (art.2 de la Constitución política peruana sobre derechos fundamentales; el art.5 del Código civil peruano sobre derecho de personas) .

El derecho a la vida, al interior de la familia no solo debe ser una expectativa de vivir, o la conservación de la propia vida, sino básicamente es la realización de una vida familiar armoniosa que suponga la conjugación de una interrelación en la que prime el respeto, la consideración, íntimamente relacionados con la libertad, la identidad y la integridad psicosomática<sup>101</sup>, en palabras de Carlos Fernández Sessarego, los derechos fundamentales de la persona humana como la vida, la libertad, la identidad y la integridad psicosomática son interdependientes. Se trata del núcleo de los derechos fundamentales, y los denomina "fundantes"<sup>102</sup>.

Tratándose de los menores de edad en ámbito familiar, al ser individuos vulnerables, dependen de sus padres o de algún otro familiar o tutor, de lo contrario su subsistencia estaría en peligro, entonces existe la obligación y el deber de los responsables de los menores de protegerlos y garantizarles un efectivo goce de sus derechos (derecho a un hogar, vestimenta, alimentos, educación, asistencia médica, entre otros), en este sentido el derecho a la vida no solo debe entenderse como un derecho que únicamente se limita a que todo individuo debe vivir o subsistir por su condición de ser humano (humanidad), sino que este debe vivir y desarrollarse en un ambiente digno y se pueda desarrollar con normalidad, es decir el derecho a vida como una de sus manifestación implica poder vivir en un ambiente sano, armonioso y libre de violencia.

---

<sup>101</sup> Ibídem.

<sup>102</sup> FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. "Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, En La Constitución comentada". Tomo I, obra colectiva, Lima, Gaceta Jurídica, 2005, p. 13.

### **C. Derecho a la identidad personal. -**

Como observa Fernández Sessarego. Se "es como se es", "con atributos, calidad virtudes, defectos, vicios, perfil psicológico, características, apariencia exterior, nombre, ideología, profesión, creencias filosóficas y religiosas, convicciones políticas, conducta, o acciones que corresponden exclusivamente a cada cual, demérito"<sup>103</sup>. Cada persona posee su propio pasado, y su personal proyecto de vida enderezado al futuro. Nadie pondrá en tela de juicio que la persona: "está representado por realidades tales como su cuerpo" -en cuanto inescindible unidad psicosomática- y su pasado, historia, su biografía, aquello que le permite proyectarse al futuro; y que ciertamente, constituye parte del mundo personal del sujeto que debe respetarse, en todo momento y en todo lugar, en ese sentido afirmamos que la protección del derecho a la identidad consagrada en el Art. 2.1 de Constitución peruana se extiende a todo el ámbito de las relaciones Interpersonales, y como no a los miembros de la familia, pues la identidad es básica del ser humano, tanto como si se tratara de mismo derecho a la vida que supone tomar decisiones en libertad, así se suele definir a la identidad como el centro de gravedad de la personalidad, claro está que al ser partes integrantes de una familia debe buscarse la procura de una identidad colectiva, respetando la singularidad de sus miembros, esto es respetando por ejemplo la opción sexual de los hijos, su opción política, creencias, etc.<sup>104</sup>. En suma "el derecho a la identidad es aquel que protege a la persona, lo que constituye su propio reconocimiento: quien y como es. Comprende diversos aspectos de la persona que «tan desde los más estrictamente físicos y biológicos (su herencia genética, sus características corporales, su personalidad, etc.) hasta los de mayor desarrollo espiritual (sus talentos, su ideología, su identidad cultural, sus valores, su honor, reputación, etc.)"<sup>105</sup>.

El Derecho a la identidad personal en el caso de los menores de edad, puede ser fácilmente violentado por la violencia ejercida hacia su persona, por lo general la

---

<sup>103</sup> Citado por: RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op.cit. p. 57.

<sup>104</sup> Ibídem. p.57.

<sup>105</sup> Ibídem. p.57.

violencia es desarrollada en el hogar o núcleo familiar, entonces el niño, niña y adolescente al ser víctima de violencia, no podrá desarrollar su identidad, en el sentido que la identidad al ser el núcleo de la personalidad, y esta le permitirá formarse como persona y ciudadano, al ser vulnerada no podrá desarrollarse a plenitud y los efectos en el futuro serían nefastos, porque su personalidad se habría deformado no pudiendo lograr un desarrollo físico, psicológico y espiritual como cualquier otro individuo; por otro lado la identidad también se vería afectada cuando los padres o responsables del menor no le prestan la debida atención, ya que estos son los responsables de la formación del menor, si bien estos no ejercen ningún tipo de violencia física hacia los menores, el descuido o negligencia también es un tipo de maltrato que afecta a la identidad del menor, por ejemplo en la mayoría de estudios se ha llegado a la conclusión que los niños y adolescentes que no son orientados por sus padres suelen cometer delitos por no recibir una adecuada atención y orientación por parte de sus padres, entonces es necesario para que los menores desarrollen con normalidad su personalidad sean orientados eficazmente. Por lo tanto es necesario, que los niños, niñas y adolescentes para que puedan desarrollar eficazmente su identidad personal, vivan en un hogar sin violencia ni negligencia.

#### **D. Derecho a la integridad moral, psíquica y física. -**

El derecho a la integridad es considerado como fundamental. Clásicamente se entiende que este derecho permite a la persona mantener la incolumidad de su cuerpo frente a posibles atentados de terceros que pretenden dañarlo de alguna manera. Se trata de un postulado abstencionista, traducido en una obligación general de índole negativa: prohibición y correspondiente sanción de los delitos personales, que coincide con el deber social de respeto para con el individuo<sup>106</sup>. Así la persona debe ser protegida no solo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integridad de su proyección<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de las personas. Op. cit., p. 140.

<sup>107</sup> TANZI, Silvia Y. “Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas”. Editorial Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, 2005, p. 196.



La integridad moral, psíquica y física, supone la prohibición de malos tratos o la tortura, venga de donde venga, sea como sea, no importa el contexto en que se dé, es así que el establecimiento del derecho a la integridad moral, psíquica y física, está destinado a proteger: la unidad estructural en que consiste la persona<sup>108</sup>, la moral como una de las bases en que se asientan la vida y las conductas de la persona, implican una dinámica en los comportamientos habituales (individuales y sociales) por los cuales se interactúan en conjuntos como la familia, la vida social de amistades (clubes deportivos, colegios, etc.) y en todo el sistema social, entonces la protección de la integridad moral implica la protección del sentimiento del sujeto, sus emociones<sup>109</sup>, lo que Gherzi dice los "modos de ser" en tal sentido es necesario reconocer, aunque sea redundantemente, que el ser humano es único y cualquier compulsión negativa que distorsione el modo de ser de la persona, aunque esta se dé en aras del interés familiar, siempre que pretenda transformar la personalidad del individuo y su conducta, de manera que el individuo difícilmente vuelva a ser el mismo constituirá un acto atentatorio de la integridad moral<sup>110</sup>. El profesor Sessarego dirá cualquier agravio al conjunto de principios y sentimientos que conforman la "moral" personal acarrea, como consecuencia, un daño psíquico que se configura como una perturbación de carácter emocional no patológica...<sup>111</sup>.

El derecho a la integridad, consagrada en la Constitución peruana en el Art. 2.1. también se extiende como puede verse al ámbito psíquico, ámbito que estimamos se diferencia de lo moral en su afección, pues mientras que la afectación de la integridad moral en sus efectos suele definirse como: el dolor, la pena, sufrimiento, angustia, aflicción, rabia y otras sensaciones similares que tienden a desaparecer

---

<sup>108</sup> Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. "Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, En La Constitución comentada". tomo I. Op. cit. p. 24

<sup>109</sup> Sobre el particular dice Carlos Alberto Gherzi, citando a Darwin: Cuando señalamos que una persona ha formado su personalidad, estamos apuntando a una determinada estructura emocional-sentimental (vulgarmente denominada "carácter") que se encuentra finalizada en su proceso de culturización social (como conducta en su disposición de actuar). Cit. Por: GHERSI, Carlos Alberto. "Daño moral y psicológico", segunda edición actualizada y ampliada". Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 48.

<sup>110</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op.cit. p. 58.

<sup>111</sup> Ibídem.

por su carácter transitorio; la afectación de la integridad psíquica en cambio va mucho más allá de ser una simple afectación de las emociones o sentimientos de la persona con carácter transitorio<sup>112</sup>, se trata como anota Carlos Alberto Gherzi de la alteración de la personalidad, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima (...) y que entrañe una significativa descompensación que altere su integración en el medio social, más adelante agrega que se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica<sup>113</sup>, el elemento distintivo entre la afectación de la esfera moral y psicológica estaría dado, en que el primero siendo una afectación también de la esfera psíquica, tiene connotación transitoria no patológica, en tanto que la esfera psíquica propiamente dicha, tiene que ver con una alteración profunda del psiquismo que se configura en una patología, y que a nuestro juicio puede tener un carácter permanente o transitorio<sup>114</sup>.

El Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia recaída en el expediente N° 018-96-1-1C al resolver una demanda de inconstitucionalidad (sobre la sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciados por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges), establece en el segundo párrafo del fundamento tercero de la sentencia que: ... “es deber del Estado y de este Tribunal orientar a la sociedad peruana hacia un status cada vez más civilizado y justo. Costumbres que vulneran derechos fundamentales como el de la integridad física y psicológica, el de la igualdad de los seres humanos, el de la dignidad personal y el derecho a gozar de una vida en paz, deben ser erradicadas de la sociedad por el Estado, la violencia entre marido y mujer sin importar donde ocurra, o que arraigada esté, es siempre violatoria de tales derechos constitucionales que

---

<sup>112</sup> Ibídem. p.59.

<sup>113</sup> Cfr. GHERSI, Carlos Alberto. Op. Cit. pp. 204 -205.

<sup>114</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op. cit. p. 59.

protegen a los seres humanos, todos ellos con dignidad, tengan o no cultura, tengan o no educación, tengan o no el peso de una costumbre primitiva y degradante”<sup>115</sup>.

Dentro de la doctrina nacional se ha establecido que la integridad psicosomática, constituye un interés existencial y por ello, el ordenamiento positivo nacional protege a la persona, frente a toda amenaza o agresión tendiente a menoscabar la integridad moral, psicológica o física, como puede verse, se trata del derecho de toda persona a la intangibilidad plena de sus potencialidades, con el fin de que pueda cumplir con su particular proyecto de vida, esto supone -cuando hablamos de los miembros de la familia- que ni la restricción de la autonomía privada impuesto por las normas del derecho de familia, o las conductas adoptadas y aceptadas por costumbre -cuanto más me pegas más te quiero- puedan o deban servir de justificación para transgredir la integridad psicosomática del individuo, es decir que las relaciones conyugales y paterno filiales ya no constituyen una estructura de subordinación o autoridad parental, dictatorial, totalitario, en el que muchas veces las conductas de sus integrantes fueron moldeados a la particular formación de la personalidad de quien se decía el fundador de la familia -el padre de familia-<sup>116</sup> como dice Ricardo J. Dutto: "Al perderse la identificación de la familia como estructura se acentúa la autonomía individual de sus miembros, cambios que llevan a la emancipación y a la afirmación del igualitarismo jurídico, a relaciones de coordinación y no de subordinación, a compartir la autoridad parental y dirección conjunta de la familia"<sup>117</sup>. Es preciso tener en cuenta que la relación de familia no puede implicar una valla al desarrollo del particular proyecto de vida de sus miembros y tampoco por ello puede constituir, el lugar en el que la integridad moral, psicológica y física se subyugue al más fuerte<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00018-1996-AI.pdf>

<sup>116</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. Op. cit. p. 60.

<sup>117</sup> DUTTO, Ricardo J. "Daños ocasionados en las relaciones de familia", Primera edición, Hamurabi, Buenos Aires, 2006, p. 53.

<sup>118</sup> *Ibíd.* p. 55.

Los niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas de violencia, se están afectando indudablemente a su integridad personal, y según lo explicado no solo se estaría afectando a su integridad (física, psicológica o moral) sino también a su libre desarrollo de la personalidad e identidad, es decir como consecuencia de violentarse la integridad de la víctima también repercutiría – se afectaría - en la personalidad del menor, por ello para que pueda garantizarse este derecho fundamental es necesario que se adopte medidas inmediatas y urgentes para prevenir trasgresiones a la integridad del menor o en el caso que el menor sea víctima de violencia sea inmediatamente apartado del agresor y sea sometido a un tratamiento para su recuperación, de esta manera se reestablecería la integridad de la víctima y pueda desarrollar su personalidad e identidad con normalidad.

#### **E. Derecho al bienestar. -**

En el año 2005, distinguidos juristas nacionales comentaron cada una de las disposiciones de nuestra Constitución, cuando allí se aborda, el análisis del derecho al bienestar, se hace notar que un sector de la doctrina, considera la noción de bienestar como equivalente a la de "salud integral", posición que estimo correcto, por ende, para hablar del derecho al bienestar es preciso que se desentrañe lo que se entiende por salud integral<sup>119</sup>. La organización mundial de la salud, define a la salud como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental y social, que una persona pueda alcanzar y no solamente como la ausencia de enfermedades; por consiguiente sobre el derecho al bienestar es correcto decir que se trata de un derecho fundamental de la persona por el cual la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de promover condiciones para que la persona alcance un equilibrio biopsicosocial que le permita desarrollarse integralmente en un ambiente de bienestar, “se le dice salud integral, porque el estado de bienestar ideal, solamente se logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos,

---

<sup>119</sup> *Ibíd.*

emocionales, mentales, espirituales y sociales, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida”<sup>120</sup>.

En el seno de la familia, seguramente se logrará éste bienestar cuando en la relación conyugal haya un clima de amor, pasión, ayuda recíproca, comprensión y tolerancia en el trato común y cotidiano y cuando en suma, haya una estable y equitativa relación familiar, en tal sentido no debe identificarse el concepto de bienestar con la expresión comodidad, pues ello conllevaría a suponer -por la amplitud de la noción de bienestar- que ésta se refiere a tener una vida material y espiritualmente abastecida que le permita al individuo vivir holgadamente, lo cual seguramente nunca podría alcanzarse, si tenemos en cuenta que los requerimientos materiales del hombre avanzan tal cual avanza la ciencia y la tecnología, y en igual forma los requerimientos espirituales nunca podrán ser del todo satisfechas, mientras no exista una forma de medir el amor, la pasión, la comprensión y tolerancia, en definitiva se trata más bien de armonizar derechos y deberes para garantizar la vigencia efectiva de los derechos denominados fundantes, ya que «La armonía entre los derechos, pues, exige el reconocimiento de los deberes que alcanza a todos los individuos» así, la garantía de bienestar entre los miembros de la familia pasa por garantizar la vigencia efectiva de una vida digna, lo que implica respetar su libertad, integridad moral, psíquica, física, la intimidad y el honor, correspondiéndole al Estado desarrollar políticas públicas para su protección, entendiendo que una política pública «se vincula a garantizar a los ciudadanos sistemas de protección frente a la emergencia de situaciones que puedan suponer un riesgo para el bienestar individual o familiar: enfermedad, incapacidad laboral, vejez, familia numerosa, son los ejemplos más frecuentes de riesgos vitales previsibles, protegidos por instituciones específicas administradas o reguladas por la autoridad estatal (...)»<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Salud integral, por: Bertha Sola Valdés, Fuente: esmas.com. En <http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/425179.html>

<sup>121</sup> GIL DOMINGUEZ, Andrés, VICTORIA FAMA, María, HERRERA, Marisa. “Derecho constitucional de familia”, tomo II, Primera edición, Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 895.

#### **F. Derecho a una vida libre de violencia.-**

Este derecho se encuentra reconocido en el inciso 22 y en el inciso 24 literal h) del art. 2 de la Constitución Política, disponiendo que: “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Por ende “nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes”. Podemos apreciar que la constitución reconoce que está vetado cualquier acto que transgreda la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y el descanso, pero no cualquier acto puede alterar la tranquilidad o paz privada, sino aquel que atente física, psíquica o moralmente a la víctima.

No solamente se encuentra reconocido en la Constitución, sino también en el artículo 9ª de la Ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), dicho artículo establece que “las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación”.

Este reconocimiento a nivel normativo no solo obedece a lo dispuesto por la Constitución sino a lo regulado por los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, es decir el Estado se compromete a que todo ciudadano viva sin ninguna interferencia violenta en su esfera privada, así mismo incluye los derechos a la no discriminación en todas sus formas, a la no estigmatización y a la no estereotipación en base a conceptos de inferioridad y subordinación.

En el caso de los menores de edad al ser un sector de la población vulnerable, debe ser protegido con mayor rigor, y adoptarse las medidas legislativas y sociales necesarias para que puedan vivir en un ambiente, llámese hogar o núcleo familiar, libre de violencia y por ende puedan desarrollarse física, psicológica y moralmente con normalidad.

### **2.2.7. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR**

El Estado peruano preocupado ante la problemática de la violencia en la sociedad, y su intención para poder garantizar la tutela (protección) de los derechos de las mujeres y de los miembros del grupo familiar en casos de violencia familiar –en especial los que se encuentran en situación de vulnerabilidad como en el caso de los niños y adolescentes-, establece medidas de protección que deben aplicarse ante este tipo de situaciones, por eso mediante la derogada ley N° 26260 y la actual N° 303064 se fijan medidas de protección que deben adoptarse para garantizar la protección y tutela de los derechos de las víctimas de violencia familiar.

Las medidas de protección concedidas a las víctimas de violencia familiar – como en el caso de los niños y adolescentes -, son importantes y necesarias para garantizar la vigencia y protección efectiva de la dignidad humana y otros derechos humanos (salud, vida, integridad personal, bienestar, etc.), en tal sentido sostiene Reynaldo Bustamante Alarcón: «el mundo actual se preocupa por defender la dignidad del ser humano y en promover sus principales derechos»<sup>122</sup>, por ello al producirse violencia en la familia (hogar familiar), es necesario el otorgamiento de medidas de protección porque mediante estas se garantiza la protección de los derechos de la víctima, y al ser la protección de la persona y su dignidad humana, el fin supremo de la sociedad y el Estado (art. 1 de la constitución), se debe otorgar inmediatamente las medidas de protección necesarias con la finalidad que protejan la integridad personal de la víctima ( integridad física, psicológica y moral de la persona). El otorgamiento de las medidas de protección responden a la necesidad de proteger los derechos de la víctima, y que no vuelva a ser objeto de violencia por su agresor; es decir lo que se busca con estas medidas es “restablecer el equilibrio biopsicosocial de la persona”<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. Derechos Fundamentales y proceso justo, Ara Editores, Lima, 2001, p.177.

<sup>123</sup> El [ser humano](#) es biopsicosocial. Su potencial está determinado por sus características biológicas (físicas), pero a su vez su accionar es influenciado por aspectos psicológicos (como deseos, motivaciones e inhibiciones) y por el entorno social (la presión que ejercen otras personas, los condicionamientos legales, etc.). Estos tres aspectos (bio, psico y social) no pueden escindirse, sino que constituyen un todo. La conducta del hombre, de hecho, constituye una unidad biopsicosocial. PÉREZ PORTO Julián, y GARDEY,

La derogada Ley N° 26260, establecía en el art.10 que las medidas de protección pueden ser adoptadas a solicitud de la víctima así mismo establece los tipos de medidas de protección que deben aplicarse como: i) el retiro del agresor del domicilio, ii) impedimento de acoso a la víctima, iii) suspensión temporal de visitas, iv) inventarios sobre sus bienes, y otras medidas de protección inmediata que garanticen su integridad física, psíquica y moral.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 04 de Setiembre del 2018), modifica el artículo 22 de la vigente ley N° 30364 estableciendo que medidas de protección deben dictarse, las cuales son: i) Retiro del agresor del domicilio; ii) Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine; iii) Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación; iv) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección; v) Inventario sobre sus bienes; vi) Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes; vii) Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo familiar; viii) Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora; ix) Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima; x) Tratamiento psicológico para la recuperación emocional



de la víctima; xi) Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este; xii) Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.

#### **2.2.7.1. SOBRE LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

En la doctrina y en la jurisprudencia existe una discusión sobre cuál es la naturaleza de las medidas de protección, una sector de la doctrina reconoce que son medidas autosatisfacías mientras otros lo niegan afirmando que son cautelares, y una tercera postura niega las dos primera. Por ello a continuación tratare sobre este debate para poder determinar desde mi punto de vista cual es realmente la naturaleza de las medidas de protección:

##### **2.2.7.1.1. MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS**

Waldo Núñez M. y Pilar Castillo Soltero nos dicen que en cuanto a la naturaleza de las medidas de protección; “en doctrina se concuerda (salvo por algunos otros sinónimos) que las medidas de protección dictadas por el Ministerio Público (actualmente con la dación de la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, las medidas de protección las otorga el juzgado de familia o mixto) son medidas autosatisfactivas es decir un mecanismo procesal para la tutela urgente de derechos”.<sup>124</sup>

La Naturaleza de las medidas de protección son autosatisfactivas y no cautelares porque las medidas cautelares son accesorias- dependientes a un proceso principal de naturaleza civil y cuyo fin instrumental es asegurar el cumplimiento de la sentencia que se emitirá en el proceso principal; en cambio las medidas autosatisfactivas de acuerdo a la legislación colombiana “se orientan a solucionar coyunturas urgentes y se agota en sí misma, es decir, es un proceso autónomo, en

---

<sup>124</sup> MARTEL CHANG, Rolando. Tutela Cautelar y Medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil. p.113.

el sentido de que no es accesorio de otro. Y este es el caso de las medidas que la ley enumera”<sup>125</sup>.

La ley de Violencia Familiar de Santa Fe dispone que Medidas de protección (denominadas Autosatisfactivas) se deben dictar ante situaciones de violencia, por ello el juez al tener conocimiento de esta situación se encuentra facultado, exista o no el informe (médico o psicológico), debe adoptar de manera inmediata las siguientes medidas: a) Ordenar la exclusión del agresor de la vivienda donde habita con el grupo familiar, disponiendo - en su caso - la residencia en lugares a los fines de control; b) Prohibir el acceso del agresor al lugar donde habita la persona agredida y/o desempeña su trabajo y/o en los establecimientos educativos donde concurre la misma o miembros de su grupo familiar; c) Disponer el reintegro al domicilio a pedido de quien ha debido salir del mismo, por razones de seguridad personal; d) Decretar provisoriamente cuota alimentaria, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes de similar naturaleza; e) Recabar todo tipo de informes que crea pertinente sobre la situación denunciada, y requerir el auxilio y colaboración de las instituciones que atendieron a la víctima de la violencia.

La legislación Colombiana denomina a las medidas que se dictan de manera urgente ante situaciones de violencia familiar como medidas autosatisfactivas, y el juez está facultado para expedirlas en la forma que estime más conveniente con el fin de proteger a la víctima, hacer cesar la violencia ejercida en su persona y evitar posibles agresiones que atenten contra su integridad.<sup>126</sup> En cambio la legislación

---

<sup>125</sup> Art.5 de la Ley N° 11529.

<sup>126</sup> Podrá asimismo, fijar a su arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica el tiempo de duración de las medidas que ordene, teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida; la gravedad del hecho o situación denunciada; la continuidad de los mismos; y los demás antecedentes que se pongan a su consideración. Posteriormente a la aplicación de las medidas urgentes antes enunciadas, el juez interviniente deberá dar vista al Ministerio Público y al presunto autor de la agresión a los fines de resolver el procedimiento definitivo a seguir., ya que una vez adoptadas, satisfacen por sí mismas el interés de la persona que las peticona y no están sometidas a la evolución de un proceso de fondo en el que se debate el derecho sustancial. (Aparicio, 2017, pág. 194)

peruana adoptado la denominación de medidas de protección, que en el fondo siguen siendo las mismas cuyo fin es garantizar y salvaguardar la integridad de la víctima.

Griselda Ferrari, comenta sobre el tema en debate al afirmar lo siguiente: “si bien todas las pretensiones merecerían un tratamiento rápido, existen situaciones en que se requiere ineludiblemente una respuesta inmediata, ya sea por las connotaciones de urgencia del caso, irreparabilidad del daño, infungibilidad de los bienes amenazados, etcétera. De lo contrario, la **demora** en el dictado de la sentencia, aun cuando esta haga lugar a lo reclamado, implicaría una dosis de injusticia, porque el transcurso del **tiempo** importaría un innecesario agravamiento del daño o no evitaría que el mismo se produjera”<sup>127</sup>. Sobre el mismo tema Martínez Letona indica que: “En el caso de la medida autosatisfactiva se está ante un requerimiento urgente, formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agota con su despacho favorable, no siendo entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Se trata de medidas que se caracterizan, al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión. No se trata de una medida cautelar, se asemeja a ella porque ambas se inician con la postulación de que se despache favorablemente e inaudita et altera pars un pedido y se diferencia en: 1. El despacho de la medida autosatisfactiva reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud con la que se contenta la diligencia cautelar; 2. Su dictado acarrea una satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante; y, 3. Se genera un proceso que es autónomo, en el sentido de que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo”<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> Cit. Por: BALCÁZAR QUIROZ, José. Teoría de las Medidas Autosatisfactivas: Una Aproximación desde la Teoría General del Proceso, Ara Editores, Lima, 2010. pág. 95.

<sup>128</sup> YAYA ZUMAETA, Ulises. Las Medidas Cautelares en el Derecho Procesal Civil Peruano, Idemsa, Lima, 2014, p. 155

## **A. CONCEPTO DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS**

Jorge Peyrano, define a la Medida autosatisfactiva como un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional que se agota (de ahí lo de autosatisfactiva) con su despacho favorable, así como el propio termino Medida autosatisfactiva -que a la postre seria la expresión más reconocida y extendida en los círculos científicos-, termino éste que le hizo abandonar la expresión que adopto originariamente (proceso urgente).<sup>129</sup> De acuerdo a la definición otorgada a la medida autosatisfactiva, podremos decir que es aquella que se otorga mediante un proceso urgente e independiente, cuyo fin es la solución inmediata de conflictos de intereses o alguna incertidumbre jurídica.

La medida autosatisfactiva al ser un proceso urgente no cautelar, implica una inmediata y oportuna intervención del órgano jurisdiccional para salvaguardar los derechos e intereses de la víctima. Al no ser de naturaleza cautelar, no depende de un proceso principal para su vigencia e implementación, sin embargo su dictado está sujeto a los siguientes requisitos: “conurrencia de una situación de urgencia, fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, quedando la exigibilidad de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial”<sup>130</sup>.

Por lo tanto, las medidas urgentes satisfactivas “son mecanismos de tutela diferenciada más concretamente de tutela urgente, que buscan dar satisfacción inmediata a quien requiere de tutela jurídica en situaciones de urgencia, la cual no puede ser atendida por la tutela ordinaria, pues colapsaría y se vulneraría irremediabilmente el derecho que se busca proteger con una medida de esta naturaleza, esta tutela urgente no es instrumental, ya que no requiere llevar la discusión a otro proceso y se agota con su ejecución”<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> *Ibíd.* p.120

<sup>130</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. *Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar*, Jurista Editores, Lima, 2018, p. 198.

<sup>131</sup> HURTADO REYES, Martin. *Tutela Diferenciada*. Palestra Editores, Lima, 2006, pp. 307-308.

## **B. PRESUPUESTOS PARA EL DICTADO DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS:**

Las medidas autosatisfactivas únicamente será dictas, siempre y cuando reúnan determinados presupuestos, los cuales son:

- a. Requerimiento Urgente.-** significa que la pretensión del recurrente debe ser atendida inmediatamente, de lo contrario se produciría un daño inminente e irreparable.
- b. Fuerte Probabilidad.-** este requisito, que ha sido denominado por la doctrina, significa que la pretensión del recurrente tenga sustento jurídico. En tal sentido, “el derecho o interés invocado por el demandante se debe aparecer prima facie como manifiesto y suficientemente probado (respaldado por los diversos medios probatorios admisibles que demuestren seriamente que lo postulado resulte atendible jurídicamente) para que el juez arribe a la conclusión de que hay una fuerte probabilidad, de que le asiste razón en su pretensión”<sup>132</sup>. Entonces, para que la medida autosatisfactiva sea otorgada, es necesario que el solicitante pruebe la veracidad de su relato factico, es decir al momento de solicitar las medidas debe acreditar las afirmaciones de los sucesos de los hechos, mediante medios probatorios contundentes y fehacientes (documentales, periciales, testimoniales, etc.), de lo contrario no se podrá determinar la veracidad de lo solicitado. Sin embargo, los medios probatorios para acreditar la veracidad de lo solicitado es relativo, puesto que solo es necesario generar el convencimiento (convicción) al juzgador para el otorgamiento de las medidas autosatisfactivas.
- c. Prestación de Contracautela.-** “La necesidad o no de otorgar contracautela, y su alcance en miras a obtener el dictado de una medida autosatisfactiva, deberá determinarse por el prudente arbitrio del juez, de acuerdo a las

---

<sup>132</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Op. Cit. p. 202.

circunstancias de cada caso concreto en que le sea sometida a su decisión, considerando, como punto central, que la exigencia de una contracautela se encuentre en relación lógica con lo petitionado y con la irreversibilidad del anticipo de la tutela. De esta manera, si el objeto de la prestación está destinado a consumirse por el uso del demandante es procedente la exigibilidad de que otorgue contracautela; empero, si el objeto no se consumirá o no desaparecerá en su esencia se debe dictar la medida sin asegurar el pago de futuros daños y perjuicios, es decir, sin que se otorgue contracautela”.<sup>133</sup>

### **C. CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS**

Según lo expuesto en los acápites precedentes podemos determinar que las medidas autosatisfactivas tienen las siguientes características:

**C.1. AUSENCIA DE INSTRUMENTALIDAD.-** Las medidas urgentes satisfactivas, no son instrumentales a diferencia de las medidas cautelares, porque no dependen de un proceso principal, son independientes, es decir no tienen dependencia ni instrumentalidad y accesoriedad con otro proceso. La medida cautelar, una vez otorgada se debe posteriormente interponer demanda dentro del plazo previsto, originándose un proceso principal, de lo contrario se dejara sin efecto dicha medida, en cambio una vez emitida la medida urgente satisfactiva el beneficiario no tendrá necesidad de interponer demanda alguna, por ello se dice que es absolutamente autónoma.

**C.2. ES URGENTE.-** Las medidas autosatisfactivas son de carácter urgentes porque requieren de una solución inmediata del órgano jurisdiccional. Esta característica no responde al principio de economía y celeridad procesal, sino más bien a la intervención inmediata del órgano jurisdiccional para neutralizar, detener e impedir actos que vulneran derechos no patrimoniales (derecho a la

---

<sup>133</sup> MARTEL CHANG, Rolando. Tutela Cautelar y Medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil, Op. Cit. pp.172 – 173.

vida, integridad, bienestar, dignidad, entre otros), porque sin la intervención inmediata el daño podría ser irreparable.

**C.3. SE DICTA INAUDITA ET ALTERA PARS O INAUDITA ALTERA PARTE (se ordena sin oír previamente a la parte contraria).-** Las medidas autosatisfactivas buscan un resultado satisfactorio inmediato, es que “se despacha sin oír a la otra parte, es decir sin citar ni oír a la otra parte, suspendiendo el principio de bilateralidad en cesión, sin embargo en caso de que el requerimiento tenga un resultado favorable, deberá abrir la posibilidad de la vía recursiva con el propósito de evitar cualquier tipo de arbitrariedad judicial y en busca del cumplimiento del derecho de defensa y doble instancia”<sup>134</sup>.

El principio de bilateralidad es limitada por un interés superior que es la protección inmediata y efectiva del solicitante (víctima) , por ello se requiere que el órgano jurisdiccional actúe de manera inmediata, prescindiendo de escuchar a la víctima – mediante declaración o en audiencia - sin embargo este principio no se estaría afectando porque existe la posibilidad de impugnación, la cual no admite la discusión a priori, respecto de la tutela que se debe expedir

“El dictado de resoluciones judiciales sin oír a la otra parte, no son cotidianas en el proceso civil, son más bien una modalidad de resolver situaciones especiales y de urgencia, donde no se debe oír a la parte contraria, a fin de evitar que ésta obstruya o haga imposible el cumplimiento de lo que se va a decidir, pero es justamente esta situación de urgencia la que posibilita la flexibilidad de los principios ya mencionados, pues sólo así se podrá otorgar plena satisfacción a quien lo solicito la tutela al Estado”<sup>135</sup>.

**C.4. DEBE MEDIAR RECURSO CONTRA SU DESPACHO.-** El profesor

---

<sup>134</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Op. Cit. p. 205.

<sup>135</sup> HURTADO REYES, Martin. Tutela Jurisdiccional diferenciada. Óp. Cit., pp. 313-314.

Raúl Canelo Rabanal quien al asentar su posición sobre el particular indica que las resoluciones que se emiten en este proceso no deben ser materia de un trámite apelatorio, así nos señala que la existencia de un elemento fundamental en el proceso urgente como es el agotamiento del acto con su plena ejecución impide de hecho una posterior apelación, que pierde así su sentido original de modificar la decisión<sup>136</sup>. Por otro lado, tenemos la posición del doctor MARTIN HURTADO, que “no es partidario de la teoría de los actos procesales irrecurribles, porque la falta de cuestionamiento de las resoluciones por la vía recursiva, atenta contra el derecho a un debido proceso, pues limita la posibilidad de impugnar resoluciones judiciales y vulnera el principio de bilateralidad, por ello si esta medida se dictó inaudita et altera pars (ordenarla medida sin escuchar a la otra parte), la pars conditio se debe equilibrar con la vía recursiva en favor del destinatario de la medida urgente satisfactiva”<sup>137</sup>.

**C.5. PROBABILIDAD INTENSA.-** Para el otorgamiento de las medidas autosatisfactivas, no se invoca el *fumus boni iuris* (apariencia del derecho) como es el caso de las medidas cautelares, solo es necesario que exista una gran posibilidad y certeza que sin el intervencionismo inmediato del órgano jurisdiccional, el daño que podría producirse al solicitante, sea irreparable.

Canelo Rabanal precisa que, “la regulación del proceso urgente debe ser taxativa, de modo que sea empleado solamente en aquellos supuestos, en donde debió al bien jurídico objeto de tutela y las circunstancias propias del caso, pueden sacrificar algunos de los derechos de connotación procesal de, por lo menos, una de las partes, raptadas en el problema a resolver. Esto implica el otorgamiento de tutela satisfactiva va de manera urgente cuando ha mediado la acreditación de una fuerte probabilidad de atención al pedido de quien exige tutela”.

---

<sup>136</sup> Cit. por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Op. Cit. p. 205.

<sup>137</sup> HURTADO REYES, Martin. Tutela Jurisdiccional diferenciada. Óp. Cit., pp. 316-317.



**C.6. CONTRACAUTELA.-** Si bien la medida autosatisfactiva no exige una apariencia del derecho sino una intensa probabilidad del derecho alegado, “se debería señalar que una de las características aun no definidas por la doctrina es el tema referido a la Contracautela, para algunos autores por la naturaleza de estas medidas urgentes y de realización automática se debe propinar una exoneración taxativa al peticionante de la exigencia de prestar contracautela. Otros por el contrario como Sicardi opinan que es necesaria la exigencia de Contracautela”<sup>138</sup>. A mi criterio, este presupuesto no debería ser exigido en los temas de violencia, por ejemplo, la víctima al solicitar una medida autosatisfactiva solicitando el cese de los actos de violencia propiciados a su persona, y para poder otorgársela debe cumplir con la Contracautela, la víctima desistirá de su pedido y seguirá siendo objeto de la violencia ejercida en su hogar o en cualquier otro lugar, por ello excepcionalmente cuando se ponga en juego derechos no patrimoniales (derechos fundamentales), se debe prescindir de este presupuesto para una inmediata protección de la solicitante (víctima).

**C.7. TIENE COMO PRESUPUESTO EL PERICULUM IN MORA.-** “El periculum in mora si es un presupuesto esencial de la medida urgente- no por la demora de un proceso principal ni por el daño que se pueda generar con esa dilación, sino porque el derecho o interés que se pretende proteger requiere una respuesta inmediata del órgano jurisdiccional. La necesidad de una respuesta rápida implica una urgencia de dictar el mandato protector, obliga al juez a emitir la providencia urgente in audita altera pars”<sup>139</sup>.

Martell Chang, sostiene que “el peligro en la demora, implica que la petición del solicitante debe ser atendida inmediatamente, bajo riesgo de sufrir daño inminente e irreparable. Por lo tanto la petición del accionante es la cesación inmediata de los actos que transgreden sus derechos, es decir el interés del

---

<sup>138</sup> Cit. por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Op. Cit. p. 205.

<sup>139</sup> Ibíd. p. 205.

accionante es evitar la consumación de un daño inminente e irreparable que pueda abolir o restringir sus intereses, sustanciales o procesales, tutelados por el ordenamiento jurídico”.<sup>140</sup>

#### **2.2.7.1.2. MEDIDAS CAUTELARES**

Un sector de la doctrina considera que las medidas de protección no encuadran dentro de las llamadas autosatisfactivas, sino que se trata de medidas cautelares, porque no se agotan en sí mismas al dictarse y cumplirse, y que el trámite establecido por las leyes de protección contra la violencia familiar es un trámite cautelar<sup>141</sup>. Es la calificación que mantienen numerosos fallos, en tal sentido se ha dicho que el proceso es de naturaleza cautelar, pues tiene por finalidad dar de un modo eficaz e inmediato una solución a situaciones familiares donde impera la violencia física y/o psíquica de quienes integran el grupo; que la exclusión del hogar del denunciado como agresor o el sometimiento de la familia a un tratamiento bajo mandato judicial constituyen verdaderas medidas cautelares; que para su dictado basta la mera sospecha de maltrato ante la evidencia psíquica o física que presente el maltratado y la verosimilitud de la denuncia hará que el juez pueda adoptar disposiciones que son verdaderas medidas cautelares<sup>142</sup>.

Monroy Gálvez conceptúa a la medida cautelar del siguiente modo: “Es un instrumento procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que puede significar la demora producida por la espera del fallo definitivo o la actuación de una prueba”<sup>143</sup>.

---

<sup>140</sup> HURTADO REYES, Martin. Tutela Jurisdiccional diferenciada. Óp. Cit., pp. 322-323.

<sup>141</sup> SIRKIN, H. Eduardo, Exclusión/atribución del hogar en divorcios y violencia familiar, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, N° 39, p. 107. Cit. Por: Ibíd., p.347.

<sup>142</sup> MENDEZ COSTA, Maria Josefa; M. FERER, Franciso A.; y D' ANTONIO, Daniel Hugo. Derecho de Familia, Ob. Cit. p. 347.

<sup>143</sup> MARTINEZ LETONA, Pedro. La Teoria Cautelar y Tutela Anticipada, Editora y Librería Juridica Grijley, Lima, 2015.

Peláez Bardales nos dice: “si queremos esbozar un concepto directo y claro podemos afirmar que la medida cautelar es un instrumento procesal que puede plantearse antes o dentro de un proceso ya iniciado, con la finalidad de asegurar preliminar y preventivamente la eficacia de la sentencia, a fin de proteger el derecho del accionante o actor, que por fundadas razones puede suponer válidamente que mi pretensión o el derecho que invoca se encuentre en peligro ante el demandado, quien, en tanto dure el proceso, puede disponer, para eludir su propia obligación, de los bienes que finalmente pueden garantizar la pretensión”<sup>144</sup>.

Por lo tanto, la medida cautelar es un instituto jurídico, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia a dictarse en un proceso frente a los riesgos derivados de la demora del mismo. Para que el órgano jurisdiccional pueda dictar una medida cautelar es necesario que cumpla determinados presupuestos exigidos por el código procesal civil (verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y la contracautela).

#### **2.2.7.1.3. MEDIDAS SUI GENERIS DE TUTELA URGENTE**

Esta Teoría o postura adoptada sobre las medidas de protección, se debe por la reciente emisión del Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), que modifica los artículos de la Ley 30364, pero sobre todo por las interpretaciones que vienen realizando los diferentes órganos jurisdiccionales, siendo resaltable el análisis realizado por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (conformada por los jueces superiores Hilda Chávez García, Wilda Cárdenas Falcón y Félix Ramírez Sánchez -juez ponente), quienes al expedir el auto de vista recaído en el Exp. 05098-2017-93-1601-JR-FC-02, establece la naturaleza jurídica de las medidas de protección.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> PELAEZ BARDALES, Mariano. Medidas Cautelares en el proceso Civil. Editora Juridica Grijley, Lima, 2008, p.11.

<sup>145</sup> GUTIERREZ IQUISE, Sandra. “Sala determina la naturaleza jurídica de las medidas de protección en los procesos de violencia familiar”, del 20 de Octubre del 2018 [consulta: 20 setiembre 2018]. Disponible en: <https://legis.pe/sala-determina-naturaleza-juridica-medidas-proteccion-procesos-violencia-familiar/>

En el fundamento 4.3 del auto de vista mencionado, establece lo siguiente: “En esta lógica, podemos indicar que el proceso tramitado el Juzgado de Familia sobre medidas de protección derivado de violencia familiar o violencia contra la mujer, pretende la cesación del riesgo que pesa sobre la víctima, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato mismo [entiéndase violencia física, psicológica, sexual o de economía patrimonial] que se cierne sobre ellas, de otro modo, podría ser irreparable. Las medidas de protección que se dictan en ella, tienen una naturaleza sui generis en el ámbito de la Ley 30364 y sus modificatorias, en la medida que no se trata en estricto sensu de una medida cautelar, ya que una característica prioritaria de estas últimas es que está supeditada siempre a un proceso principal en la medida que tiende a asegurar el cumplimiento de la sentencia firme que va luego a dictarse en el mismo, mientras que las medidas de protección no depende de un proceso principal en específico (al margen que puedan derivarse en un proceso penal o faltas), ya que estas permanecen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, pudiendo incluso el Juez dejarlas sin efectos cuando varíe la situación de la víctima y ya no se encuentre en peligro de ser sujeto de violencia, evidenciando así una cierta autonomía del proceso principal. Tampoco puede considerarse una medida autosatisficativa, ya que esta última sólo se da para solucionar situaciones urgentes, para lo cual debe darse la certeza del derecho vulnerado, disponiendo medidas que se agotan en sí mismas en el sentido que con su ejecución se da por satisfecho o restablecido el derecho vulnerado, por tanto no están sometidas a la evolución de un proceso de fondo en el que debe debatir la controversia; en cambio las medidas de protección que se dictan, no necesariamente se agotan en sí misma al momento de su ejecución, ya que pueden darse nuevas situaciones que obliguen al Juez a modificar o varias las medidas de protección ya dictadas e incluso a dejarlas sin efectos si con ello se restablece la relación familiar y se extingue el peligro de que se repitan nuevos actos de violencia, sumado al hecho que para dictar una medida de protección sólo es necesario indicios de violencia o verosimilitud del mismo, no siendo necesario para

su dictado la certeza del derecho vulnerado como sí ocurre en las medidas autosatisfactivas, primando entonces en las medidas de protección el principio precautelatorio”.

El análisis de la Sala sobre las medidas de protección, concluye que “constituyen un proceso sui generis de tutela urgente y diferenciada, que tiene carácter sustantivo, representando así un medio autónomo, a través del cual se pretende cesar la violencia, salvaguardando en forma inmediata, célere y eficaz la integridad psicofísica, la dignidad, la libertad de las personas integrantes del grupo familiar, como también el lograr la recomposición del grupo familiar, como también en lo personal en el caso de las mujeres”

#### **2.2.7.2. DEFINICION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

Una parte de la doctrina sostiene que las medidas de protección son autosatisfactivas porque tienen la finalidad de prevenir o hacer cesar la violencia familiar. Según Peyrano: “este tipo de medidas procura solucionar coyunturas urgentes y se agotan en sí mismas. Se caracterizan por la existencia del peligro en la demora, la fuerte probabilidad de que las pretensiones del peticionante sean atendibles, generalmente se despachan sin contracautela, y se disponen en un proceso autónomo -no accesorio ni tributario de ningún otro que se agota en sí mismo”<sup>146</sup>, en resumidas palabras lo que dice el maestro Peyrano es que mediante las medidas de protección son autosatisfactivas porque su finalidad es solucionar de manera eficaz y rápida una situación urgente (violencia en el hogar). Por lo tanto las medidas de protección es “UN REQUERIMIENTO URGENTE formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables y que se agota con su despacho favorable, no siendo necesario la ulterior tramitación de una acción principal para evitar su caducidad o decaimiento, como ocurre con las medidas cautelares”<sup>147</sup>,

---

<sup>146</sup> PEYRANO, Jorge, Una nueva vía procesal para preservar el derecho de privada: el proceso urgente, *cit.* Por: MENDEZ COSTA, María Josefa; M. FERER, Francisco A.; y D' ANTONIO, Daniel Hugo. DERECHO DE FAMILIA, Tomo IV, Primera edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 345.

<sup>147</sup> Estas “medidas autosatisfactivas” son una especie dentro del género de los procesos urgentes (como serían el amparo, hábeas corpus, las resoluciones anticipatorias) que se caracterizan por ser el factor

También Molina señala que: “las medidas que adopta el juez no son medidas cautelares en sentido estricto, sino medidas urgentes de carácter autosatisfactivo, que se aplican sobre personas en un proceso proteccional que no requiere de la promoción de una acción principal sino sólo de la verificación de que se ha logrado la protección propuesta; por ello no se requiere para el dictado de la medida que concurran los requisitos de verosimilitud en el derecho invocado y peligro en la demora<sup>148</sup>.”

Con el Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), que modifica los artículos de la Ley 30364, en su artículo 22 determina cuales son los objetivos de las medidas de protección, disponiendo que: “El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora”.

Con la ultima modificatoria de la Ley 30364, ya podemos definir de manera concreta lo que el legislador entiende por medidas de protección, y de que manera deben interpretar y aplicar estas medidas los operadores de justicia, por ello podemos definir a las medidas de protección como “aquellas medidas urgentes dictadas por el juzgado de familia para neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y con ello, poder garantizar la integridad (física,

---

TIEMPO de una relevancia superlativa. SCARAFFÍA, Graciela. Las medidas autosatisfactivas Una respuesta eficaz a la "jurisdicción oportuna" [en línea], Buenos Aires: Todos derecho-Recopilación de Material Digital, s.f. [consulta: 28 setiembre 2018]. Disponible en: <http://todosxderecho.com/recopilacion/Procuracion,%20Fallos%20y%20Modelos/Varios/Las%20medidas%20autosatisfactivas%28full%20permission%29.pdf>

<sup>148</sup> MOLINA, Alejandro, La violencia familiar ante un juez y un proceso que ayudan a superarla, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N° 24, ps. 99 y ss., Lexis Nexis Abeledo-Perrot, con cita confirmatoria de CHECHILE, Ana María, Violencia familiar: comentario a la nueva ley de la Provincia de Buenos Aires, en J. A. 2001-III-1070. Cit. Por: Ibíd., p.346.

psicológica y sexual), el bienestar y seguridad de la víctima o la de su familia, y resguardar los bienes patrimoniales, entendiéndose que se pretende prevenir y/o evitar el surgimiento de ciclos de violencia, y disminuir los niveles de agresiones intrafamiliar. Así mismo al aplicarse dichas medidas se debe tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, la preexistencia de denuncias por hechos similares, la relación de la víctima con la persona denunciada, la diferencia de edades o relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada y, la situación económica y social de la víctima, entre otros aspectos que revelen vulnerabilidad (riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora).

#### **2.2.7.3. NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION.-**

El otorgamiento de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia, tienen sustento constitucional, al garantizar la protección de la persona y su dignidad. La Constitución Política del Estado, establece lo siguiente: i) Art 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado; ii) Art 2°.- Toda persona tiene derecho: 1. “A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)”; 7. “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias”; 22. “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”; 24. Literal h) “nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes”. En consecuencia: Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, por ende debe vivir en un ambiente de paz y libre de violencia para el disfrute de sus derechos y actividades personales. (...), y iii) Art. 44.- son deberes primordiales del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

En consecuencia, la violencia familiar vulnera derechos constitucionales y

fundamentales como son: la vida, la integridad (física, psicológica o moral), la dignidad humana, el honor y otros derechos fundamentales.

Las medidas de protección concedidas a las víctimas de violencia familiar, son importante porque garantizan la protección de la dignidad del ser humano (art. 1 de la Constitución Política), en tal sentido, Giovanni Priori Posada, sostiene que “la persona humana y su dignidad son el centro, la referencia necesaria, el fundamento, la razón de ser de la sociedad y del estado”<sup>149</sup>, por lo tanto, al producirse violencia (física, psicológica, sexual y económica) en el centro del grupo familiar, el otorgamiento de medidas de protección a favor de las víctimas de violencia, constituye la garantía de protección que brinda el Estado, priorizando su dignidad e integridad como persona, es evidente que el otorgamiento de las medidas de protección responden a la necesidad de proteger los derechos reconocidos en la Constitución Política como en los Tratados Internacionales, y lo más primordial restablecer el equilibrio psicológico-emocional de la persona.

#### **2.2.7.4. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

**A. PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS (continuando así las cosas).-** Este principio consiste en que las medidas de protección dictadas a favor del solicitante se mantendrá su aplicación conforme a las condiciones por la cual fue dictada, sin embargo si las condiciones por las cuales fue dictada dicha medida cambiaran las medidas de protección deberán modificarse de acuerdo a las nuevas condiciones, es decir las medidas deben adaptarse a la nueva realidad con el fin que su efectividad de mantenga, o no generen limitaciones indebidas o innecesarias a los derechos los justiciables.

**B. PRINCIPIO INSTRUMENTAL.-** “Las medidas de protección son instrumentales, su función es coadyuvar al proceso, tiene por ende un carácter

---

<sup>149</sup> PRIORI POSADA, Giovanni F. La tutela cautelar, su configuración como derecho fundamental, Editorial Ara Editores, Lima, 2006, pag. 115.



accesorio a éste y no pueden subsistir por sí mismas. Por regla general concluyen su vigencia con la sentencia, aunque excepcionalmente pueden trascender al mismo por un tiempo limitado, a fin de garantizar el cumplimiento de la Sentencia. Este principio se contrapone a la nueva corriente que admite las Medidas Autosatisfactivas, como propias del proceso de violencia familiar”<sup>150</sup>.

**C. PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD.-** Toda medida de protección es temporal, es decir limitada en el tiempo, por ende su vigencia y efectividad se encuentran limitada en el tiempo, de lo contrario se generaría una condición jurídica permanente en el particular, limitándose los derechos del justiciable.

**D. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.-** Ernesto Pedraz Penalva, sostiene: “éste principio aparece como aquella exigencia ínsita en el Estado de Derecho en cuanto tal que impone la protección del individuo contra intervenciones estatales innecesarias o excesivas que graven al ciudadano más de lo que es indispensable para la protección de los intereses públicos (...), la proporcionalidad es formulada como un criterio de justicia, de una relación inadecuada medios fines en los supuestos de injerencia de la autoridad , en la esfera jurídica privada, como expresión de lo cometido, de lo justo, de acuerdo a un patrón de moderación que posibilite el control de cualquier exceso mediante la contraposición del motivo y los efectos de la intromisión”<sup>151</sup>.

#### **2.2.7.5. PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD**

Las medidas de protección para que puedan otorgarse (dictarse) es necesario que cumplan con ciertos requisitos de procedibilidad, los cuales a mi criterio son: i) la verosimilitud del derecho invocado (la fuerte probabilidad que le asista razón al peticionante y que por tanto se hace necesario anticiparle la tutela.); y ii) la urgencia (que es mucho más que el periculum in mora de las cautelares genéricas) en que sea

---

<sup>150</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Op. Cit. p. 220.

<sup>151</sup> Cit. por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Op. Cit. p. 220.

atendido su pedido, con el riesgo de sufrir un daño irreparable <sup>152</sup>.

Con el Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), que modifica los artículos de la Ley 30364, en el segundo párrafo del artículo 22, determina que ya determina cuáles son los presupuestos que el juez debe evaluar para determinar el dictado de las medidas de protección, dicho artículo dice lo siguiente: “El juzgado las dicta teniendo en cuenta **el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección, y el peligro en la demora**”. Según lo determinado por el legislador, el juzgador debe evaluar la concurrencia de estos requisitos para el dictado correspondiente de las medidas de protección solicitadas.

Para fines didácticos, he propuesto dos presupuestos para el dictado de las medidas de protección, porque la evaluación del riesgo mencionado por la norma se encuentra en la versolimitud del derecho invocado; la urgencia y necesidad de la protección, y el peligro en la demora se encuentran dentro del presupuesto de Urgencia, por los siguientes fundamentos:

#### **A. VERISIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO (DENUNCIA INVOCADA).-**

La verosimilitud del derecho invocado, como requisito o presupuesto para el dictado de las medidas de protección, se relaciona con la evaluación del riesgo, ya que se tiene como sustento o base, si la conducta violenta del agresor, puede generar un probable daño a la integridad psicofísica de la persona -que solicita estas medidas de protección-, ya que mediante estas se pretende lograr la prevención o interrupción del daño, que podría agravarse o tomarse en irreparable sin esa intervención judicial. Por lo tanto para que el juzgador pueda otorgar medidas de protección a favor del solicitante (víctima) solo es necesario

---

<sup>152</sup> SCARAFFÍA, Graciela. Las medidas autosatisfactivas Una respuesta eficaz a la "jurisdicción oportuna" [en línea], Buenos Aires: Todos derecho-Recopilación de Material Digital, s.f. [consulta: 28 setiembre 2018]. Disponible en: <http://todosxderecho.com/recopilacion/Procuracion,%20Fallos%20y%20Modelos/Varios/Las%20medidas%20autosatisfactivas%28full%20permission%29.pdf>

la sospecha del maltrato (físico o psicológico o sexual o económico), y la verosimilitud de la denuncia para que el juez de familia pueda dictar una medida de protección.

## **B. LA URGENCIA.-**

La Real Academia Española define urgencia como algo "que urge" derivado del verbo "urgir" significa pedir o exigir algo con apremio, de prisa, ante una necesidad de emergencia de imposible aplazamiento<sup>153</sup>. La existencia de una situación urgente, entendida ésta como la imposibilidad de su aplazamiento, es decir aquella situación en la que de no adoptarse medidas de protección, la conducta o actividad dolosa e ilícita desplegada por el agresor en contra de su familiar, no cesará, se acrecentará o rebrotará, solo asumiéndose convicción de ello<sup>154</sup>, por lo tanto el dictado de las medidas de protección por parte de los juzgados de familia, no pueden aplazarse, prolongarse o prorrogarse, así mismo se requiere que la facultad discrecional del juzgador este sustentada en una actividad probatoria mínima, que permita el convencimiento suficiente – que le genere convicción - sobre la necesidad de otorgar rápidamente a la víctima la medida de protección necesaria, con la finalidad de poder garantizar eficazmente su protección, y por ende la tutela de sus derechos fundamentales (integridad personal, dignidad humana, vida, bienestar, etc.).

Sobre este presupuesto, algunos autores no utilizan el término urgencia, sino la denominación peligro en la demora, sobre ello se ha dicho que “El peligro en la demora, no se trata de un peligro para la marcha ordenada del proceso por la tardanza, propio del periculum in mora, sino de un periculum in damnum (peligro fundado en su repetición delictiva), en otras palabras, el peligro a considerarse no consiste en un peligro genérico del daño jurídico, sino más bien en la situación

---

<sup>153</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2017), Rae.es: Definición de Urgencia. Recuperado de: <http://dle.rae.es/?id=brdBvt6>

<sup>154</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR (Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares)”. Op. cit, p.219.

objetiva de riesgo de reiteración delictiva o incluso del peligro de un daño mayor al que motivo la intervención oficiosa de la autoridad o la que impulso a la denuncia de parte, y que no necesariamente estará relacionada a la lentitud con la que pueda fluir las investigaciones o el proceso, sino con las peculiaridades de cada ciclo de violencia en la que se encuentran inmersas las partes.<sup>155</sup>

“Para determinar el peligro en la demora, los indicios a valorarse serán el tipo de acto cometido, los antecedentes del encausado, las amenazas vertidas por él, los intentos de agresión ya producidos, una conducta de acoso o seguimiento., etc. Dichos indicios serán corroborados, por los testimonios de las propias personas a proteger o con declaraciones de terceras personas”<sup>156</sup>.

Por lo tanto, “la toma de decisiones por parte del juez debe ser de manera expedita, no admitiendo dilaciones una vez que se acredita la verosimilitud de la denuncia”<sup>157</sup>, de lo contrario la víctima sufriría un daño irreparable o, en su defecto, continuarán la ejecución de los actos dañinos en contra de la víctima.

El Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), que modifica el artículo 16 de la Ley 30364, establece que “el proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

**a. En caso de riesgo leve o moderado**, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o cautelares

---

<sup>155</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 223.

<sup>156</sup> BENDEZU BARNUEYO, Rocci. Delito de feminicidio. Análisis de la violencia contra la mujer desde una perspectiva jurídico penal, Ara Editores Lima, 2015, pp. 127-128.

<sup>157</sup> ORTIZ, Diego Oscar. Medidas cautelares en violencia familiar, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2014, p. 275.

requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima.

- b. En caso de riesgo severo**, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y emite las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima. En este supuesto el Juez puede prescindir de la audiencia.

Esta modificatoria es interesante porque clasifica dos tipos de riesgo que pueden existir en los casos de violencia familiar o violencia contra la mujer. Entonces el legislador establece que dependiendo el riesgo existente en los hechos de violencia denunciados, el juzgador está en la obligación de dictar las medidas de protección necesarias dentro de un plazo establecido, porque de lo contrario se estaría poniendo en peligro los derechos fundamentales de la víctima o de su familia.

#### **2.2.7.6. CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

1. **Provisionalidad y mutabilidad**, uno de los caracteres más sobresalientes de las medidas de protección emergentes de la ley de violencia familiar, es el de su provisionalidad y mutabilidad, lo que permite que, si con el transcurso del tiempo se modifican las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para su dictado, las mismas se modifiquen o dejen sin efecto según corresponda.
2. **Inmediatez**, otra de sus características es la inmediatez, de la que en gran parte depende su efectividad y que compromete a la vez una conveniente y rápida apreciación de los hechos para tomar decisiones adecuadas, con libertad de criterio, en el marco de la ley.
3. **No tiene carácter limitativo**, otra importante característica estriba en no tener un carácter limitativo en su espectro, lo que significa la posibilidad de respuestas

concretas a una situación no prevista que a la postre evita el desamparo de la víctima.

4. **No se le asigna formalidad restringida**, otra de sus características es que no se le asigna una formalidad restringida, ya que la ley no señala la forma procesal que deben observar en su elaboración y tramite, prescribiendo solo una: Que sean puestas en conocimiento del juez de familia.
5. **Son potestativas** a criterio del Juez de Familia, pero también ha pedido de parte.
6. **Es tuitiva**, es también característico de estas medidas su naturaleza tuitiva en favor de la víctima, de esta forma se les asigna el fin de garantizar la integridad física, moral y psíquica de las mismas.
7. **Es urgente**, significa que la petición del accionante debe ser atendida inmediatamente bajo riesgo de sufrir daño inminente e irreparable para la víctima logrando su eficacia, entendida como aquella actuación rápida, oportuna y adecuada del órgano jurisdiccional y que el derecho del justiciable sea preservado.
8. **Es temporal**, la duración de las medidas debe extenderse en tanto subsistan las agresiones intrafamiliares, hasta el día en que éstas desaparezcan.
9. **Es variable**, las medidas de protección son variables, el o la operador(a) judicial puede modificarlas y ampliarlas cuando así lo requiere la protección a la víctima.
10. **Son obligatorias**, en caso de incumplirse con su mandato procede la intervención del Ministerio Público, en la investigación de los posibles delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.
11. **Razonabilidad y proporcionalidad**, solo se observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de la ponderación de derecho constitucional

que se pretende restringir versus el derecho constitucional que se pretende proteger.

#### **2.2.7.7. AUTORIDAD COMPETENTE PARA DICTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar Ley N° 30364 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, señalan que autoridad pueden dictar las medidas de protección:

-El Juzgado de Familia o su equivalente (art.16, 17 y 23 de la Ley N° 30364 y los art.35 y 37 del D.S. 009-2016-MIMP).

-El Juzgado Penal (Art.20 de la Ley N° 30364 y art.7 y 54 del D.S. 009-2016-MIMP).

Sin embargo con el nuevo Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), que modifica el artículo 14 de la Ley 30364, establece que “Los juzgados de familia son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. En las zonas donde no existan juzgados de familia, son competentes los juzgados de paz letrado o juzgados de paz, según corresponda. La fiscalía de familia interviene desde la etapa policial, en todos los casos de violencia en los cuales las víctimas son niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo previsto en el Código de los Niños y Adolescentes”. Entonces con esta nueva modificatoria los juzgados paz letrados son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, siempre y cuando donde se produjo los hechos denunciados no exista juzgados especializados de familia. Tambien se amplía las facultades del fiscal de familia para los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, siendo obligatoria su intervención desde la etapa policial.

#### 2.2.7.8. EVALUACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

Se dice que las medidas de protección constituyen una forma sui generis y excepcional de tutela diferenciada, pues las medidas de protección que dicta el Juzgado de Familia o mixto se encuentran libradas a su criterio discrecional. De modo que interpretando a cabalidad la ley debemos convenir que “para el otorgamiento de una medida de protección inmediata, el Juez de Familia o mixto debe comprobar la concurrencia de los requisitos de probabilidad y urgencia de que el derecho invocado existe. Para ello, debe valorar la prueba aportada para generar convicción. Si un pedido no se acompaña con los elementos probatorios o los ofrecidos no producen convicción, el juez de Familia o mixto no está obligado a otorgarlo. En tales casos, se debe declarar infundado el pedido formulado”<sup>158</sup>.

El segundo párrafo del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), determina lo siguiente: “El juzgado las dicta teniendo en cuenta **el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección, y el peligro en la demora**”. Según lo determinado por el legislador, el juzgador debe evaluar la concurrencia de estos requisitos para el dictado correspondiente de las medidas de protección solicitadas.

Por lo tanto, para que el juez de familia o mixto, otorgue medidas de protección es necesario que los medios probatorios que se adjuntan generen convicción sobre la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad; una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos, el juez de familia o mixto se encuentra facultado para el otorgamiento inmediato de las medidas correspondientes.

#### 2.2.7.9. TIPOS DE MEDIDAS DE PROTECCION

La violencia suscitada en el núcleo familiar, implica una serie de agresiones de índole física, psicológica y/o moral psicológica, afectándose a la dignidad de la persona, su integridad personal (integridad física, psíquica y moral de la persona),

---

<sup>158</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 232.



entre otros derechos, así mismo afecta la armonía y la solidaridad entre los integrantes del grupo familiar. Para poder afrontar – aunque de manera residual- esta situación (violencia) que se origina en la familia, se aplican los mecanismos de protección previstos en la norma, que tienen como finalidad la protección de la persona. Cuando la víctima solicita una medida de protección y esta es otorgada, su finalidad es evitar que el ciclo de violencia se repita nuevamente (que la víctima no vuelva a ser objeto de violencia por su agresor), y de esta manera se garantiza la protección de las víctimas su integridad física, psíquica y moral.

Las medidas de protección previstas en la ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) son las siguientes:

### **1. Retiro del agresor del domicilio.**

Esta medida se aplica con la finalidad evitar situaciones conflictivas futuras entre el agresor y la víctima, dado que al vivir en el mismo hogar existe mayor probabilidad de que las agresiones se intensifiquen, como en el caso de los cónyuges o convivientes que al vivir en la misma casa sus emociones y pasiones los puede conllevar a situaciones conflictivas, y al no existir una comunicación, se originaría una situación de violencia constante, para poder erradicar y/o prevenir esta violencia que se origina en el núcleo de la familia –o relación convivencia-, es necesario que se adopte la medida de protección adecuada, es decir no cualquier tipo de medida de protección, sino aquella que sea lo suficientemente efectiva para lograr dicho fin.

La finalidad de esta medida de protección es cesar una situación de riesgo existente al momento en que la agresión es denunciada y no a situaciones ocurridas con anterioridad. Sin embargo cuando se aplica esta medida, se deja desamparado al agresor en el caso que este no cuente con algún lugar a donde vivir, por ello Silvia Guahnon nos dice que, “en una situación difícil respecto de la posibilidad de hallar un lugar donde vivir; en cambio no existirá mayor problema si el agresor no comparte el domicilio con la víctima, pues la agresión puede presentarse entre

familiares que residan en el mismo hogar o en domicilios distintos. Resulta más atinado restringir su esfera proteccionista al grupo conviviente y señalar un límite en los parientes colaterales”<sup>159</sup>.

La Ley 30364, no ha establecido ningún criterio para determinar el retiro del agresor del domicilio en las distintas situaciones de emplazamiento familiar; lo que no debe ser un impedimento, si el caso lo requiere que se adopte una posición tendiente a establecer una solución más o menos equitativa, que permita determinar en qué medida queda afectado o limitado el derecho privado de uno de los cónyuges o miembros de la familia sobre el domicilio, para aunarlo con la necesidad de satisfacer el derecho de la familia a tener una residencia o lugar donde vivir.

Al adoptarse esta medida de protección drástica, no se tiene en cuenta lo siguientes supuestos:

**i) La casa es de propiedad de agresor, ya que esta fue adquirida con anterioridad a la celebración del matrimonio y la formación de su familia.-**

en este supuesto la orden del retiro del agresor es cuestionada desde el punto de vista jurídico, porque se le estaría limitando su derecho de propiedad, y esta restricción sería inconstitucional, por ello para no incurrir en una arbitrariedad se debe dictar la medida de protección teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ante esta situación.

**ii) La vivienda donde vive la víctima –y sus hijos- es alquilada, y el agresor es la fuente de ingresos de la familia,** este supuesto es complicado porque al ser el agresor el que satisface las necesidades básicas de la familia, y al ordenársele que no se acerque a la vivienda, el agresor entiende inconscientemente que ya no se hará cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos, en el caso que lo hubiera.

---

<sup>159</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel; RAMOS MOLINA, Miguel. “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”. Lex y Iuris. Primera Edición, Lima, 2018, p.188.

Algunos operadores del derecho consideran que ante esta situación, es suficiente que el juez dicte una medida cautelar de alimentos a favor de los menores y de la cónyuge agraviada.

En estos dos supuestos se plantea como una medida de protección alternativa para no vulnerar el derecho de propiedad del agresor y garantizar los alimentos a los menores y a la cónyuge - en caso se dependiente económicamente - “se debe concretizarse más bien en una orden de retiro de la "habitación" conyugal, para que el agresor pueda instalarse en otro lugar del mismo inmueble, bajo el apercibimiento, en el caso que generara otros actos de violencia, de ser echado del inmueble”<sup>160</sup>, para el cumplimiento de esta medida se debe permitir la participación de la vecindad, circundante al domicilio de la familia en crisis, para el control y cumplimiento de las medidas de cese de las agresiones, implícitas a la orden de retiro; con esta medida y supervisión correspondiente se podrá evitar el surgimiento de un nuevo ciclo de violencia.

**iii) El lugar donde vive la víctima –y sus hijos- es de propiedad de la familia del agresor.-** esta situación podría originar que la familia del agresor como represalias por la denuncia efectuada por la víctima, tome venganza ya sea mediante el uso de la fuerza física u ordenando que se retire de la vivienda, implicando también un tipo de violencia ejercida hacia la víctima por parte de los familiares del agresor.

Ante esta situación la medida alternativa sería, que se disponga mediante una medida cautelar un hogar temporal a favor de la víctima y de sus menores hijos, hasta que haya cesado los actos de violencia o la víctima tenga un fuente de ingresos para que pueda arrendar una habitación. Pero para ellos es necesario la voluntad política del Gobierno, de garantizar a las víctimas (mujeres y a sus menores hijos) un hogar temporal, de lo contrario no se estaría cumpliendo con lo

---

<sup>160</sup> Ibid. p.192.

dispuesto en el art. 4 de la constitución política sobre que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

El inciso 1 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), es más descriptivo sobre esta medida y amplía las facultades de la policía para su ejecución, ya que dispone que “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución”. Esta modificatoria, es interesante y beneficiosa para la víctima porque no solo se limita a retirar al agresor del domicilio donde vive la víctima, sino también de aquellos lugares (por ejemplo la vivienda de las familiares de la víctima) donde suele frecuentar a menudo la víctima, así mismo se le prohíbe regresar a los mismos lugares. Sin embargo el juzgador debe ser explícito y determinar los límites de esta medidas porque podría ser desproporcional y restringirse inconstitucionalmente determinados derechos fundamentales.

## **2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine.**

“El impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma debe partir de establecer que dichas acciones de aproximación o acercamiento tienen propósitos violentos de asedio injustificado, pues podría ocurrir que la comunicación sea necesaria y el acercamiento o proximidad casual inevitable, por ello el operador de justicia le corresponde delimitar los contornos normativos de la proposición legal acotada para que esta no resulta inejecutable, en tal sentido, la medida de protección debe dictarse si y solo si se tiene verosímilmente establecido que el acercamiento y la proximidad a la víctima tienen el propósito de asediar, amenazar, hostilizar, etc. es decir, que sea una manifestación agresiva y que ello genere temor, turbación, desasosiego en la víctima”<sup>161</sup>, entonces, esta medida de

---

<sup>161</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel; RAMOS MOLINA, Miguel. “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”. Op. Cit., p.196-197.

protección prohibitiva tiene como finalidad proteger a la víctima de futuros actos de violencia, sin embargo esta medida puede adoptarse en el caso que la víctima sea objeto de constantes acosos por parte de su agresor, originando temor, miedo, y perturbación en la víctima, debe tenerse en cuenta que la finalidad de las medidas de protección es hacer cesar los actos lesivos provenientes del agresor(a).

Esta medida tendrá entre sus fines proteger la propia personalidad del individuo, que implica la protección de un ámbito propio, íntimo y reservado para él, necesario para mantener una calidad mínima de vida humana digna; siendo estos derechos por propia naturaleza inherentes a la persona se entienden ligados a su reputación, buen nombre, estima dignidad, reducto de privacidad. Es evidente que tales derechos fundamentales sólo serán eficaces si se logran arbitrar medidas que garanticen su plena materialización<sup>162</sup>.

El inciso 2 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), amplía literalmente esta medida, no solo describiendo el “Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma”, sino que también precisa la “prohibición de acercamiento a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad”. Sin embargo el juzgador al dictar esta medida de protección debe limitar los parámetros de aplicación, y ponderar los derechos que se pretende proteger y los que se afectarían, por suele ser el caso que tanto la víctima y el agresor, vivan en el mismo edificio, avenida o barrio, estudien en la misma universidad o instituto, o trabajen en el mismo lugar, se debe ponderar en estas situaciones para poder restringir el derecho fundamental a la propiedad, al estudio o el derecho al trabajo.

---

<sup>162</sup> Ibid. p.249.

La ampliación de esta medida deja prácticamente inútil la aplicación de Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros, esta medida está prevista en el artículo 37 del Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (aprobado por D.S. No 009-2016), es un “subtipo de la medida de protección prohibitiva de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine”, esta medida a mi parecer está dentro de unas de las manifestaciones prohibitivas de la medida mencionada, sin embargo aún existe una deficiencia para resolver sobre los casos cuando el agresor y la víctima trabajan en el mismo lugar, o estudian en el mismo colegio, instituto o universidad, ya que al adoptarse esta medida podría vulnerarse derechos constitucionales como el derecho al estudio y el derecho al trabajo, por ello el legislador debe ponderar – mediante el test de proporcionalidad - el bien jurídico que se pretende proteger y el bien jurídico que se afectara, limitara o restringirá.

A mi parecer esta medida debe ser omitida por el legislador, o en todo caso determinar las situaciones en las que se aplicara, de lo contrario es inútil su consagración en el cuerpo normativo vigente.

### **3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.**

La prohibición de comunicación con la víctima, previamente debe establecerse que la búsqueda de la comunicación igual que el acercamiento o proximidad a la víctima tiene el propósito de asediar, acorralar y amenazar, es decir la conducta del agresor es agresiva produciendo temor, miedo, turbación, desasosiego a la víctima, no necesariamente un daño; esta medida prohibitiva tiene la misma finalidad que la medida anterior, por ello es necesario que se determine si la comunicación desplegada por el agresor con la víctima es nociva y acosadora, por ende dicho acoso podría generar una situación de estrés inevitable por la víctima, entonces la

prohibición de comunicación es una medida de protección legítima y preventiva de un nuevo ciclo de violencia o impeditivo de un rebrote o recrudecimiento de los hechos investigados.

Actualmente contamos una tecnología avanzada para comunicarnos, ya sea mediante telefonía fija o celular (vía telefónica), mediante fax (electrónica), mediante una computadora con acceso a internet y en esta encontramos las redes sociales como Facebook, Instagram, Twiter, entre otras, la cuales usamos para comunicarnos (chatear), red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación, entonces estos medios tecnológicos de comunicación nos facilitan la vida para poder comunicarnos, sin embargo también puede usarse para hacer daño, como es el caso que mediante esta comunicación el agresor puede amenazar, humillar, perturbar, hostigar, acosar, a la víctima de violencia, por ello surge la necesidad de dictar una medida de protección prohibitiva de este tipo, ya que la finalidad de esta medida es garantizar a la víctima su integridad moral, psíquica, libre desarrollo y bienestar.

**4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección.**

En el Perú, no solo los miembros de las fuerzas armadas tienen el derecho a portar armas, sino también aquellos civiles o ciudadanos que ostentan una licencia para portar armas otorgado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Según las disposiciones legales que regulan este derecho, toda arma autorizada debe ser inscrita en el Registro del Sistema de Identificación Balística de la Policía Nacional, requisito indispensable para conceder o renovar la licencia.

El propósito de la medida de protección de prohibir el porte de armas para el agresor es el de evitar o prevenir que los actos de agresión contra la mujer o los integrantes del grupo familiar tengan un desenlace fatal como sería dar muerte o una lesión grave a la víctima. En la realidad se han dado muchos casos de muertes de mujeres por parte de sus parejas con armas de fuego, desencadenándose el último eslabón de esta larga cadena de violencia a la que se ven sometidas las mujeres, llamada como la figura típica del feminicidio.

Esta medida de protección tiene como finalidad, garantizar que las agresiones familiares no tengan un resultado fatal (la muerte de la víctima), es decir mediante esta medida se garantiza la integridad personal de la víctima.

El inciso 4 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), amplía literalmente esta medida, no solo prohibiendo la tenencia de armas a los ciudadanos que se encuentran denunciados por actos de violencia familiar o violencia contra la mujer, sino también incluye el supuesto cuando se trata de integrantes de las “Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral”.

## **5. Inventario sobre sus bienes.**

La orden de inventariar los bienes “es una medida excepcional y accesoria de otra, despachándose siempre que se asuma convicción o exista verosimilitud de que los bienes a inventariar pertenecen a la familia o siendo de propiedad exclusiva del agresor, estos han sido aportados para fundar una comunidad de bienes y disfrutar de ellos de manera permanente, que además éstos bienes sean imprescindibles para la subsistencia de la familia; y que debido al desquicio matrimonial o la crisis familiar, la víctima tuvo que haberse visto forzado a retirarse del lugar donde se encuentra la vivienda y en ella todos sus bienes, y en dicha circunstancia exista el



peligro de que el agresor pueda hacer uso o disposición indebida, desproporcionada o abusiva de los bienes, en desmedro de los miembros más débiles”<sup>163</sup>.

Por lo tanto, la finalidad de la presente medida de protección es: “garantizar que el agresor no incurra en una mala gestión o prodigalidad, ocultando, vendiendo o regalando los bienes que pudieron haber adquirido durante la convivencia o los aportados por él para la subsistencia de la familia, lo que podría poner en mayor peligro la integridad física, psicológica y moral de la víctima, al no contar con los recursos mínimos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, sueño y vestido, en consecuencia no solo debe inventariarse los bienes, sino atribuírselos a la víctima”<sup>164</sup>.

#### **6. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes.**

Esta medida contemplada en el artículo 37 del Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (aprobado por D.S. No 009-2016), desde mi punto de vista se encuentra implícitamente consagrada en la medida de protección de inventario de bienes, porque ambas medidas tienen como finalidad común “garantizar que el agresor no disponga, enajene, otorgue en prenda o hipoteca o transfiera la titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes”, es decir se prohíbe que el agresor incurra en alguna mala gestión o prodigalidad, ya sea vendiéndolos o donándolos. Mediante esta medida se pretende garantizar la subsistencia de la víctima y sus menores hijos, ya que al dejar el hogar, el agresor puede atribuirse potestades como vender, regalar o incluso destruir las cosas adquiridas durante la convivencia (conyugal o de hecho), por lo tanto el fin de esta medida prohibitiva es garantizar la subsistencia de la familia, de lo contrario se afectaría o pondría en peligro la integridad física, psicológica y moral de la víctima y de sus menores hijos, ya que al no contar con

---

<sup>163</sup> Ibídem. p.260

<sup>164</sup> Ibídem. p.261

una fuente de ingresos mínimos no podrían satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, sueño y vestido).

#### **7. Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo familiar.**

Según, RAMOS RIOS, Miguel Ángel, y RAMOS MOLINA, Miguel, consideran que “está medida esta orientada a la protección de los hijos e hijas del progenitor o progenitora que se alejó del grupo familiar y, de la protección de adultos mayores en situación de cuidado a cargo del grupo familiar; éstos, los hijos sobre todo de tierna edad y los ancianos, son reclamados por aquel integrante de la familia que desertó del grupo, como por ejemplo el padre que decidió retirarse del núcleo familiar y pretende evitar ser condenado al pago de una pensión de alimentos y no se le ocurre mejor idea que sustraer y trasladar a su hijo lejos del grupo familiar en el que habitualmente vive para luego buscar una consolidación de esa situación de facto y argüir que no está obligado al pago de la pensión de alimentos demandada por el representante legal del niño o niña, porque su hijo o hija, recibe de él directamente dicho derecho; o, (también de aquel pariente que pretende aprovecharse de la pensión de jubilación o cesantía del anciano, para lo cual no se le ocurre mejor idea que mantener bajo su cuidado a dicho pariente anciano”<sup>165</sup>.

Por otro lado, considero que esta medida no solo debe entender según lo descrito precedentemente, sino también cuando “la víctima (por lo general mujer) tiene menores hijos, y estos han apreciado constantemente la violencia ejercida sobre su madre, y el agresor al llevárselos, se estaría afectando derechos fundamentales de los menores, como su bienestar, integridad y libre desarrollo de la personalidad, como se sabe la conducta del agresor siempre está orientada a utilizar a los menores para amenazar a la víctima con la intención que vuelva a vivir a su lado, y por ende ella se desista de la denuncia formulada, y siga siendo maltratada por el agresor. Ante esta situación descrita, se debe prohibir al agresor que traslade a los menores

---

<sup>165</sup> RAMOS RIOS, Miguel Ángel; RAMOS MOLINA, Miguel. “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”. Op. Cit., p.203.

de edad fuera del ámbito familiar o cuidado de la víctima, sin embargo esta prohibición debe ser valorada por el operador de justicia, ya que va depender una serie de factores, circunstancias y pruebas que serán determinante para dicha prohibición que estaría limitando el derecho de patria potestad (tenencia) del agresor. En este sentido, tampoco la norma impone que el agresor no vaya a ver a sus menores hijos, sino que se prohíbe que los traslade fuera del cuidado del grupo familiar, es decir fuera del cuidado de la víctima, o de algún miembro familiar de ella (si fuera el caso), entonces el agresor aun podrá ejercer el régimen de visitas establecido según el criterio del juzgador”.

El inciso 8 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), modifica esta medida, disponiendo lo siguiente “Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad”. Podemos apreciar que se cambia los siguientes términos: “agresora por denunciada”, “trasladar” por “retirar”, “situación de cuidado por situación de vulnerabilidad”, esto se debe porque el termino denunciado es mas amplio, porque cuando hablamos de agresor estamos afirmando que determinado individuo a cometido ciertos actos, los cuales se determinara a nivel de fiscalía penal; el termino retirar se incorpora, atendiéndose que no puede trasladar algo o alguien; el termino de situación de vulnerabilidad no solo incluye a las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, sino también a las mujeres y a los adultos mayores (ancianos). Por lo tanto el denunciado, no podrá retirar a sus menores hijos (niños, niñas, adolescentes) u otras personas en situación de vulnerabilidad del entorno del grupo familiar. A diferencia del anterior inciso, cabía la posibilidad de que el denunciado pueda ejercer su derecho de régimen de visitas, sin embargo con esta nueva modificatoria, su derecho se encuentra suspendido, hasta que dicha medida sea modificada o dejada sin efecto.

## **8. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.**

Esta medida de protección contemplada en el artículo 37 del Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (aprobado por D.S. No 009-2016), es novedosa e interesante porque se pretende rehabilitar al agresor, y por ende no vuelva a ejecutar actos de violencia sobre su víctima u otro cualquier individuo de su esfera privada, y en este sentido “una vez reeducado el agresor las medidas prohibitivas dictadas en su contra deberían dejarse sin efecto”; por ejemplo, en el caso que el agresor tenga una familia y menores hijos, y se dicta una medida de protección prohibitiva contra él, este no podrá ejercer a plenitud sus derechos de patria potestad y tenencia, derecho de propiedad (limitado de disponer determinados bienes), entonces el operador de justicia con el fin de poder restablecer estos derechos, y nuevamente unir la familia resquebrajada por estos actos violentos, dispone el tratamiento reeducativo o terapéutico.

Por lo tanto, esta medida tiene como finalidad, mediante la reeducación restablecer los derechos limitados o restringidos del agresor, y si fuera el caso poder unir la familia resquebrajada por la violencia. Esta medida, responde al artículo 4 de la constitución política, que dispone que “La comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, y al artículo 7, que dispone lo siguiente: “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”.

**9. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.**

El inciso 6 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), incorpora esta medida. Esta medida denominada “asignación económica de emergencia” no es otra cosa que la pensión de alimentos que el agresor debe entregar a la víctima y a sus menores hijos afectados. El legislador incorpora esta medida, con el fin de no dejarse desprotegida a la víctima y a los menores de edad, porque en la mayoría de los casos cuando el agresor es denunciado, este no cumple sus obligaciones alimentarias, dejando al desamparo la subsistencia de la víctima y de sus menores hijos. Por otro lado, esta asignación económica era otorgada mediante una medida cautelar, sin embargo estas eran otorgadas al mes o dos meses, dejándose en desamparo durante este tiempo a la víctima y a los menores de edad – independientemente del cumplimiento o no de la medida cautelar -, por ello el legislador opto como solución ante este problema la incorporación de esta medida, como solución inmediata ante el desamparo económico del agresor respecto a la víctima y sus menores hijos.

#### **10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.**

El inciso 10 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), incorpora esta medida. Sin embargo ya está previsto en el artículo 30 de la Ley 30364 (sobre reeducación de personas agresora) que “es política del Estado la creación de servicios de tratamiento que contribuyan a la reeducación de personas agresoras que han cometido actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que el agresor detenga todo tipo de violencia contra estos”. Esta medida incorporada que debe ser aplicada por el operador de justicia, efectiviza la aplicación obligatoria de programas orientados a la reeducación del agresor, estos programas consistirían en el tratamiento psicológico de los agresores para poder determinar las razones de su conducta violenta, y poder rehabilitarlas mentalmente, y no sean un peligro para la denunciante, su familia y la sociedad en general.

#### **11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.**

El inciso 11 del artículo 22 del Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018, que modifica los artículos de la Ley 30364), incorpora esta medida, pero ya en el tercer párrafo del art. 27 de la ley 30364, se establecía que “La creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es función de dicho Sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad”.

Esta medida incorporada, efectiviza lo ya normado por la Ley 30364, entonces el juzgador debe aplicar estas medidas cuando la víctima no tenga a quien recurrir para una vivienda o no disponga de recursos económicos necesarios para alquilar una habitación. Es de conocimiento que las víctimas soportan las agresiones de sus parejas por no tener algún lugar a donde vivir, ya que carecen de recursos económicos o porque sus familiares viven lejos, y esta situación se agrava cuando existe menores de edad, los cuales son utilizados por el agresor para amenazar a la víctima (mujer).

#### **12. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.**

La Ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar), ha previsto en su artículo 22 inciso 6 que no solo pueden dictarse como medidas de protección inmediatas, las señaladas precedentemente, sino otras, que tengan como finalidad garantizar la integridad personal (física, psíquica y moral de la persona) y la vida de la víctima o familiares

#### **2.2.7.10. VIGENCIA E IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

La ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar) en el art.23 determina que “La vigencia de las

medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados. La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna”. Y en el artículo 41, establece que “Los Juzgados de Familia tienen competencia para variar las medidas de protección o cautelares hasta que el Juzgado Penal o del Juzgado de Paz Letrado tengan conocimiento del caso. Las medidas de protección pueden ser modificadas de oficio o a pedido de parte cuando se produzcan hechos nuevos, si se alteran las circunstancias que motivaron la decisión o aquellas no sean suficientes para garantizar la seguridad o bienestar de la víctima o ante el incumplimiento de las medidas de protección inicialmente dictadas”.

El Decreto legislativo 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), modifica el artículo 23 de la Ley 30364 (sobre vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares), estableciendo lo siguiente: “Las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación, o al proceso penal o de faltas. Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia cuando, de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución, advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima, o a solicitud de esta última. En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a la audiencia respectiva. El juzgado de familia también puede sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación, o proceso penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la audiencia respectiva. El juzgado de familia, inmediatamente y por

cualquier medio, comunica su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución. Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial.”

Tanto el artículo modificado como el vigente, se determina que las medidas de protección solo tendrán vigencia hasta la sentencia emitida por el juzgado penal o basta el pronunciamiento fiscal que decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados. Entonces para que pueda darse estos dos supuestos, el juzgado de familia debe remitir el caso de violencia familiar a la fiscalía, para que este de inicio a la correspondiente investigación para poder determinar la ilicitud de los hechos; una vez terminado la investigación preparatoria el fiscal formalizara la denuncia o dará por archivado el proceso <sup>166</sup> (cuando no exista delito), en el caso que formalice denuncia, el juez penal será competente para determinar mediante sentencia las medidas de protección que considere necesarias. Sin embargo el artículo vigente, amplía los límites de vigencia de las medidas de protección, las cuales surtirán efectos hasta que persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación, o al proceso penal o de faltas, es decir que la medida de protección se mantendrá vigente incluso cuando se dicte resolución en el juzgado (penal o paz letrado) o disposición fiscal archivando la denuncia; esta incorporación del legislador es novedosa y beneficiosa para la protección de los derechos fundamentales de la víctima. El artículo 23 vigente se diferencia del modificado porque el juzgado de familia también puede sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación, o proceso penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la audiencia respectiva, es decir las medidas de protección dictadas por el juzgado

---

<sup>166</sup> La fiscalía penal recibe de los juzgados de familia o mixto los casos y les da el trámite correspondiente, según las reglas del Código Proceso Penal. Las medidas de protección se extienden hasta el pronunciamiento del juzgado penal o del fiscal, si este decide no presentar denuncia penal, salvo que haya impugnación. Cit. Por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 243.



de familia seguirán vigentes incluso cuando se emita sentencia del juzgado penal o paz letrado o cuando se disponga el archivo de la denuncia .

El actual artículo 23 como el vigente artículo 41 del reglamento de la Ley 30364, se pronuncian sobre quien es el competente para variar las medidas de protección, y en que situaciones se puede realizar la modificatoria, la diferencia radica que en el vigente artículo 23 es más específico al incorporar los términos: sustituir, ampliar o dejar sin efecto - la medida de protección -, en cambio el artículo 41 solo establece el término “variar” - la medida de protección -, por otro lado el artículo 23 determina que las medidas podrán ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto, en virtud de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución, advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima, o a solicitud de esta última, en cambio el artículo 41 prevé que podrán ser modificadas cuando se produzcan nuevos hechos, si se alteran las circunstancias que motivaron la decisión o aquellas que no sean suficientes para garantizar la seguridad o bienestar de la víctima o ante el incumplimiento de las medidas de protección inicialmente dictadas, así mismo las partes pueden solicitar la modificación, es decir tanto la víctima como el agresor puede solicitar la variación de las medidas; por último el artículo 23 (vigente), dispone que el juzgado de familia debe comunicar inmediatamente mediante cualquier medio, su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución (PNP).

#### **2.2.7.11. INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

El artículo 24 de la Ley N° 30364, determina que consecuencia jurídico penales implicara el incumplimiento de las medidas de protección dictadas por el operador de justicia, dicho artículo dispone que “El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal”. Entonces el agresor que llega o llegara a desobedecer lo ordenado por el juzgador mediante las medidas protección, será procesado por el delito de resistencia o

desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal.

El D.L. 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), incorpora el artículo 23-B (sobre órganos de supervisión y apoyo de la ejecución de la medida de protección) y 23-C (sobre informe de cumplimiento de la medida de protección) a la Ley 30364, dichos artículos disponen lo siguiente respectivamente: “En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia dispone que el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas e inopinadas para supervisar el cumplimiento de la medida de protección. En los lugares donde no exista Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, el juzgado de familia puede disponer que la supervisión sea realizada por los centros de salud mental comunitarios, hospitales, Defensoría Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes – DEMUNA, Centros Emergencia Mujer, Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, Estrategia Rural o gobiernos locales, de acuerdo a sus competencias.” Y “La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de familia un informe sobre la ejecución de la medida, dentro de los quince (15) días contados desde la fecha en que fue notificada, con las recomendaciones que consideren pertinentes. En casos de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha en que fue notificada la medida de protección. Adicionalmente, cada seis (6) meses, en los casos de riesgo leve o moderado, y cada tres (3) meses, en los casos de riesgo severo, contados desde que fue notificada la medida de protección, las entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de familia un informe sobre el cumplimiento de dicha medida y sobre la situación de riesgo de la víctima, con las recomendaciones que consideren pertinentes. El juzgado de familia que no reciba los citados informes en los plazos señalados, comunica esta situación al titular de la entidad respectiva, a fin de que se determinen las responsabilidades que correspondan. Las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección, deben comunicar esta situación al juzgado de familia dentro de las veinticuatro (24) horas, bajo

responsabilidad.”

#### **2.2.8. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION**

Para que las medidas de protección dictadas por los operadores justicia (juzgados de familia o mixto) sean efectivas es necesario que el Estado cumpla su deber protector de garantizar la plena vigencia y eficacia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello el Estado mediante sus instituciones respectivas (PNP, Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) debe concretizar este fin protector.

##### **2.2.8.1. EL ESTADO PERUANO GARANTE DE LA PLENA VIGENCIA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

El Estado peruano como Estado Constitucional de Derecho desempeña un rol garante frente a las violaciones de derecho fundamentales; tratándose en los casos de violencia familiar – cuando las víctimas son menores de edad- es necesario la inmediata intervención de las instituciones tuitivas de protección, con el fin de garantizar eficazmente la protección de los derechos fundamentales (derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad física, psicológica y moral de la persona) de las víctimas.

León Vásquez comenta que la Constitución de 1993, tiene otro deber primordial que es el de "garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. En realidad, este deber primordial del Estado social halla su sustento, por un lado, en el hecho de que nuestra Constitución (artículo 1) consagra que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y por otro lado, en el doble carácter de los derechos fundamentales”<sup>167</sup>.

La previsión de este deber se justifica en la medida de que entre los derechos fundamentales y el Estado social y democrático de Derecho se da un estrecho nexo

---

<sup>167</sup> LEON VAZQUEZ, Jorge, *Constitucion Comentada*, Tomi I, p. 696. Cit. Por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. *Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar*. Óp. Cit. p. 281.

de interdependencia; el Estado social, para ser considerado como tal, tiene que respetar y garantizar los derechos fundamentales; y a la inversa, los derechos fundamentales, para su realización, precisan de la existencia del Estado social y democrático de Derecho. Estas exigencias reciprocas, no solo supone la no intervención o la abstención del estado de vulnerar los derechos fundamentales (exigencia negativa) sino también la exigencia positiva del Estado de garantizar la plena eficacia y vigencia de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado asume la obligación de promover el respeto y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales a través de las medidas políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas más adecuadas para su plena realización.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que para que los Estados o Gobiernos puedan cumplir el deber fundamental de garantizar los derechos constitucionales debe cumplir con las siguientes obligaciones: i) La obligación de respetar, que implica que el ejercicio del poder estatal se encuentra limitado por los derechos humanos, lo cual significa que el Estado, directa o indirectamente, no puede violar estos atributos inherentes a la persona; y ii) La obligación de garantizar, que significa adoptar las medidas necesarias que permitan a todas las personas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta obligación comprende: la obligación de prevenir, la obligación de investigar, la obligación de sancionar, la obligación de reparar los daños producidos en perjuicio de las personas.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> La obligación de prevenir, que implica que las violaciones a los derechos humanos van de la mano con una obligación de protección ante posibles amenazas a los derechos provenientes de particulares, grupos, empresas. La obligación de investigar, que significa que las autoridades están obligadas a investigar las amenazas o vulneraciones a los derechos humanos. La investigación de estos hechos comprende también la obligación de sancionar a los responsables de tales vulneraciones de modo tal que éstas no queden impunes. Finalmente, el Estado está obligado hacer posible la reparación de los daños producidos en perjuicio de las personas. Cit. Por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 283.

Asimismo el profesor Enrique Bernal nos dice que “es deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, que son los derechos establecidos tanto dentro de la Constitución, como los demás que, según el art.3°, sin estar taxativamente descritos, deban ser considerados como tales. La vigencia de los derechos humanos debe entenderse como compromiso de respeto pleno a la persona humana, promoviéndola integralmente y absteniéndose el Estado de todo acto u omisión que pudiera afectar el goce de estos derechos. La vigencia se garantiza de diversas maneras, todas confluyentes entre sí.

- a) Educando, en primer lugar, a los funcionarios públicos, personal encargado de la seguridad y el orden y a la población en el respeto de los derechos. Si se crea una conciencia de obligatoriedad y desarrollo de los derechos humanos, se estará contribuyendo efectivamente a su cumplimiento.
- b) Estableciendo la institucionalidad que permita su protección. Para ello debe asegurarse, en primer lugar, la existencia y funcionamiento independiente de todas las instituciones constitucionales relacionadas al tema, particularmente el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
- c) En general, es muy importante para la garantía de los derechos humanos que el proceder de la autoridad sea compatible con ellos. Lo anterior implica la necesidad de fijar códigos de conductas y entrenar a los funcionarios públicos, para hacer posible el pleno respeto de los derechos humanos, particularmente por los organismos que tienen función básica la represión de conductas ilícitas en la sociedad”<sup>169</sup>.

#### **2.2.8.2. DEBER DEL ESTADO PERUANO DE INTERVENIR CUANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON AMENAZADOS Y/O VIOLENTADOS**

---

<sup>169</sup> BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado, Editora Rao, Lima, 1999, pp. 312-313.

Enrique Bernal nos manifiesta que “es deber del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. La seguridad puede ser considerada como una situación de cumplimiento esencial de los derechos del ser humano, a fin de que tenga la posibilidad de progresar tanto espiritual como físicamente. La seguridad supone desde la posibilidad de alimentarse, hasta la de acceder al bienestar espiritual a través de la cultura, pasando por una situación familiar estable, por una educación debida y por un trabajo que le permita subsistir, entre otros elementos esenciales”<sup>170</sup>.

La seguridad implica, desde un punto de vista más descriptivo los aspectos físico, emocional, psicológico, y espiritual. El aspecto físico entendido como la seguridad corporal en su sentido más extenso y completo. El aspecto anímico como la seguridad de tener un desarrollo adecuado de las emociones en el proceso de socialización, tanto familiar como social. La seguridad psicológica como el elemento que permita desarrollar adecuadamente todas las funciones humanas superiores, y la seguridad espiritual como un fenómeno más globalizante de la persona, que incluye cultura, valores y posibilidad de creación para realizarse según sus preferencias.<sup>171</sup>

Es deber del Estado, en orden a la protección contra las amenazas a la seguridad de sus nacionales, promover la existencia de un ambiente social que garantice todos estos aspectos de realización de derechos para la persona<sup>172</sup>. El Estado social y democrático de Derecho debe ser consciente de la tenue línea que separa, en aras de la pretendida seguridad, a un Estado democrático de un Estado policial y aun de terror. Por el contrario, el Estado solo puede conseguir, legítimamente, garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana en la medida de que su consecución se haga a partir del respeto de los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales<sup>173</sup>.

---

<sup>170</sup> Ibid.

<sup>171</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 284.

<sup>172</sup> BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado, Editora Rao, Lima, 199, p. 313.

<sup>173</sup> LEON VAZQUEZ, Jorge. La Constitución Comentada, Op. Cit., p. 698.

En este sentido, es deber primordial del Estado garantizar a la población, la vigencia y ejercicio de sus derechos fundamentales, pero este deber únicamente se podrá lograr otorgando seguridad a los ciudadanos, y por ende también se podrá garantizar el cumplimiento de determinados valores superiores como el orden público y la paz social.

#### **2.2.8.3. EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU**

El Estado crea a la Policía como institución ejecutora de la facultad de coerción estatal, de acuerdo a las leyes dictadas en función del interés social; por lo que su actividad, función y finalidad deben ejecutarse dentro del marco de la ley, la doctrina y los principios generales del Derecho y de la Constitución, la cual se orienta hacia la defensa de la persona humana como fin supremo del Estado<sup>174</sup>.

Es así que la Policía Nacional es el órgano que generalmente interviene de forma inmediata al problema (violencia familiar). La población tiene un mayor acceso a dicha institución, dado que tiene presencia casi en todos los lugares del país. Su rol resulta trascendente ya que es la personalización de la protección y auxilio que el Estado ofrece a la ciudadanía, por lo que su acción debe ser oportuna y enmarcada en el respeto por la dignidad humana<sup>175</sup>.

Es así que el Estado peruano desempeña un rol garante frente a las violaciones de derecho humanos que se dan contra las víctimas de violencia familiar. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00017-2003-AI/TC, Fj.8, señala que uno de los aspectos fundamentales del orden interno es la seguridad ciudadana (protección de la vida, integridad física y moral, patrimonio, etc.) donde la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer<sup>176</sup>.

---

<sup>174</sup> CHANAME ORBE, RAUL. La Constitución Comentada, Tomo II, Editorial ADRUS, Arequipa, 2011, p.368.

<sup>175</sup> SALAS BETETA, Christian; TEOFILO BALDEON, Sosa. Criminalización de la violencia familiar, Fondo Editorial Librería y Ediciones Jurídicas, Lima, 2013, p.208.

<sup>176</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 286.

Soria Lujan, comenta que “la labor de la institución policial está estrechamente vinculada con la protección de los derechos fundamentales de las personas en la medida de que el orden interno implica la ausencia de situaciones de afectación o amenaza al ejercicio de tales derechos”<sup>177</sup>.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú, “la Policía Nacional tiene el deber de prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad”. Esto quiere decir que la finalidad de la Policía Nacional del Perú, es proteger y ayudar a la ciudadanía cuando lo requiera, en el caso de la violencia familiar, la policía nacional deber intervenir inmediatamente con la finalidad garantizar la vida e integridad personal de las víctimas de violencia familiar. Este deber se intensifica mas cuando la víctima exige el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a su favor, por ello el artículo 23° de la Ley N° 30364 (Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar), dispone que: “La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, así mismo, habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna”

El deber de la Policía Nacional es proteger a la ciudadanía, y más aún cuando se encuentra en riesgo su integridad, tranquilidad y dignidad por actos dañosos de algún individuo, por ello la finalidad de la Policía es detener cualquier hecho o acto de violencia en perjuicio de la víctima (mujeres, menores de edad, ancianos y discapacitados).

El artículo 45 del Reglamento de la Ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar,

---

<sup>177</sup> SORIA LUJAN, Daniel. La Constitución Comentada, Análisis artículo por artículo, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 813-814



aprobado mediante D.S. N° 009 2016-MIMP), prescribe que “la Policía Nacional del Perú es la entidad responsable de la ejecución de las medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de la víctima conforme a sus competencias, por lo que da cuenta de manera inmediata y periódica, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia”. Así mismo el art. 47 establece el procedimiento que deberá aplicar el personal de la Policía Nacional del Perú cuando conozca de una medida de protección.

El artículo 23 modificado por el D.L. 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), disponía que la Policía Nacional tiene el deber funcional de ejecutar las medidas de protección, debía tener un mapa geográfico y georrefencial de registro de víctimas de violencia que se encuentran con medidas de protección; así como la habilitación de un canal directo con las mismas para atender a sus pedidos de resguardo. Esta función y deber de la Policía Nacional, es prevista con la incorporación del artículo 23A (sobre ejecución de la medida de protección) a la Ley 30364 mediante D.L. 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), disponiendo que “La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de sus competencias, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; asimismo, debe llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para brindar una respuesta oportuna. Los nombres y ubicación de todas las víctimas con medidas de protección deben estar disponibles permanentemente para todo el personal policial en la jurisdicción en la que domicilia la víctima, a fin de responder oportunamente ante emergencias. Las medidas de protección que no se encuentren en el ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú son ejecutadas por las entidades públicas competentes que disponga el juzgado.”

Con esta nueva incorporación del artículo 23-A a Ley N° 30364 ( Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo

Familiar), se dispone a nivel normativo, el deber institucional y funcional de la Policía Nacional de ejecutar las medidas de protección ordenadas por el Juzgado de Familia de acuerdo a los estándares normativos previstos (tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; asimismo, debe llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para brindar una respuesta oportuna), y de informar periódicamente, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas.

Por lo tanto, el Policía tiene el deber de proteger a las víctimas de violencia y ejecutar las medidas de protección, por ello si deniega, omite o retarda injustificada-mente el auxilio policial por requerimiento de las personas en situación de peligro, serán sancionados de acuerdo a lo establecido al artículo 378° segundo párrafo del Código Penal. Es así que las víctimas de violencia, al solicitar la prestación del auxilio al efectivo de la Policía Nacional, lo hace para que dicha situación de peligro no acabe en atentados contra su integridad física, sexual o emocional de la solicitante como puede ser las lesiones leves o graves ocasionado por patadas, bofetadas, arañazos, golpe de puño, cortes, torceduras de dedos o brazos, fracturas, quemaduras, etc., así como la violencia sexual y el feminicidio como último eslabón de esté ciclo de violencia<sup>178</sup>.

#### **2.2.8.4. PROTECCION Y APOYO DEL SERVENAZGO PARA UNA INTERVENCION OPORTUNA Y EFICAZ SALVALGUARDANDO LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR**

La Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 84, establece que, las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejerce la función de: “Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños,

---

<sup>178</sup> CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 293.

adolescentes, mujeres, adultos mayor, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación”.

La Constitución Política en su artículo 197 establece que, “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”.

Podemos apreciar que tanto la Ley Orgánica de Municipalidad y la Constitución Política, determinan que los gobiernos locales deben fomentar, preservar y ejecutar el respeto y la defensa de los derecho fundamentales de sus ciudadanos. En este sentido, las Municipalidades deben realizar y ejecutar programas de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo (mujeres, niños y adolescentes, ancianos, y discapacitados); por ello cuando la Municipalidad tome conocimiento de algún caso de violencia familiar, debe actuar inmediatamente para poder contrarrestar la violencia ejercida sobre la víctima, a través de su personal de seguridad ciudadana (serenazgo) y con cooperación de la Policía Nacional.

La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 73 numeral 2.5, establece que “la seguridad ciudadana es un servicio público local y las funciones específicas y compartidas se encuentran establecidas en el artículo 85 de la LOM”. “En realidad, si bien el papel de los gobiernos locales es esencial en materia de seguridad ciudadana, la gravedad del tema en la hora actual rebasa su capacidad operativa y es eminentemente una competencia compartida entre todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), la Policía Nacional y la población civil organizada”<sup>179</sup>.

La Ley N° 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento D.S N° 012-2003-IN), concibe a la seguridad ciudadana como: “La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía,

---

<sup>179</sup> Ibid. p.294.

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”.

También con la incorporación del artículo 23-A (sobre ejecución de la medida de protección) a la Ley 30364 mediante D.L. 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), disponiendo que “La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de sus competencias, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; asimismo, debe llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para brindar una respuesta oportuna.” Con este artículo se establece expresamente el rol que debe cumplir el serenazgo ante situaciones de violencia contra la mujer o violencia familiar, por ello el servicio de serenazgo debe actuar en coordinación con la policía para afrontar hechos de esta naturaleza.

Por otro lado, el D.L. 1386 (publicado el 4 de setiembre del 2018), mediante su modificatoria determina en el artículo 45 cuales son las responsabilidades sectoriales de los gobiernos regionales y locales, disponiendo lo siguiente:

14.1 En el caso de los gobiernos regionales:

a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas regionales, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; b) Crear y conducir las instancias regionales de concertación, para promover la articulación y el funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción; c) Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de coordinación de los

Comités Regionales de Seguridad Ciudadana; d) Los establecidos en la presente Ley.

14.2 En el caso de los gobiernos locales:

a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas locales y comunitarios, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; b) Crear y conducir las instancias, provinciales y distritales de concertación, para promover la articulación y el funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción; c) Implementar servicios de atención, reeducación y tratamiento para personas agresoras, con los enfoques establecidos en la presente ley; d) Implementar servicios de prevención frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a través de acciones de empoderamiento social y económico de las víctimas de violencia y programas preventivos, grupos de reflexión dirigidos a hombres para promover relaciones igualitarias y libres de violencia; e) Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de coordinación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana; f) Los establecidos en la presente Ley (...).”

Por lo tanto, la función de los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana se realiza mediante los serenazgos, hoy en día son requeridos para una gama muy amplia de intervenciones, desde las referidas a problemas de convivencia —como, por ejemplo, los ruidos molestos, el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, la prostitución y las riñas- hasta las asociadas con la actividad criminal, tales como la microcomercialización de drogas y todo tipo de delitos patrimoniales, que incluyen desde robos al paso y de autopartes hasta robos de vehículos y viviendas. Entre estos extremos, existe un conjunto de pedidos de intervención ante hechos que pueden o no ser delitos, que comprenden la presencia de sospechosos, los accidentes de tránsito y la violencia familiar y juvenil. En muchos casos, el serenazgo atiende el pedido directamente, mientras que en otros, cuando es necesaria la presencia policial, se

encarga de viabilizar, cumpliendo así el papel de intermediario entre el ciudadano y la Policía.<sup>180</sup>

### **CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO**

## **3. MARCO METODOLOGICO**

### **3.1. Tipo y Nivel de Investigacion.-**

#### **3.1.1. Tipo de Investigacion.-**

Básica. Siendo esta investigación que busca un fin teórico y fundamenta en un aspecto teórico intelectual pues con ello se pretende contribuir al derecho aportando criterios que se pueden tener en cuenta para determinar, si realmente las medidas de protección son efectivas para garantizar la tutela de los derechos de los menores de edad en los casos de violencia familiar, específicamente en el Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque.

#### **3.1.2. Nivel de la Investigacion.-**

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, es de carácter descriptivo, toda vez que su finalidad consistió en realizar un análisis sobre la violencia en contra de los menores de edad, determinando de manera general los tipos de violencia (maltrato infantil), los efectos nocivos que recae sobre los menores, los derechos fundamentales que se vulnera, entre otros aspectos; y explicativo, porque está orientada a descubrir y determinar si las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia de Chiclayo, garantizan la protección de los derechos de los menores de edad cuando son víctimas de violencia familiar.

---

<sup>180</sup> MALLAP RIVERA, Jonny. Comentarios al Regimen Normativo Municipal, Gaceta Juridica, Lima, 2013, p. 472-475. Cit. Por: CASTILLO APARICIO, Jhonny E. Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Óp. Cit. p. 295.

### **3.2. Diseño de la Investigación**

Descriptiva-Explicativa, no experimental. Por lo que en primer lugar se describió la realidad actual del problema, posteriormente se analizó y verifico si las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, son efectivas para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad.

Es una investigación cualitativa, “se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis, preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos”. (Sampieri, 2014, pág. 564)

Es Transversal, porque la medición se realizó en un solo corte de tiempo (enero a julio del 2018).

Pues se fundamenta en un proceso de explorar, describir, y analizar la problemática jurídica de la efectividad de las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en protección de los derechos de los menores de edad. Así mismo no se pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; incluso no buscan que sus estudios lleguen a replicarse.

### **3.3. Poblacion y Muestra**

#### **3.3.1. Poblacion**

La población en estudio está compuesta por las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores de edad víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero hasta Julio del 2018.

### **3.3.2. Muestra**

La muestra en la presente investigación está constituida por 40 Medidas de Protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar. Así mismo como sujetos de estudio a 40 víctimas (menores de edad) de Violencia familiar que obtuvieron sus medidas de protección en el Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de Enero hasta Julio del 2018.

## **3.4. Tecnicas e Instrumentos de recolección de datos**

### **3.4.1. Técnicas.**

Las técnicas que se utilizaran será:

- i) La revisión documental de las fuentes como: Libros, revistas (nacionales como extranjeras), tratados internacionales, la Ley 30364 y su reglamento;
- ii) Cuestionarios.
- iii) Observación documental: Observar los expedientes judiciales de violencia familiar tramitados en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de enero a julio del 2018.

### **3.4.2. Instrumentos.**

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son la ficha de registro de datos y las encuestas.

#### **Descripción de Instrumentos**

- a. Ficha de Análisis de Datos.- Fichas para el recojo de información de los expedientes que cuentan con Medidas de protección.
- b. Cuestionario.- Dirigida a los responsables de los menores – que fueron víctimas de violencia familiar- que tienen medidas de protección a su favor.



## **CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS**

### **4. ANALISIS Y RESULTADOS**

#### **4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS: RESULTADOS**

Los datos del trabajo han sido obtenidos en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, específicamente se ha realizado la revisión del legajo de Medidas de Protección del periodo de enero hasta julio del 2018, así mismo se ha realizado un cuestionario al responsable(s) – padre o madre o tutor – del cuidado del menor(es) de edad, que cuenta con medidas de protección a su favor, con la finalidad de poder determinar si estas medidas realmente garantizan la protección de los derechos de los menores de edad y por ende no han vuelto a ser víctimas de violencia, siendo el detalle del estudio el siguiente:

#### **MOTIVO DE LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN CONTRA DE LOS MENORES DE EDAD, TRAMITADOS POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018**

De las denuncias por violencia familiar en contra de los menores, tramitados por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de enero a julio del 2018, el 17,5% fue por violencia física, 32,5% por violencia psicológica, 2,5% por violencia sexual, 47,5% por violencia física y psicológica; este resultado está representado en la Tabla N° 1 y la Grafica N° 1.

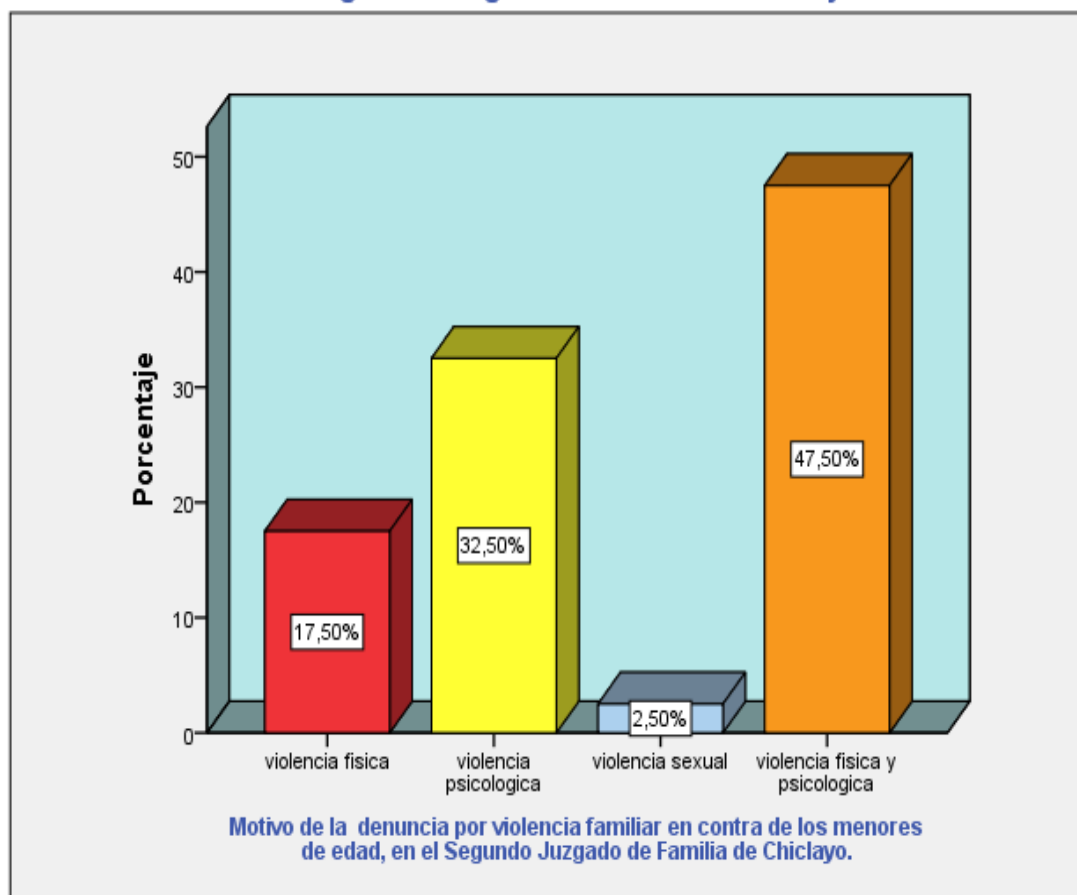
**TABLA N° 1**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
violencia física	7	17,5%
violencia psicológica	13	32,5%
violencia sexual	1	2,5%
violencia física y psicológica	19	47,5%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 1**

**Motivo de la denuncia por violencia familiar en contra de los menores de edad, en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo.**



## EDAD DE LOS MENORES DE EDAD QUE OBTUVIERON MEDIDAS DE PROTECCION, POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018

De la revisión de los expedientes de violencia familiar del Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, del periodo de enero a julio del 2018, se pudo apreciar que 40 menores de edad recibieron medidas de protección a su favor; de esta totalidad el 75% son de 6 a 12 años, y el 25% son de 13 a 17 años. Este resultado está representado en la Tabla N° 2 y la Grafica N° 2.

**TABLA N° 2**

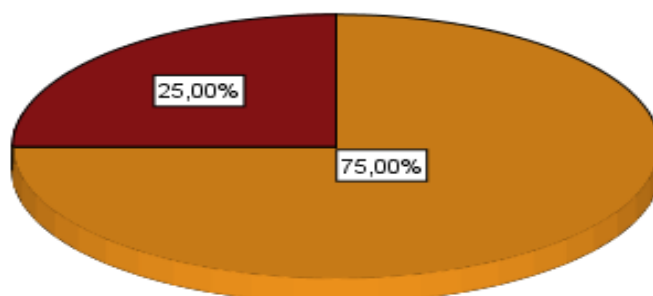
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
6 a 12 años	30	75%
13 a 17 años	10	25%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 2**

**Edad de los menores que obtuvieron medidas de proteccion**

■ 06 a 12 años  
■ 14 a 17 años



### GENERO DE LOS MENORES DE EDAD QUE OBTUVIERON MEDIDAS DE PROTECCION, POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018

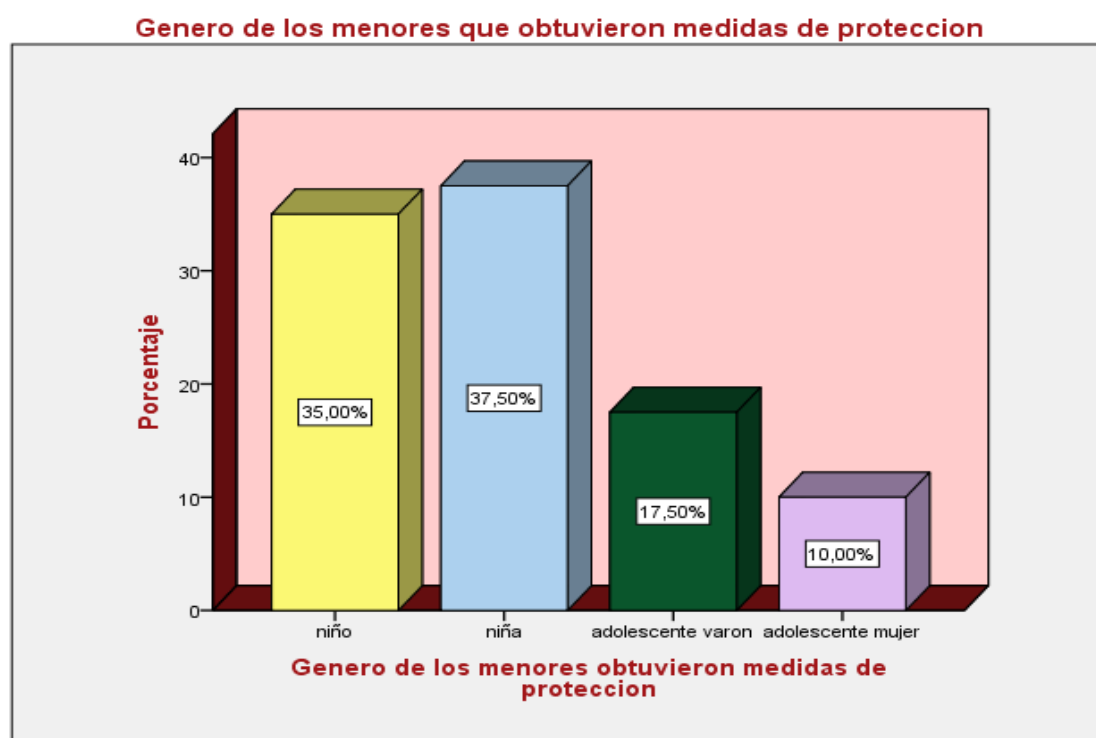
El mayor porcentaje de menores agredidos son los niños y niñas, con un 35% y 37,5%, respectivamente; los adolescentes varones en un 17,5% y las adolescentes mujeres en un 10%. Este resultado está representado en la Tabla N° 3 y la Grafica N° 3.

**TABLA N° 3**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Niño	14	35%
Niña	15	37,5%
Adolescente varon	7	17,5%
Adolescente mujer	4	10%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 3**



## VINCULO DEL MENOR AGRAVIADO(A) CON EL INCULPADO(A)

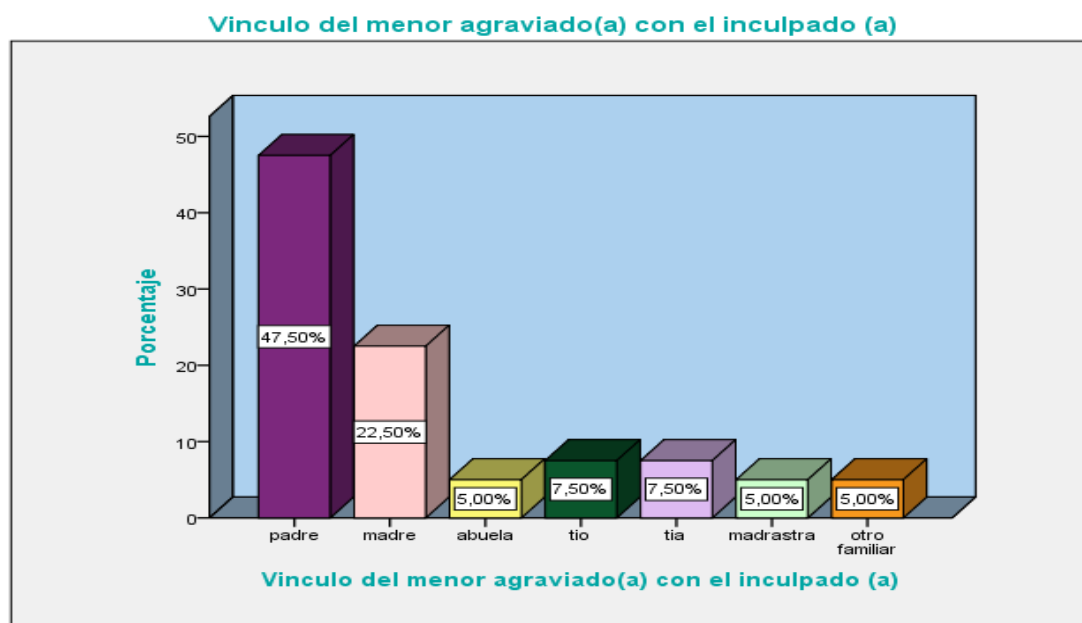
De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla N° 4 y la Grafica N° 4; el 47,5% de las agresiones han sido producidas por el padre, 22,5% son producidas por la madre, el 7,5% por el tío, 7,5% tía, el 5% por la abuela, 5% por la madrastra y el 5% por otro familiar.

**TABLA N° 4**

	Frecuencia	Porcentaje
Padre	19	47,5%
Madre	9	22,5%
Abuela	2	5%
Tio	3	7,5%
Tia	3	7,5%
Madrastra	2	5%
Otro Familiar	2	5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 4**



## **TIPO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN CONTRA DE LOS MENORES QUE EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DETERMINO MEDIANTE AUTO FINAL**

En el periodo de enero a julio del 2018, el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, mediante auto final determino que tipo de violencia habría sufrido el menor para que se pueda dictar la medida de protección; el 37,5% fue por violencia física, 42,5% por violencia psicológica, 10% por violencia física y psicológica, 2,5% por violencia sexual y 7,5% no se comprobó la violencia pero igual se dictó medida de protección. Este resultado está representado en la Tabla N° 5 y la Grafica N° 5.

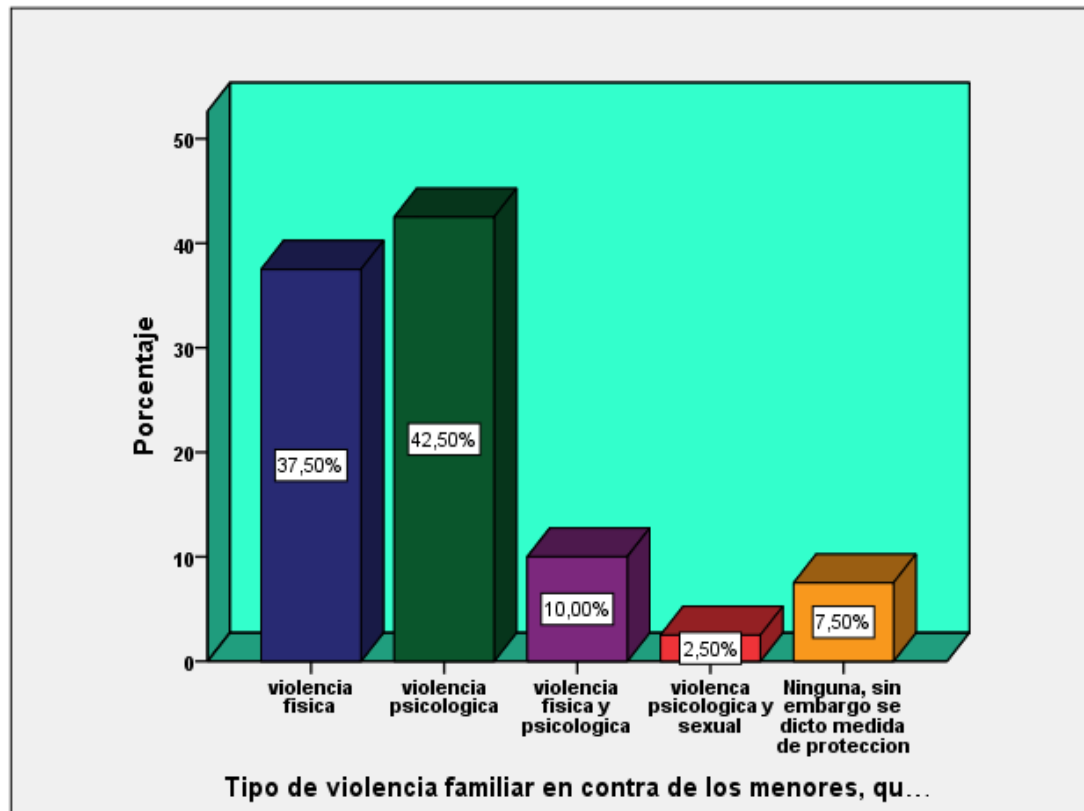
**TABLA N° 5**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Violencia física	15	37,5%
Violencia psicológica	17	42,5%
Violencia física y psicológica	4	10%
Violencia psicológica y sexual	1	2,5%
Ninguna, sin embargo se dicto medida de protección	3	7,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

## GRAFICA N° 5

Tipo de violencia familiar en contra de los menores, que se ha determinado mediante auto final



## TIEMPO TRANSCURRIDO PARA QUE EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA TOME CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA

La mayoría de denuncias por Violencia Familiar realizadas en las Comisarias de Chiclayo, son remitidas al Juzgado de Familia en un tiempo mayor a 24 horas, es así que tenemos un porcentaje de 12,5% en un tiempo promedio de uno a tres días, 22,5% en un tiempo promedio de cuatro a seis días, 17,5% en un tiempo promedio de siete a nueve días, y un 47,5 % en un tiempo promedio mayor a 10 días; este resultado está presentado en la Tabla N° 06 y la Grafica N° 06.

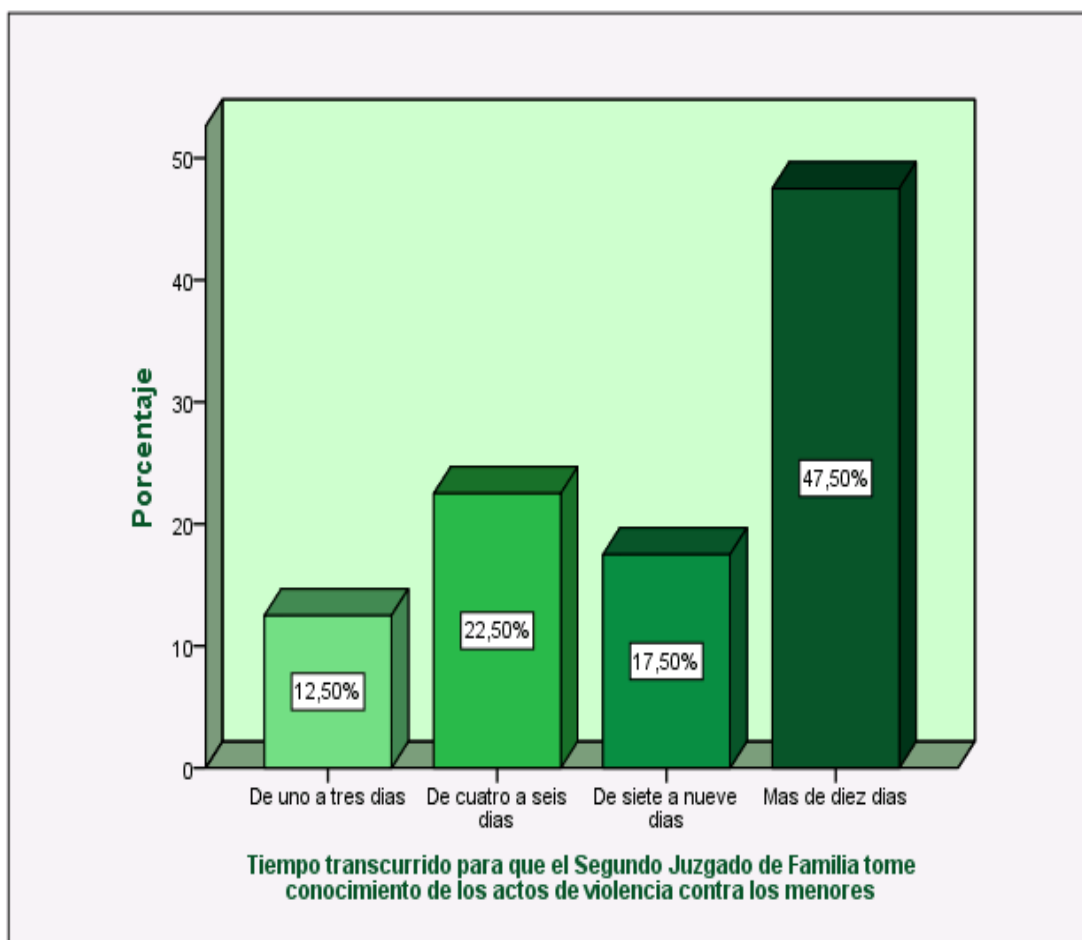
**TABLA N° 6**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
De uno a tres días	5	12,5%
De cuatro a seis días	9	22,5%
De siete a nueve días	7	17,5%
Mas de diez días	19	47,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 6**

**Tiempo transcurrido para que el Segundo Juzgado de Familia tome conocimiento de los actos de violencia contra los menores**





**TIEMPO TRANSCURRIDO PARA QUE EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DICTE LAS MEDIDAS DE PROTECCION A FAVOR DE LOS MENORES, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018.**

El 20% de las medidas de protección a favor de los menores, fueron dictadas en un tiempo menor a 07 días, un 22,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 07 a 15 días, un 30% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 16 a 30 días, un 2,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 31 dias a 50 días, un 15% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 51 dias a 70 días, un 2,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 71 dias a 90 días, y un 7,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo mayor a los 90 días. Se puede apreciar que el tiempo promedio general para que el Segundo Juzgado de Familia, dicte las medidas de protección a favor de los menores es menor a 30 días. Este resultado está representado en la Tabla N° 7 y Grafico N° 7.

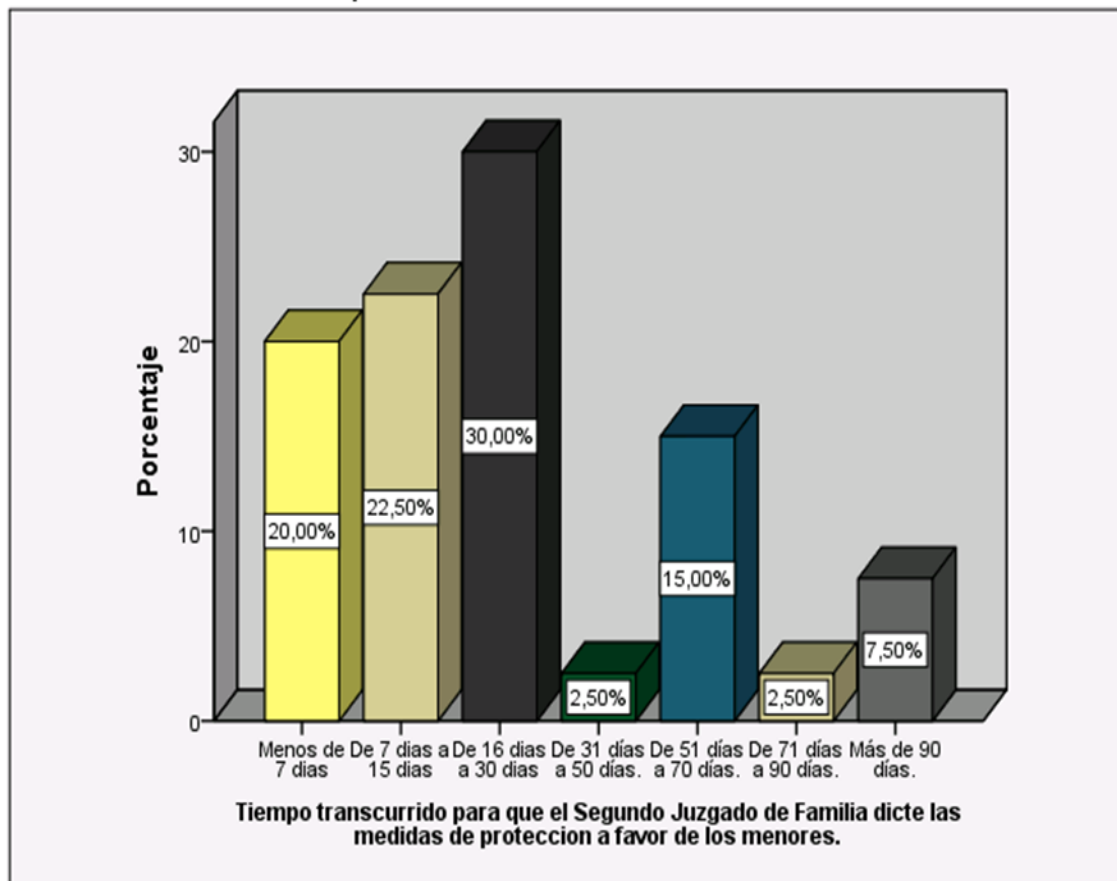
**TABLA N° 7**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Menos de 7 dias	8	20%
De 7 dias a 15 dias	9	22,5%
De 16 dias a 30 dias	12	30%
De 31 dias a 50 dias	1	2,5%
De 51 dias a 70 dias	6	15%
De 71 dias a 90 dias	1	2,5%
Mas de 90 dias	3	7,5%
Total	40	100%

**Fuente: Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.**

**GRAFICO N° 7**

**Tiempo transcurrido para que el Segundo Juzgado de Familia dicte las medidas de protección a favor de los menores.**



### **TOTAL DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA HASTA LA OBTENCIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN**

Del total del tiempo transcurrido desde la interposición de la denuncia por violencia familiar hasta la emisión de la medida de protección a favor del menor, el 35% fue menor a 30 días, el 25% fue de 31 días a 60 días, el 22,5% fue de 61 días a 90 días, el 10% fue de 91 días a 120 días, y el 7,5% fue mayor a 120 días. Este resultado está representado en la Tabla N° 8 y la Grafico N° 8.

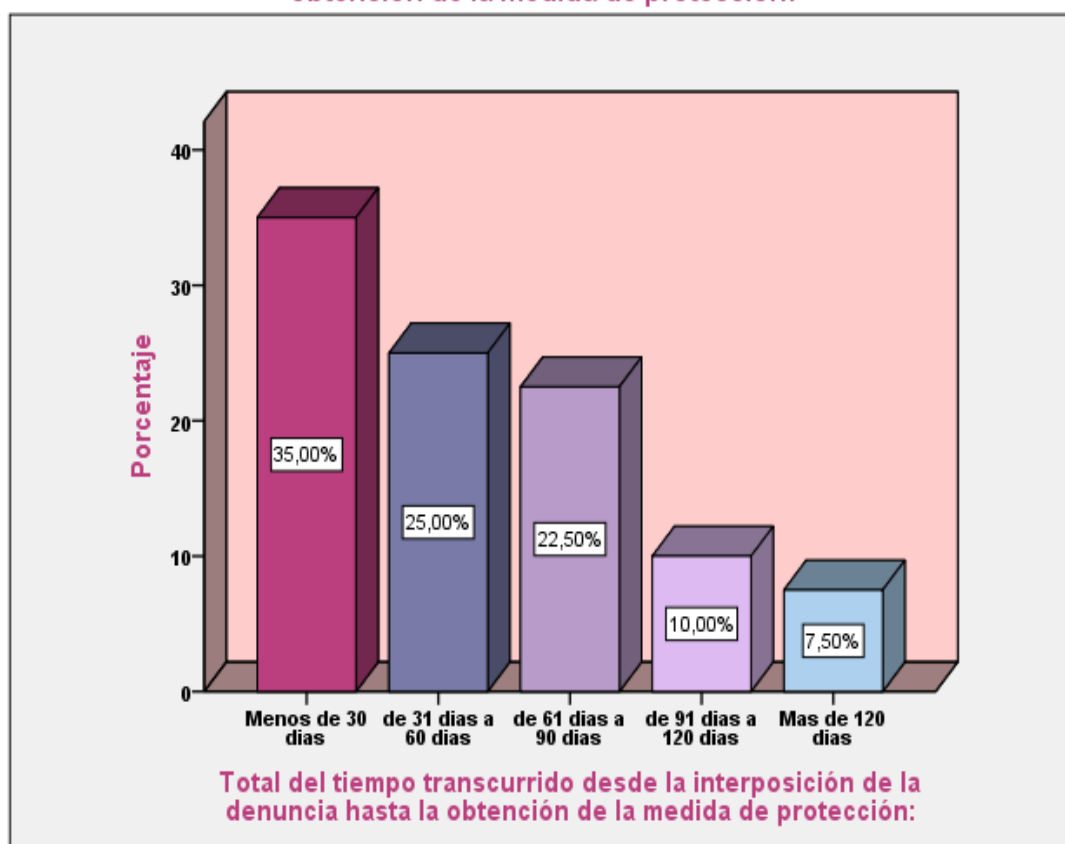
**TABLA N° 8**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Menos de 30 días	14	35%
De 31 días a 60 días	10	25%
De 61 días a 90 días	9	22,5%
De 91 días a 120 días	4	10%
Mas de 120 días	3	7,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICO N° 8**

**Total del tiempo transcurrido desde la interposición de la denuncia hasta la obtención de la medida de protección:**



**TIPOS DE MEDIDAS DE PROTECCION DICTADAS POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018.**

Tal como se presenta en la Tabla N° 9 y la Grafica N° 09, en el periodo de enero a julio del 2018, el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo mediante auto final, en un 72,5% se ha dispuesto el Impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección a favor de la víctima; en un 25% se ha dispuesto la Prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección destinada a proteger a la víctima; y en un 2,5% se ha dispuesto otro tipo de medidas de protección destinada a proteger la integridad personal y vida de la víctima y de sus familiares.

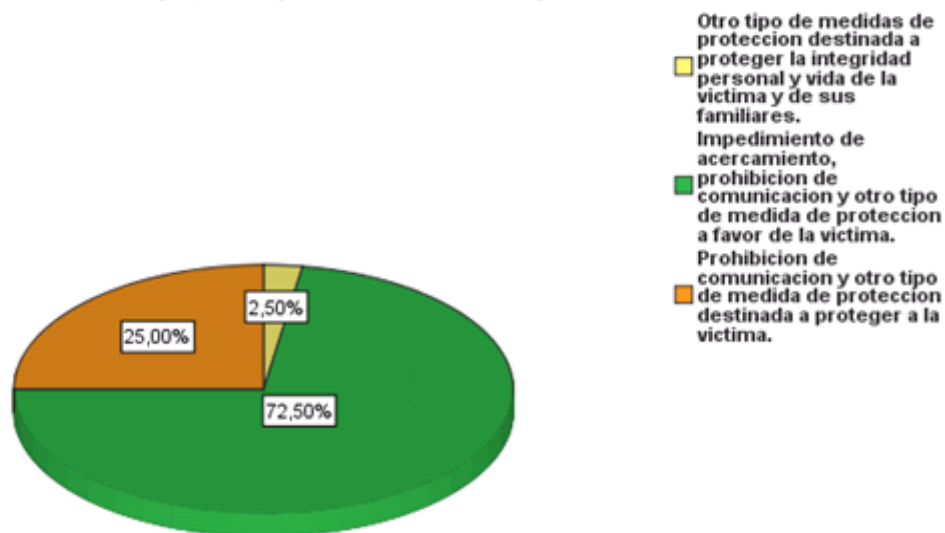
**TABLA N° 9**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Otro tipo de medidas de protección destinada a proteger la integridad personal y vida de la víctima y de sus familiares.	1	2,5%
Impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección a favor de la víctima	29	72,5%
Prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección destinada a proteger a la víctima.	10	25%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

## GRAFICO N° 9

**Tipos de medidas de proteccion dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de enero a julio del 2018.**



## ¿QUE DERECHOS PRETENDE PROTEGER LAS MEDIDAS DE PROTECCION DICTADAS POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA?

Según el tipo de violencia comprobada mediante el auto final, salvo excepciones, se otorgan determinadas medidas de protección a favor de los menores, por ello cada tipo de medida tiene determinada finalidad para garantizar determinados derechos. Por ello, se llego a determinar que el 47,5% de las medidas de protección dictadas a favor de los menores están destinadas a proteger el derecho a la integridad psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad; el 30% de las medidas de protección a favor de los menores estan destinadas a proteger el derecho a la integridad física, a una vida libre de violencia y dignidad; y el 22,5% de las medidas de protección a favor de los menores están destinadas a proteger el derecho a la integridad física, a la integridad psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad. Este resultado está representado en la Tabla N° 10 y la Grafico N° 10.

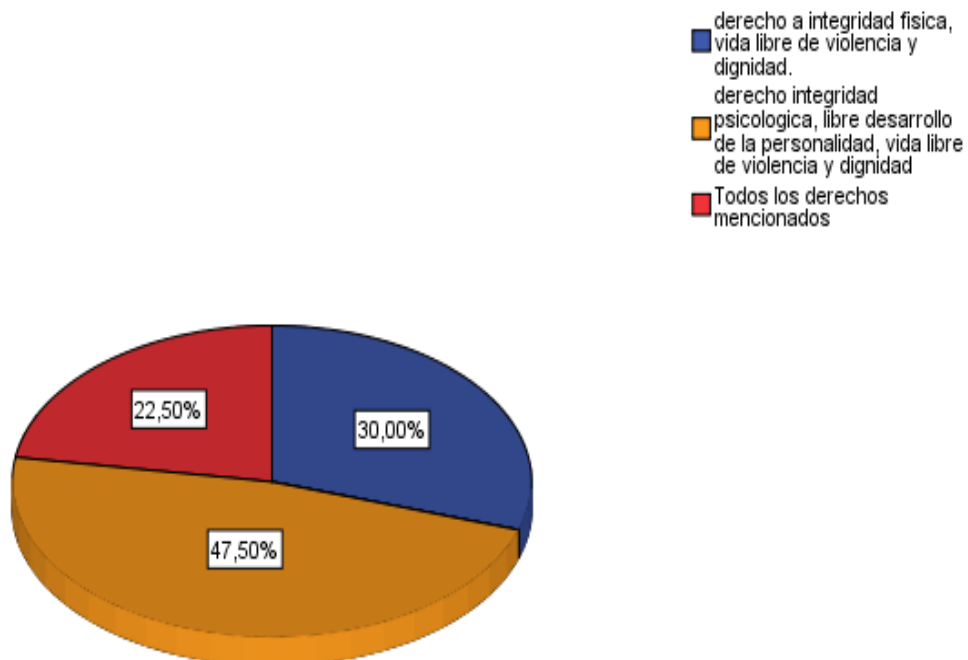
**TABLA N° 10**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Derecho a integridad física, vida libre de violencia y dignidad.	12	30%
Derecho integridad psicológica, libre desarrollo de la personalidad, vida libre de violencia y dignidad	19	47,5%
Todos los derechos mencionados	9	22,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 10**

**¿Que derechos pretende proteger las medidas de proteccion dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo?**



### ¿LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN HAN SIDO NOTIFICADAS?

El Segundo Juzgado de Familia cumplió con notificar el 100% de las medidas de protección, dictadas a favor de los menores. Este resultado está representado en la Tabla N° 11 y la Grafico N° 11.

**TABLA N° 11**

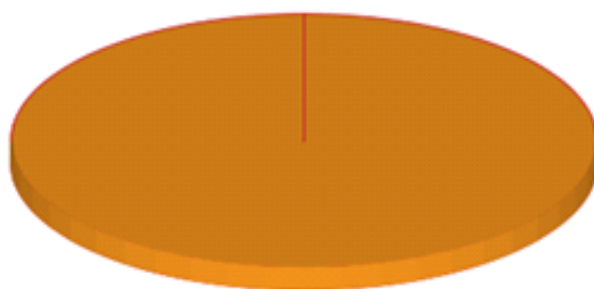
	Frecuencia	Porcentaje
SI	40	100%
NO	0	0%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICA N° 11**

¿Las medidas de proteccion han sido notificadas?

■ SI



### ¿LAS COMISARIAS PNP DE CHICLAYO CUMPLIERON CON INFORMAR AL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION A FAVOR DE LOS MENORES?

De la revisión de los expedientes, se determinó que solo el 15% de las Comisarias informaron al Segundo Juzgado de familia sobre el cumplimiento de las medidas de protección a favor de los menores, en cambio el 85% de las comisaría de Chiclayo no informaron sobre el cumplimiento de las medidas de protección a favor de los menores. Este resultado está representado en la Tabla N° 12 y la Grafico N° 12.

**TABLA N° 12**

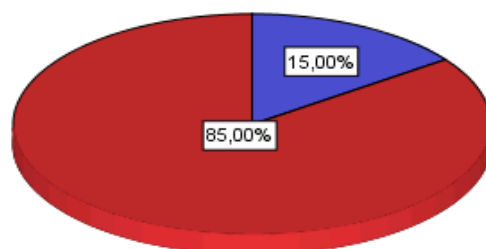
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
SI cumplieron con informar al Segundo Juzgado de Familia	6	15%
NO cumplieron con informar al Segundo Juzgado de Familia	34	85%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida de los expedientes por violencia familiar, tramitados en el Segundo Juzgado de Familia, del periodo de enero a julio del 2018.

**GRAFICO N° 12**

¿Las Comiserias PNP de Chiclayo cumplieron con informar al Segundo Juzgado de Familia sobre el cumplimiento de las medidas de proteccion a favor de los menores?

■ SI  
■ NO





### ¿EL AGRESOR HA CUMPLIDO LAS MEDIDAS DE PROTECCION?

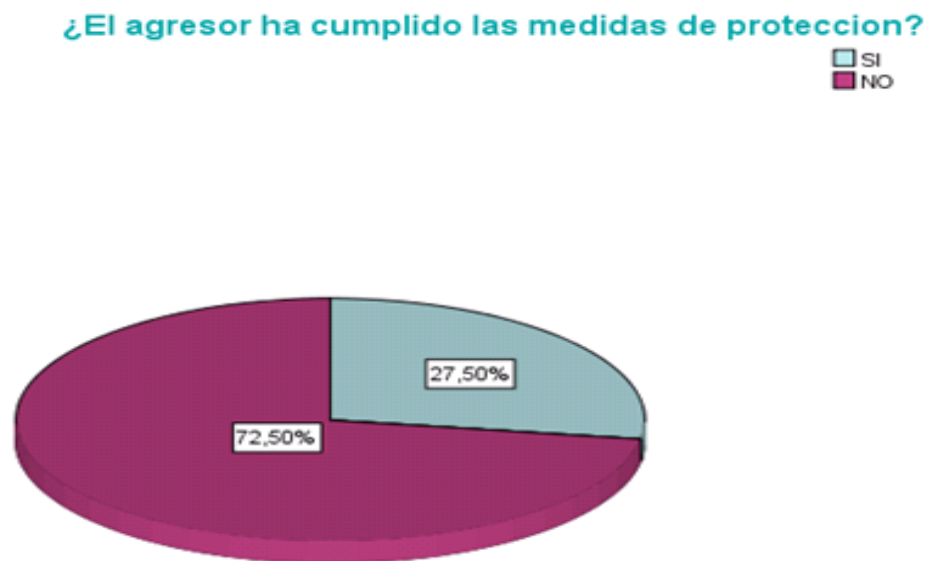
Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el juzgado de familia de Chiclayo, solo el 27,5% respondió que SI fueron cumplidas las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia, y el 72,5% respondió que NO fueron cumplidas las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia. Este resultado está representado en la Tabla N° 13 y la Grafico N° 13.

**TABLA N° 13**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Prcentaje</b>
SI	11	27,5%
NO	29	72,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida atraves de los cuestionarios realizados a los responsables (padre o madre o tutor) del cuidado de los menores de edad, que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo.

**GRAFICA N° 13**



### **¿UD. INFORMÓ AL JUZGADO FAMILIA DE CHICLAYO, QUE EL AGRESOR INCUMPLIO LAS MEDIDAS DE PROTECCION?**

Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de familia de Chiclayo, solo el 20.69% respondió que SI informo al Juzgado de Familia sobre el incumplimiento del agresor respecto a las medidas de protección, y el 79,31% respondió que NO informo al Juzgado de Familia sobre el incumplimiento del agresor respecto a las medidas de protección. Este resultado está representado en la Tabla N° 14 y la Grafico N° 14.

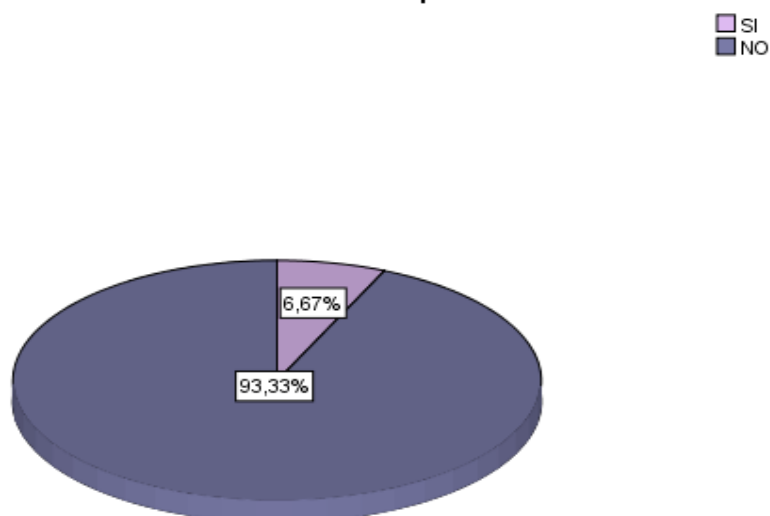
**TABLA N° 14**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Prcentage</b>
SI	6	20,69%
NO	23	79,31%
Total	29	100%

**Fuente:** Información obtenida atraves de los cuestionarios realizados a los responsables (padre o madre o tutor) del cuidado de los menores de edad, que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo.

**GRAFICO N° 14**

**¿Ud. informó al Juzgado Familia de Chiclayo, que el agresor incumplio las medidas de proteccion?**



**¿UD. CONSIDERA QUE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO SON EFECTIVAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD CUANDO SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR?**

Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el juzgado de familia de Chiclayo, solo el 27,5% respondió que “SI” considera que las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia de Chiclayo son efectivas para proteger los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar, y el 72,5% respondió que “NO” considera que las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo son efectivas para proteger los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar. Este resultado está representado en la Tabla N° 15 y la Grafico N° 15.

**TABLA N° 15**

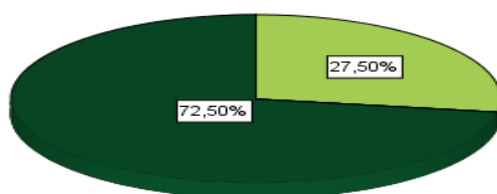
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
SI	11	27,5%
NO	29	72,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida a través de los cuestionarios realizados a los responsables (padre o madre o tutor) del cuidado de los menores de edad, que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo.

**GRAFICO N° 15**

**¿Ud. considera que las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo son efectivas para proteger los derechos de los menores de edad cuando son víctimas de violencia familiar?**

SI  
NO



**¿UD. CONSIDERA QUE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ CUMPLE EFICIENTEMENTE SU LABOR DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO?**

Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo, solo el 17,5% respondió que “SI” es eficiente la labor de la PNP de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, y el 72,5% respondió que “NO” es eficiente la labor de la PNP de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección. Este resultado está representado en la Tabla N° 16 y la Grafico N° 16.

**TABLA N° 16**

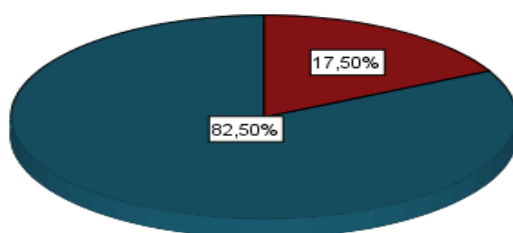
	Frecuencia	Porcentaje
SI es eficiente la labor de la PNP	7	17,5%
NO es eficiente la labor de la PNP.	33	82,5%
Total	40	100%

**Fuente:** Información obtenida a través de los cuestionarios realizados a los responsables (padre o madre o tutor) del cuidado de los menores de edad, que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo.

**GRAFICA N° 16**

**¿Ud. considera que la policía nacional del Perú cumple eficientemente su labor de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el juez del segundo juzgado de familia de Chiclayo?**

■ SI es eficiente la labor de la PNP  
■ NO es eficiente la labor de la PNP.



## **CAPITULO V: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS**

### **5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS**

#### **5.1. LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DICTADAS POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018.**

Habiendo concluido con la investigación, es necesario realizar la confrontación de la situación problemática de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta con los resultados obtenidos, consecuentemente, se confirma que las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo en el periodo de Enero a Julio del 2018, no son efectivas para proteger a los menores de edad cuando son víctimas de violencia familiar en el Distrito de Chiclayo.

La interrogante que nos hemos planteado al iniciar el trabajo de investigación es: ¿Son efectivas las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo para garantizar la protección de los derechos de menores de edad, en los casos de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018?, al haber concluido la investigación y, a la luz de los resultados obtenidos, se pudo determinar que las medidas de protección que dicta el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, para proteger a los menores de edad víctimas de violencia familiar, no son efectivas; al respecto, las fichas de observación documental aplicados a los expedientes de procesos de Violencia contra los menores de edad en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de enero hasta julio del 2018, se pudo apreciar que: i) Durante el periodo de enero a julio del 2018 se ha dictado 40 autos finales que contiene medidas de protección a favor de los menores de edad víctimas de violencia; ii) las medidas de protección más comunes que se han dictado durante el periodo de enero a julio del 2018, son el Impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección destinada a proteger a la integridad personal y vida de la

víctima y de sus familiares; iii) las medidas de protección dictadas a favor de los menores están destinadas a proteger el derecho a la integridad física, psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad; iv) las medidas de protección a favor de los menores de edad víctimas de violencia familiar, no han sido otorgadas oportunamente porque las comisarías de Chiclayo incumplieron el deber de remitir las denuncias o atestados policiales dentro de las 24 horas al Juzgado de familia, por otro lado una vez que el juzgado tomo conocimientos de los hechos, el tiempo promedio para que dicte las medidas de protección a favor de los menores fue de 30 días, y por último, el tiempo promedio total desde la interposición de la denuncia hasta la emisión de las medidas de protección a favor de los menores víctimas de violencia familiar fue de 90 días; v) Las Comisarias de Chiclayo no cumplieron con informar al Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo sobre el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar; vi) Todas las medidas de protección dictadas han sido notificadas a las partes. Y al respecto sobre los cuestionarios aplicados a los responsables (padre o madre o tutor) del cuidado de los menores de edad que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia, se ha podido apreciar que: i) La mayor parte de las medidas de protección no han sido cumplidas por el agresor; ii) Las mayoría de las víctimas no informaron al juzgado de familia que las medidas de protección están siendo incumplidas; iii) La mayoría de los encuestados consideran que las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo no son efectivas para proteger los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar; iv) La mayoría de los encuestados consideran que no es eficiente la labor de la PNP de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección.

En cuanto a la **EFFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN**, es necesario que el Estado cumpla su deber protector de garantizar la plena vigencia y eficacia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello el Estado mediante sus instituciones respectivas (PNP, Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) debe concretizar este

fin protector. De acuerdo a la Ley N° 30364, una vez dictadas las medidas de protección por el juez de familia, el responsable de la ejecución inmediata de estas medidas es la Policía Nacional del Perú, es decir tienen el deber funcional de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, y por ende se garantizaría la protección de los derechos (integridad física, integridad psicológica, libre desarrollo de la personalidad, vida libre de violencia, dignidad) de la víctima, por otro lado los Gobiernos Regionales y Locales tienen responsabilidades sociales para afrontar la violencia contra mujer y contra los integrantes del grupo familiar, entre estas responsabilidades se encuentra formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas regionales, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así mismo incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de coordinación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana

Las medidas de protección que puede dictar el Juez de Familia se encuentran previstas en el artículo 22 de la Ley 30364 y en el artículo 37 de su Reglamento, estas pueden ser: Retiro del agresor del domicilio, Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine; Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación; Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección; Inventario sobre sus bienes; Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes; Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de

cuidado del grupo familiar; Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora; Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima; Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima; Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este; Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.

## **5.2. ANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS RESULTADOS**

Discutiendo desde el punto de vista de los resultados obtenidos, podemos indicar que, de la aplicación de las fichas de observación documental a los expedientes de procesos de Violencia contra los menores de edad en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo en el periodo de enero hasta julio del 2018 y los cuestionarios aplicados a los responsables (padre o madre o tutor) del cuidado de los menores de edad que cuentan con medidas de protección, encontramos que:

1. Del 100% de los expedientes revisados por violencia familiar en el Segundo Juzgado de Familia, en el periodo de enero a julio del 2018, se pudo apreciar que: a) el motivo de las denuncias por violencia contra los menores de edad, el 17.5% fue por violencia física, el 32.5% por violencia psicológica, el 2.5% por violencia sexual, y el 47.5% por violencia física y psicológica (TABLA N° 1); b) 40 menores de edad recibieron medidas de protección a su favor, de esta totalidad el 75% son de 6 a 12 años, y el 25% son de 13 a 17 años (TABLA N° 2); c) el porcentaje de menores agredidos fue los niños con un 35%, las niñas con un 37.5%, los adolescentes varones en un 17.5% y las adolescentes mujeres en un 10%, es decir los más vulnerables a ser agredidos son los niños y niñas (TABLA N° 3); d) el 47.5% de las agresiones han sido producidas por el padre, 22.5% son producidas por la madre, el 7.5% por el tío, 7.5% tía, el 5%



por la abuela, 5% por la madrastra y el 5% por otro familiar, entonces el agresor frecuente de los menores de edad suelen ser los padres de los menores (TABLA N° 4). De acuerdo a estos resultados obtenidos, durante el periodo de enero a julio del 2018 se ha dictado 40 autos finales que contiene medidas de protección a favor de los menores de edad; que el mayor porcentaje de menores agraviados son niños y niñas de 6 a 12 años, y el agresor frecuente suelen ser los padres de los menores de edad.

2. Del 100% de los expedientes revisados por violencia contra los menores de edad, en el Segundo Juzgado de Familia, en el periodo de enero a julio del 2018, mediante auto final se determinó que tipo de violencia habría sufrido el menor para que se pueda dictar la medida de protección, el 37.5% fue por violencia física, el 42.5% por violencia psicológica, el 10% por violencia física y psicológica, el 2.5% por violencia sexual y el 7.5% no se comprobó la violencia pero igual se dictó medida de protección (TABLA N° 5). De acuerdo a este resultado obtenido, el mayor índice de violencia ejercida sobre los menores es la violencia psicológica y física, y que excepcionalmente se puede otorgar la medidas de protección cuando las circunstancias de los hechos lo exijan, es decir se dicta medidas de protección aunque no se compruebe mediante certificado médico legal o pericia psicológica el daño sufrido, siempre y cuando exista un riesgo severo e inminente.

3. Del 100% de los expedientes revisados por violencia contra los menores de edad, en el Segundo Juzgado de Familia, en el periodo de enero a julio del 2018, se determinó que: a) la mayoría de denuncias por Violencia contras los menores realizadas en las Comisarias de Chiclayo, fueron remitidas al Segundo Juzgado de Familia en un tiempo mayor a 24 horas, es así que tenemos un porcentaje de 12.5% en un tiempo promedio de uno a tres días, 22.5% en un tiempo promedio de cuatro a seis días, 17.5% en un tiempo promedio de siete a nueve días, y un 47.5 % en un tiempo promedio mayor a 10 días, por lo tanto las comisarías de Chiclayo incumplieron el deber de remitir las denuncias o atestados policiales dentro de las 24 horas al Juzgado de familia (TABLA N° 6); b) el 20% de las medidas de protección a favor de los menores, fueron dictadas en un tiempo menor a 07 días, un 22,5% de las medidas de protección fueron dictadas

en un tiempo promedio de 07 a 15 días, un 30% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 16 a 30 días, un 2,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 31 días a 50 días, un 15% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 51 días a 70 días, un 2,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo promedio de 71 días a 90 días, y un 7,5% de las medidas de protección fueron dictadas en un tiempo mayor a los 90 días, entonces el tiempo promedio general para que el Segundo Juzgado de Familia, dicte las medidas de protección a favor de los menores es de 30 días (TABLA N° 7); c) el total del tiempo transcurrido desde la interposición de la denuncia por violencia familiar hasta la emisión de la medida de protección a favor del menor, el 35% fue menor a 30 días, el 25% fue de 31 días a 60 días, el 22,5% fue de 61 días a 90 días, el 10% fue de 91 días a 120 días, y el 7,5% fue mayor a 120 días, entonces el tiempo promedio general desde la interposición de la denuncia hasta que el Segundo Juzgado de Familia dicte las medidas de protección a favor de los menores es de 90 días (TABLA N° 8). De acuerdo a estos resultados obtenidos, las medidas de protección a favor de los menores de edad víctimas de violencia familiar, no han sido otorgadas oportunamente porque las comisarías de Chiclayo incumplieron el deber de remitir las denuncias o atestados policiales dentro de las 24 horas al Juzgado de familia, por otro lado una vez que el juzgado tomo conocimientos de los hechos, el tiempo promedio para que dicte las medidas de protección a favor de los menores fue de 30 días, y por último, el tiempo promedio total desde la interposición de la denuncia hasta la emisión de las medidas de protección a favor de los menores víctimas de violencia familiar fue de 90 días.

4. Del 100% de los expedientes revisados por violencia contra los menores de edad, en el Segundo Juzgado de Familia, en el periodo de enero a julio del 2018, se determinó que: a) mediante auto final se dispuso el Impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección a favor de la víctima en un 72.5%, se dispuso la prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección destinada a proteger a la víctima en un 25%, y se dispuso otro tipo de medidas de protección destinada a proteger la integridad personal y vida de la víctima y de sus

familiares en un 2.5% (TABLA N° 9); b) el 47.5% de las medidas de protección dictadas a favor de los menores están destinadas a proteger el derecho a la integridad psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad, el 30% de las medidas de protección a favor de los menores están destinadas a proteger el derecho a la integridad física, a una vida libre de violencia y dignidad, y el 22.5% de las medidas de protección a favor de los menores están destinadas a proteger el derecho a la integridad física, a la integridad psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad (TABLA N° 10); c) se cumplió con notificar el 100% de las medidas de protección, dictadas a favor de los menores (TABLA N° 11). De acuerdo a estos resultados obtenidos, las medidas de protección más comunes que se han dictado durante el periodo de enero a julio del 2018, son el Impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección destinada a proteger a la integridad personal y vida de la víctima y de sus familiares; y que las medidas de protección dictadas a favor de los menores están destinadas a proteger los derechos a la integridad física, psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad; por último, todas las medidas de protección dictadas han sido notificadas a las partes.

5. Del 100% de los expedientes revisados por violencia contra los menores de edad, en el Segundo Juzgado de Familia, en el periodo de enero a julio del 2018, se verifico que: a) solo el 15% de las Comisarias informaron al Segundo Juzgado de familia sobre el cumplimiento de las medidas de protección a favor de los menores, en cambio el 85% de las comisaría de Chiclayo no informaron sobre el cumplimiento de las medidas de protección a favor de los menores (TABLA N° 12). De acuerdo a este resultado obtenido, las Comisarias de Chiclayo no cumplieron con informar al Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo sobre el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar.

6. Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el juzgado de familia de Chiclayo, se obtuvo

que: a) solo el 27.5% respondió que SI fueron cumplidas las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia, y el 72.5% respondió que NO fueron cumplidas las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia (TABLA N° 13); b) solo el 20.69% respondió que SI informo al Juzgado de Familia sobre el incumplimiento del agresor respecto a las medidas de protección, y el 79.31% respondió que NO informo al Juzgado de Familia sobre el incumplimiento del agresor respecto a las medidas de protección (TABLA N° 14). De acuerdo a estos resultados obtenidos, la mayor parte de las medidas de protección no han sido cumplidas por el agresor; y que la mayoría de las víctimas no informaron al juzgado de familia que las medidas de protección están siendo incumplidas.

7. Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el juzgado de familia de Chiclayo, solo el 27,5% respondió que “SI” considera que las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia de Chiclayo son efectivas para proteger los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar, y el 72,5% respondió que “NO” considera que las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo son efectivas para proteger los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar (TABLA N° 15). De acuerdo a estos resultados obtenidos, la mayoría de los encuestados consideran que las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo, no son efectivas para proteger los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar

8. Del 100% de los encuestados responsables del cuidado de los menores que cuentan con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Chiclayo, solo el 17,5% respondió que “SI” es eficiente la labor de la PNP de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, y el 72,5% respondió que “NO” es eficiente la labor de la PNP de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección (TABLA N° 16). De acuerdo a este resultado obtenido, la mayoría de los encuestados consideran que no es eficiente la labor de la PNP de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección.

Por lo tanto, de acuerdo a las unidades de análisis descritas, se ha podido demostrar que la hipótesis general planteada en el presente trabajo, resulta ser válida porque de acuerdo a los resultados obtenidos, las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia en el periodo de enero a julio del 2018, no son efectivas porque no han cumplido su finalidad de garantizar la protección de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar, es decir con las medidas de protección no se podría garantizar eficazmente la protección de los derechos de los menores, cuando son víctimas de violencia familiar, ya que no son cumplidas por el agresor y no se ejecuta las acciones necesarias para su cumplimiento.

### **5.3.APORTE CIENTÍFICO**

#### **Propuesta de proyecto de ley**

En virtud de lo desarrollado en la presente tesis se ha creído conveniente realizar un Proyecto de Ley que servirá para modificar los artículos 22, 22-A, 23, 23-A, 23-B y 23-C de la Ley N° 30364 del Capítulo II del Título II de la citada ley, en el extremo de fijar mecanismos para lograr el cumplimiento y eficacia de las medidas de protección dictadas por los juzgados de familia, de forma específica se busca la modificación parcial de los citados artículos; en tal sentido se fortalecerá los dispositivos a modificarse mediante la incorporación de una serie de mecanismos para garantizar el cumplimiento y eficacia de las medidas de protección dictadas a favor de los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

**LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23,  
22-A, 23, 23-A, 23-B, y 23-C DE LA LEY N°  
30364 – LEY PARA PREVENIR,  
SANCIONAR Y ERRADICAR LA  
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y  
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
FAMILIAR**

**FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY**

**LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23, 22-A, 23, 23-A, 23-B, y 23-C DE LA  
LEY N° 30364 – LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA  
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
FAMILIAR**

**Artículo 1.- Objeto**

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, mejorando los mecanismos de atención y protección de las víctimas, especialmente el marco que regula las medidas de protección.

**Artículo 2. Modificación:**

Modifíquese el texto del artículo 22, 22-A, 23, 23-A, 23-B, y 23-C de la Ley N° 30364, el que quedará redactado en los términos siguientes:

**Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección**

El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales.

El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes:

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral.
5. Inventario de bienes.
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia.

El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.

7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes.
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.
9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares.”

***En caso de Riesgo Severo, cuando las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia debe dictar las medidas de protección correspondientes, en el plazo de 24 horas que establece la ley.***

***En Caso de Riesgo moderado o leve, cuando las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia debe dictar las medidas de protección correspondientes, en el plazo de 48 horas que establece la ley.***

#### **“Artículo 22-A. Criterios para dictar medidas de protección**

El juzgado de familia dicta las medidas de protección teniendo en cuenta lo siguiente:

- a. Los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales emitidos por entidades públicas competentes.
- b. La existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar,



por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; la libertad sexual, el patrimonio y otros que denoten su peligrosidad.

- c. La relación entre la víctima con la persona denunciada.
- d. La diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada.
- e. La condición de discapacidad de la víctima.
- f. La situación económica y social de la víctima.
- g. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión.
- h. Otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada.

***En caso de Riesgo Severo, el juzgado de familia debe hacer extensivas las medidas de protección a las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima.***

***En Caso de Riesgo moderado o leve, el juzgado de familia puede hacer extensivas las medidas de protección a las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima.***

Asimismo, en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio, toma en cuenta a las víctimas indirectas del delito.

***Cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, en virtud del interés superior del niño y adolescente, el juzgado de familia deberá disponer inmediatamente su protección y su recuperación integral, en el caso que el agresor sea el padre o algún familiar, en aras de garantizar la unidad familiar, el juzgado de familia debe disponer inmediatamente el tratamiento reeducativo o terapéutico o psicológico para la persona agresora con la finalidad de rehabilitarla y lograr su reincorporación al hogar o núcleo familiar. En el caso cuando las víctimas sean mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia también deberá disponer inmediatamente su protección y recuperación integral.***

Los criterios señalados en los párrafos anteriores también son aplicables para la emisión de las medidas cautelares.

**Artículo 23. Vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares.**

Las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación, o al proceso penal o de faltas.

*Cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, en virtud del interés superior del niño y adolescente, las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia se mantendrán vigentes, siempre y cuando de los informes periódicos remitidos por las entidades encargadas de su cumplimiento, se determine la existencia de un riesgo, contrario sensu si no se determinara la existencia de algún riesgo se dejara sin efecto las medidas de protección. En el caso que de los informes periódicos se advierta la existencia de un riesgo severo, el juzgado de familia de oficio deberá disponer que el órgano multidisciplinario verifique si las medidas de protección están siendo cumplidas por el agresor, y si no estén siendo cumplidas el juez de familia de oficio debe de sustituirlas o ampliarlas, a fin de salvaguardar la vida e integridad del menor de edad. Ante el incumplimiento, el juzgado de familia debe poner en conocimiento del Ministerio Público para que investigue por la comisión del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.*

Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia cuando, de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución, advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima, o a solicitud de esta última. En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a la audiencia respectiva.

El juzgado de familia también puede sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación,

o proceso penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la audiencia respectiva.

El juzgado de familia, inmediatamente y por cualquier medio, comunica su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución.

Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial hasta que sean dejadas sin efecto por orden judicial.

#### **Artículo 23-A. Ejecución de la medida de protección**

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de sus competencias, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; asimismo, debe llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para brindar una respuesta oportuna.

*Los Gobiernos Locales, mediante el Área de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia, deberá coordinar planes y estrategias con las comisarías de su localidad, por ello el Área de Seguridad Ciudadana y Fiscalización deberá contar con una vía de comunicación adecuada con las víctimas, para fines de una inmediata y oportuna intervención que garanticen la vida e integridad de la víctima.*

Los nombres y ubicación de todas las víctimas con medidas de protección deben estar disponibles permanentemente para todo el personal policial **y personal de serenazgo** en la jurisdicción en la que domicilia la víctima, a fin de responder oportunamente ante emergencias.

Las medidas de protección que no se encuentren en el ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú son ejecutadas por las entidades públicas competentes que disponga el juzgado.

La atención de comunicaciones de víctimas con medidas de protección en la jurisdicción, incluyendo la visita a domicilio cuando esta es requerida, es prioritaria para todo el personal policial.

#### **Artículo 23-B. Órganos de supervisión y apoyo de la ejecución de la medida de protección**

El juzgado de familia dispone lo necesario para supervisar el cumplimiento de las medidas de protección en todos los casos, en coordinación con las entidades pertinentes.

*En caso de Riesgo Severo, en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia debe disponer que el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas inopinadas cada cinco o siete días, para supervisar el cumplimiento de la medida de protección.*

*En Caso de Riesgo moderado o leve, el juzgado de familia puede disponer que el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas inopinadas cada siete o doce días, para supervisar el cumplimiento de la medida de protección.*

*En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia debe disponer que el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas e inopinadas a las Comisarias de la localidad de su jurisdicción, para supervisar si las medidas de protección están siendo ejecutadas. En el caso, que las medidas de protección no estén siendo ejecutadas por la Comisaria competente, el Equipo Multidisciplinario deberá realizar en el plazo de 48 horas la respectiva visita al domicilio de la víctima con el fin de verificar si las medidas de protección están siendo*

***cumplidas, y una vez realizada la visita al domicilio de la víctima, comunica esta situación al juzgado de Familia dentro de las veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.***

En los lugares donde no exista Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, el juzgado de familia puede disponer que la supervisión sea realizada por los centros de salud mental comunitarios, hospitales, defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes (DEMUNA), centros emergencia mujer, Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), Estrategia Rural o gobiernos locales, de acuerdo a sus competencias.

#### **Artículo 23-C. Informe de cumplimiento de la medida de protección**

***La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de familia un informe sobre la ejecución de la medida.***

***En casos de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha en que fue notificada la medida de protección, con las recomendaciones que consideren pertinentes.***

***En Casos de Riesgo moderado o leve, dicho informe debe ser remitido dentro de los quince (15) días contados desde la fecha en que fue notificada la medida de protección, con las recomendaciones que consideren pertinentes.***

***Adicionalmente, cada tres meses, en los casos de riesgo leve o moderado, y cada mes y medio, en los casos de riesgo severo, contados desde que fue notificada la medida de protección, las entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de familia un informe sobre el cumplimiento de dicha medida y sobre la situación de riesgo de la víctima, con las recomendaciones que consideren pertinentes.***

El juzgado de familia que no reciba los citados informes en los plazos señalados, comunica esta situación al titular de la entidad respectiva, a fin de que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección, deben comunicar esta situación al juzgado de familia dentro de las veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

### **Disposiciones finales**

**Primera.-** Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta ley.

**Segunda.-** La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los días del mes de

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los días del mes de 2019

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente propuesta de ley surge como consecuencia del grave y existente problema social que aqueja a la sociedad peruana, que gira debido a la deficiencia legislativa y judicial, así como la indiferencia de los Gobiernos Regionales y Locales de no proponer planes y estrategias para neutralizar, disminuir o erradicar la violencia familiar y violencia de género. En ese sentido, la presente ley busca fortalecer la vigente **LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, con la finalidad de garantizar la eficacia en el cumplimiento de las medidas de protección a favor de o las víctimas, teniendo como principal fundamento la debida y correcta protección de los derechos fundamentales *de los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad*.

Pues, el contexto, nos permite evidenciar, la necesidad de modificar dichos dispositivos legales, máxime si nuestra legislación peruana, la jurisprudencia actual y la cruda realidad plasmada en diferentes medios de comunicación y marchas en contra de la violencia, viene siendo objeto de diversas críticas, por las deficiencias de la Ley 30364. Por lo que, el presente proyecto de ley contribuirá a resolver dicho problema jurídico, pues, lo que se espera es implementar su incorporación en la citada ley.

### **EFFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

La propuesta legislativa en estricto modifica el artículo 22, 22-A, 23, 23-A, 23-B, 23-C de la Ley 30364.

### **ANÁLISIS COSTO BENEFICIO**

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos extraordinarios al Erario Nacional, por cuanto se trata de mecanismos que deberán tener en cuenta el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales.

## CONCLUSIONES

- Las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de Enero a Julio del 2018, no fueron efectivas para garantizar la protección de los derechos de los menores cuando son víctimas de violencia familiar.
- El Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, durante el periodo de enero a julio del 2018, ha dictado 40 autos finales que contiene medidas de protección a favor de los menores de edad.
- El mayor porcentaje de menores agraviados son niños y niñas de 6 a 12 años, y el agresor frecuente suelen ser los padres (papa o mama) de los menores de edad.
- El mayor índice de violencia ejercida sobre los menores es la violencia psicológica y física, y que excepcionalmente se puede otorgar la medidas de protección cuando las circunstancias de los hechos lo exijan, es decir se dicta medidas de protección aunque no se compruebe mediante certificado médico legal o pericia psicológica el daño sufrido, siempre y cuando exista un riesgo severo e inminente.
- Las medidas de protección más comunes que se han dictado en el Segundo Juzgado de Familia, durante el periodo de enero a julio del 2018, son el Impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación y otro tipo de medida de protección destinada a proteger a la integridad personal y vida de la víctima y de sus familiares; y que las medidas de protección dictadas a favor de los menores están destinadas a proteger los derechos a la integridad física, psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia y dignidad; por último, todas las medidas de protección dictadas han sido notificadas a las partes.
- Las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia, a favor de los menores de edad víctimas de violencia familiar, no han sido otorgadas oportunamente porque las comisarías de Chiclayo incumplieron el deber de remitir las denuncias o atestados policiales dentro de las 24 horas al Segundo Juzgado de familia, por otro



lado una vez que el juzgado tomo conocimientos de los hechos, el tiempo promedio para que dicte las medidas de protección a favor de los menores fue de 30 días, y por último, el tiempo promedio total desde la interposición de la denuncia hasta la emisión de las medidas de protección a favor de los menores víctimas de violencia familiar fue de 90 días.

- La mayor parte de las medidas de protección no han sido cumplidas por el agresor; y que la mayoría de las víctimas no informaron al juzgado de familia que las medidas de protección están siendo incumplidas.
- Las Comisarias de Chiclayo no cumplieron con informar al Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo sobre el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar.
- La Policía Nacional del Perú, no cumplió eficientemente su labor de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar, en el periodo Enero a Julio del 2018.

## RECOMENDACIONES

- El Gobierno Nacional debe implementar nuevas políticas sociales orientadas a efectivizar la aplicación de las medidas de protección dictadas por los juzgados de familia a favor de las víctimas de violencia familiar, específicamente cuando se trata de violencia familiar contra personas en situación de vulnerabilidad (mujeres gestantes, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes), puesto que, son ellos los que más sufren las consecuencias de los maltratos físicos, psicológicos, sexuales y económicos que ocurren dentro del núcleo familiar.
- El Gobierno Nacional debe modificar el artículo 22, 22-A, 23, 23-A, 23-B y 23-C, de la Ley 30364 y el artículo 38 del Reglamento de la Ley 30364, en el sentido que se debe efectivizar la aplicación y el cumplimiento de las medidas de protección, y se debe ampliar el objetivo de las medidas de protección social con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad, pues al ser los más vulnerables son los que generalmente padecen las consecuencias de la violencia. Por ello, las medidas de protección no solo deben ser prohibitivas o restrictivas de derechos sino también disponer en el caso cuando la víctima sea un menor de edad (niño, niña y adolescente) y el agresor sea el padre, en virtud del interés superior del niño y en resguardo de la unidad de la familia, se deberá ordenar que el agresor se someta a un tratamiento reeducativo, terapéutico o psicológico con el fin de rehabilitarlo y se reincorpore al hogar o núcleo familiar.
- El Gobierno Regional de Lambayeque, en conjunto con sus Gobiernos Locales, debe realizar un estudio sociológico-jurídico-económico para determinar la realidad del problema social en la Provincia de Chiclayo, y de acuerdo al resultado poder formular políticas sociales, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas sociales, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

- Los Gobiernos Locales, mediante el Área de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, deberá coordinar planes y estrategias con las comisarías de su localidad, con el fin de poder actuar e intervenir de manera inmediata y oportuna en los casos cuando un ciudadano este siendo víctima de violencia familiar, en especial cuando la víctima sea un niño, niña, adolescente, mujer gestante y persona con discapacidad, pues por su condición de tal, son los más vulnerables de sufrir las consecuencias de la violencia, por ello el personal del Área de Seguridad Ciudadana y Fiscalización deberá estar debidamente capacitada para poder afrontar situaciones de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, en especial relevancia cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, al existir medidas de protección dictadas por el juzgado de familia a favor de las víctimas de violencia familiar, es necesario que el Gobierno Local, a través del Área de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, actúe conjuntamente con las Comisarias de su Localidad, para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, por ello se deberá contar con una vía de comunicación (telefónica, electrónica, redes sociales, entre otras) adecuada con las víctimas, para fines de una inmediata y oportuna intervención que garanticen la vida e integridad de la víctima.
  
- El Estado Peruano debe incluir una disposición que en el caso cuando las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad, permita que el juez de familia disponga que el equipo multidisciplinario, realice visitas periódicas e inopinadas a las Comisarias de la localidad de su jurisdicción, para supervisar si las medidas de protección están siendo ejecutadas, con el fin de corroborar si las medidas de protección están garantizando la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de violencia. Así mismo el equipo multidisciplinario deberá realizar un seguimiento periódico a los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia familiar, con el fin de garantizar su recuperación integral y protección de sus derechos fundamentales.
  
- Las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), deben estar facultadas para dictar medidas de protección provisionales en los casos de riesgo, y

estas medidas tendrán vigencia hasta que el Juez de Familia dicte las medidas de protección correspondientes. Con ello se permitirá una intervención inmediata y oportuna para proteger a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

- Solo la participación directa del Estado Peruano, en la población víctima de pobreza y analfabetismo, podrá prevenir la violencia familiar, mediante el fomento de valores, otorgar asignaciones por nacimiento de hijo en hogares de extrema pobreza, y oportunidades de trabajo a dichas familias, entre otras medidas se podrá combatir el problema de la violencia familiar.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS:

- AYVAR ROLDÁN, Carolina. *Violencia Familiar, Interés de todos*, ADRUS, Primera edición, Arequipa, 2007.
- AMES, Rolando. “Condiciones estructurales de violencia en el Perú”, en: A.A.V.V. *Familia y Violencia en el Perú de hoy*, Lima, 1986.
- BALCÁZAR QUIROZ, José. *Teoría de las Medidas Autosatisfactivas: Una Aproximación desde la Teoría General del Proceso*, Ara Editores, Lima, 2010.
- BENDEZU BARNUEYO, Rocci. *Delito de feminicidio. Análisis de la violencia contra la mujer desde una perspectiva jurídico penal*, Ara Editores Lima, 2015.
- BERNALES BALLESTEROS, Enrique. *La Constitución de 1993. Análisis Comparado*, Editora Rao, Lima, 1999.
- BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. *Derechos Fundamentales y proceso justo*, Ara Editores, Primera Edición, Lima, 2001.
- CASTILLO APARICIO, Jhonny E. *Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar*, Jurista Editores, Lima, 2018.
- CORSI, Jorge. *Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social*. Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, Segunda Edición, 1997.
- CHANAME ORBE, RAUL. *La Constitución Comentada, Tomo II*, Editorial ADRUS, Arequipa, 2011.
- DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena B: *La Violencia Doméstica. Análisis Sociológico, Dogmático y Derecho Comparado*. Editorial Comares, Granada, 2001.
- DUTTO, Ricardo J.”Daños ocasionados en las relaciones de familia”, Primera edición, Hamurabi, Buenos Aires, 2006.
- ESPINOZA ESPINOZA, Juan. *Derecho de las personas*. Tercera edición, Editorial Huallaga, Lima, 2001.

- ESPINOZA MATOS, María Jesús (comp.). “Violencia en la Familia en Lima y el Callao”. Informe de resultados de la primera encuesta de hogares sobre vida familiar en Lima y El Callao, Ediciones del Congreso del Perú, segunda edición, Lima, 2001.
- ECHEBURÚA, Enrique y De CORRAL, Paz. Manual de Violencia familiar. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2002.
- FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, En La Constitución comentada”. Tomo I, obra colectiva, Lima, Gaceta Jurídica, 2005.
- GHERSI, Carlos Alberto. “Daño moral y psicológico”, segunda edición actualizada y ampliada”. Astrea, Buenos Aires, 2002.
- GIL DOMINGUEZ, Andrés, VICTORIA FAMA, María, HERRERA, Marisa. “Derecho constitucional de familia”, tomo II, Primera edición, Ediar, Buenos Aires, 2006.
- HURTADO REYES, Martin. Tutela Diferenciada. Palestra Editores, Lima, 2006.
- MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena B. “La violencia doméstica”. Análisis sociológico dogmático y de derecho comparado, Edit. Comares S.L., Granada, 2001.
- MARTEL CHANG, Rolando. Tutela Cautelar y Medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil.
- MARTINEZ LETONA, Pedro. La Teoria Cautelar y Tutela Anticipada, Editora y Librería Jurídica Grijley, Lima, 2015.
- MENDEZ COSATA, María Josefa; M. FERER, Francisco A.; y D' ANTONIO, Daniel Hugo. DERECHO DE FAMILIA, Tomo IV, Primera edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008.
- NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra, Derecho internacional de los derechos humanos, Academia de la Magistratura, Lima, 2004.
- NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco; CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. VIOLENCIA FAMILIAR, Comentarios a la Ley N° 29283 (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y modelos). EDICIONES LEGALES, Segunda Edición, Lima, 2014.

- ORTIZ, Diego Oscar. Medidas cautelares en violencia familiar, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2014.
- PELAEZ BARDALES, Mariano. Medidas Cautelares en el proceso Civil. Editora Juridica Grijley, Lima, 2008.
- PRIORI POSADA, Giovanni F. La tutela cautelar, su configuración como derecho fundamental, Editorial Ara Editores, Lima, 2006.
- RAMOS RIOS, Miguel Ángel. “VIOLENCIA FAMILIAR (Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares)”. Lex y Iuris. Segunda Edición, Lima, 2013.
- RAMOS RIOS, Miguel Ángel; RAMOS MOLINA, Miguel. “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”. Lex y Iuris. Primera Edición, Lima, 2018.
- REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Delitos contra la familia y de violencia doméstica”. Jurista Editores, Segunda Edición, Lima, 2011.
- SALAS BETETA, Christian; TEOFILO BALDEON, Sosa. Criminalización de la violencia familiar, Fondo Editorial Librería y Ediciones Jurídicas, Lima, 2013.
- SORIA LUJAN, Daniel. La Constitución Comentada, Análisis artículo por artículo, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2013.
- TANZI, Silvia Y. “Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas”. Editorial Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, 2005.
- TOLENTITO GAMARRA, Nancy y otros. “Violencia familiar desde una perspectiva de género”. Consideraciones para la acción, primera edición, Promudeh, Lima, 2000.
- YAYA ZUMAETA, Ulises. Las Medidas Cautelares en el Derecho Procesal Civil Peruano, Idemsa, Lima, 2014.

#### **REVISTAS:**

- BELTRÁN PACHECO, Patricia: "El drama de la violencia familiar en el Perú", Revista Peruana de Derecho de Familia, No 2. Lima, diciembre de 2007, p. 21.
- Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, N° 20. Lima, junio del 2000, pp. 192-199.

- DÍAZ VELÁZQUEZ, María Auxiliadora. Los menores expuestos a la violencia de género: Medidas Civiles de Protección, Edición AJFV, N°3. Las Palmas de Gran Canaria, Julio del 2016, pp.03-14.
- Gold, J., Wolan Sullivan, M., y Lewis, M. (2011). The relation between abuse and violent delinquency: The conversion of shame to blame in juvenile offenders. *Child Abuse & Neglect*, 35(7), pp. 459-467.
- LEDESMA NARVÁEZ, Marianela. *La Tutela de Prevención en los procesos por violencia familiar*, Revista IUS ET VERITAS N° 54. Lima, mayo del 2017, pp.172-183.
- Messman-Morre, T., Walsh, K., y DiLillo, D. (2010). Emotion dysregulation and risky sexual behavior in revictimization. *Child Abuse & Neglect*, 34(12), p.967-976.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Sistemas penales comparados: Violencia en el ámbito doméstico y familiar (Perú)”, Revista Penal La Ley N° 10. Madrid, octubre de 2002, p.222.
- SAN MARTIN, A. y ROSALES TUYA, M. *La violencia familiar un mal que se ha tornado en un problema cotidiano y que exige una solución integral*, Revista Investigaciones Sociales UNMSM-IIHS, Vol.18 (N°33). Lima, noviembre del 2014, pp.217-226.
- Shin, S., y Miller, D. (2012). A longitudinal examination of childhood maltreatment and adolescent obesity: Results from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (AddHealth) study. *Child Abuse & Neglect*, 36(2), p. 84-94.
- Widom, C., Czaja, S., Bentley, T., y Johnson, M. (2012). A prospective investigation of physical health outcomes in abused and neglected children: New findings from a 30 year follow-up. *American Journal of Public Health*, 102(6), pp. 1,135-1,144.

#### **REVISTAS ELECTRONICAS:**

- ALARCÓN FORERO, Laura C., ARAÚJO REYES, Angélica P., GODOY DÍAZ, Andrea P., VERA RUEDA, Manuel E. (2010, 25 de MAYO). Maltrato infantil y sus consecuencias a largo plazo. Revista MedUNAB No 13. Recuperado de: [file:///C:/Users/user1/Downloads/1155-Texto%20del%20art%C3%ADculo%20\(sin%20nombre%20de%20autor\)-3406-1-10-20100826.pdf](file:///C:/Users/user1/Downloads/1155-Texto%20del%20art%C3%ADculo%20(sin%20nombre%20de%20autor)-3406-1-10-20100826.pdf)



- Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2007). Special health care needs among children in child welfare (NSCAW Research Brief No. 7). Recuperado de [http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/special\\_health.pdf](http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/special_health.pdf)
- Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2011). *NSCAW II baseline report: Child well-being*. Extraído de: [http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/nscaw2\\_child.pdf](http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/nscaw2_child.pdf)
- Administration for Children and Families, Office of Planning, Research and Evaluation. (2012). *Instability and early life changes among children in the child welfare system* (NSCAW Research Brief N°. 18). Extraído de <http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/resource/national-survey-of-child-and-adolescent-well-being-no-18-instability-and>
- BÓRRAZ PALLARÉS, R., LEDESMA VERA, R., GÓMEZ PRECIADO, G. Una mirada hacia los hijos e hijas expuestos a situaciones de Violencia de Género (Orientaciones para la intervención desde los Servicios Sociales en Aragón). [en línea], ARAGON: Instituto Aragonés de la mujer (IAM), pg.25 [consulta: 5 noviembre 2018]. Disponible en: [file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/menes\\_hijas\\_mujers\\_victimias%20de%20violencia%20de%20genero.pdf](file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/menes_hijas_mujers_victimias%20de%20violencia%20de%20genero.pdf)
- COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA PROPONER LOS LINEAMIENTOS "PRIMERO LA INFANCIA" (2014, 30 de abril). Documentos técnicos de sistematización de evidencias como parte del trabajo elaborado por la Comisión Multisectorial para proponer lineamientos “Primero la Infancia”, aprobada por Resolución Suprema N° 413-2013-PCM. Recuperado de [file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/DT\\_Violencia\\_Menores.pdf](file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/DT_Violencia_Menores.pdf)
- CHILDWELFARE (2013, noviembre). Consecuencias a largo plazo del Maltrato a Menores. Child Welfare Information Gateway. Recuperado de: [https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp\\_long\\_term\\_consequences.pdf](https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp_long_term_consequences.pdf)
- Felitti, V. J., y Anda, R. (2009). The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders, and sexual behavior: Implications for healthcare. En R. Lanius, E. Vermetten, y C. Pain (Eds.), *The hidden epidemic: The impact of early life trauma on health and disease*. Recuperado de:

[http://www.cestudy.org/yahoositeadmin/assets/docs/LaniusVermetten\\_FINAL8-26-09.12892303.pdf](http://www.cestudy.org/yahoositeadmin/assets/docs/LaniusVermetten_FINAL8-26-09.12892303.pdf)

- PÉREZ DEL CAMPO, A. (2011, 09 de setiembre). Los Jóvenes frente a la Violencia de Genero. REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, N° 86. Recuperado de: <file:///area-penal/d/doc.%20victor/violencia%20familiar/violencia%20en%20los%20menores%20de%20edad/RJ86-07.pdf>
- Perry, B. (2012). Supporting maltreated children: Countering the effects of neglect and abuse. Adoption Advocate. Extraído de: <https://www.adoptioncouncil.org/images/stories/documents/NCFAADOPTIONADVOCATE NO48.pdf>
- SCARAFFÍA, Graciela. Las medidas autosatisfactivas Una respuesta eficaz a la "jurisdicción oportuna" [en línea], Buenos Aires: Todos derecho-Recopilación de Material Digital, s.f. [consulta: 20 setiembre 2018]. Disponible en: <http://todosxderecho.com/recopilacion/Procuracion,%20Fallos%20y%20Modos/Varios/Las%20medidas%20autosatisfactivas%28full%20permission%29.pdf>
- Xiangming, F., y Corso, P. (2007). Child maltreatment, youth violence, and intimate partner violence: Developmental relationships. *American Journal of Preventative Medicine*, 33(4). Extraído de: <http://www.ajpm-online.net/article/PIIS0749379707003492/fulltext>
- ZERO TO THREE. (2011). A call to action on behalf of maltreated infants and toddlers. Extraído de <http://www.zerotothree.org/public-policy/federal-policy/childwelfareweb.pdf>

#### **PAGINAS WEB**

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2017), Rae.es: Definición de Violencia y Definición de Urgencia [consulta: 20 setiembre 2018]. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=brdBvt6>
- PÉREZ PORTO Julián, y GARDEY, Ana (2017), Definicion.de: Definición de biopsicosocial. Disponible en: <https://definicion.de/biopsicosocial/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto del 2002 [consulta: 20 setiembre 2018]. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_17\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf)

- CHILDWELFARE (2013, noviembre). Consecuencias a largo plazo del Maltrato a Menores. Child Welfare Information Gateway. Disponible en: [https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp\\_long\\_term\\_consequences.pdf](https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp_long_term_consequences.pdf)
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Consulta de causas, consulta 10 de noviembre del 2010, Disponible en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.htnd>.
- Salud integral, por: Bertha Sola Valdés, Fuente: esmas.com. Disponible en <http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/425179.html>

### **TESIS:**

- MELLADO SALAZAR, Julia. “Medidas de protección dictadas por los juzgados especializados de familia en la tutela de las mujeres víctimas de violencia familiar, Huánuco 2015 – 2016”. Tesis para obtener el grado académico de magister en Derecho Civil y Comercial. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huanuco, 2017.
- BUSTAMANTE VERA, Laura. “Efectividad del cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad Andina del Cuzco, Cuzco, 2016.
- ALCÁZAR LINARES, A. y MEJÍA ANDIA, L., “Eficacia de los mecanismos incorporados por la ley N° 30364 para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Análisis de expedientes de los juzgados de familia de cusco diciembre-2015”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad Andina de Cuzco, Cuzco, 2017.
- RIVERA CABALLERO, Julieta P., “Las medidas civiles de protección de los menores en los casos de violencia familiar”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad Autónoma de México, México, 2016.
- PIZARRO MADRID, Carlos. “Naturaleza Jurídica de las medidas de protección en un proceso de violencia familiar”. Tesis para obtener el título de abogado. Universidad de Piura, Piura, 2017.

## 7. ANEXOS

I. PROBLEMAS	II. OBJETIVOS	III. HIPOTESIS	IV. VARIABLES	V. METODOLOGIA
<p><b>PROBLEMA GENERAL:</b> ¿Son efectivas las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo para garantizar la protección de los derechos de menores de edad, en los casos de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018?</p> <p><b>PROBLEMAS ESPECIFICOS:</b> -¿Cuántas medidas de protección a dictado el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores, víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018?  - ¿Cuáles son las medidas de protección más comunes que se dictaron en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018?</p>	<p><b>OBJETIVO GENERAL:</b> Determinar si las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo son efectivas para garantizar la protección de los derechos de los menores en los casos de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b> -Cuantificar el número de resoluciones en las que se dictan medidas de protección a favor de los menores, víctimas de violencia familiar, en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de Enero a Julio del 2018.  - Identificar cuáles son las medidas de protección más comunes que se dictaron en el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018.</p>	<p><b>HIPÓTESIS:</b> Las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo no son efectivas para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad en los casos de violencia familiar, desde el periodo de Enero hasta Julio del 2018.</p>	<p><b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b> Las Medidas de Protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, desde el periodo de Enero hasta Julio del 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retiro del agresor del domicilio.</li> <li>2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine.</li> <li>3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.</li> <li>4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor.</li> <li>5. Inventario sobre sus bienes.</li> <li>6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.</li> </ol>	<p><b>TIPO DE INVESTIGACIÓN</b> Básica</p> <p><b>NIVEL DE INVESTIGACIÓN</b> Descriptiva-Explicativa</p> <p><b>DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN</b> No experimental. Cualitativa. Transversal.</p> <p><b>POBLACION:</b> La población en estudio está compuesta por las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores de edad víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero hasta Julio del 2018.</p> <p><b>MUESTRA:</b> La muestra en la presente investigación está constituida por 40 Medidas de Protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de los menores de edad que fueron víctimas de violencia familiar. Así mismo como sujetos de estudio 40 víctimas (menores de edad) de Violencia familiar</p>

<p>- ¿Las Medidas de Protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de las menores víctimas de violencia familiar, fueron oportunamente otorgadas para proteger a los menores de edad, en el periodo de Enero a Julio del 2018?</p> <p>- ¿Los agresores han cumplido las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de las menores que fueron víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018?</p> <p>-¿La Policía Nacional del Perú cumple eficientemente su labor de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo a favor de los menores de edad, víctimas de violencia familiar, en el periodo Enero a Julio del 2018?</p>	<p>-Delimitar si las Medidas de Protección dictadas, por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de las menores víctimas de violencia familiar, fueron oportunamente otorgadas para proteger a los menores de edad, en el periodo de Enero a Julio del 2018.</p> <p>- Determinar si los agresores han cumplido las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo, a favor de las menores que fueron víctimas de violencia familiar, en el periodo de Enero a Julio del 2018</p> <p>- Verificar si la Policía Nacional del Perú cumple eficientemente su labor de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Segundo Juzgado de Familia de Chiclayo a favor de los menores de edad, víctimas de violencia familiar.</p>		<p><b>VARIABLE DEPENDIENTE.</b> Protección de los derechos de los menores de edad víctimas de violencia familiar.</p> <p><b>INDICADORES:</b></p> <p>-Proteger al menor del agresor</p> <p>-Proteger el Derecho al libre desarrollo de la personalidad.</p> <p>-Proteger el Derecho a la integridad personal (física y psicológica).</p> <p>- Proteger el Derecho a una vida libre de violencia.</p> <p>-Proteger el Derecho a la dignidad.</p> <p>-Otorgamiento oportuno de las medidas de protección</p> <p>-Frecuencia del cumplimiento de las medidas de protección.</p> <p>-Reporte policial periódico al juez de familia sobre la situación de la víctima.</p>	<p>que obtuvieron sus medidas de protección en el Juzgado de Familia de Chiclayo, en el periodo de Enero hasta Julio del 2018.</p>
--	---	--	---	--

**FICHA DE ANALISIS DE DATOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION  
DICTADAS POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO A  
FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO  
DEL 2018.**

Expediente N°: \_\_\_\_\_

Agraviado(a): \_\_\_\_\_

Inculpado (a): \_\_\_\_\_

**1. MOTIVO DE LA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR:**

- a. Violencia Física ( )      b. Violencia Psicológica ( )  
c. Violencia Sexual ( )      d. Violencia económica ( )

**2. TIEMPO TRANSCURRIDO PARA QUE EL JUZGADO DE FAMILIA TOME  
CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DICTE LAS  
MEDIDAS DE PROTECCION:**

- a. Fecha de los Hechos denunciados en la Comisaria de Familia: \_\_\_\_\_  
b. Fecha de los Hechos denunciados en la Fiscalía de Familia: \_\_\_\_\_  
c. Fecha de los Hechos denunciados en el Juzgado de Familia: \_\_\_\_\_  
d. Fecha de Inicio del Proceso de Violencia Familiar: \_\_\_\_\_  
e. Fecha del Auto Admisorio: \_\_\_\_\_  
f. Fecha del Auto Final (medida de protección): \_\_\_\_\_

**TOTAL DEL TIEMPO TRANSCURRIDO:** \_\_\_\_\_

**3. TIPOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS POR EL SEGUNDO JUZGADO  
DE FAMILIA DE CHICLAYO PARA GARANTIZAR LA PROTECCION AL MENOR:**

- a. El retiro del agresor del domicilio. ( )  
b. Impedimento de acercamiento a la víctima, a la distancia que la autoridad judicial prevea.  
( )  
c. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica;  
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de  
comunicación. ( )  
e. Prohibición de tenencia y porte de armas para el agresor. ( )  
f. Inventario sobre los bienes. ( )

- h. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles e inmuebles comunes. ( )
- i. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora ( )
- j. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de la víctima o sus familiares. ( )

**5. SEGÚN LA SENTENCIA QUE TIPO(S) DE VIOLENCIA SE HA COMETIDO:**

- a. Violencia Física ( )      b. Violencia Psicológica ( )
- c. Violencia Sexual ( )      d. Violencia económica ( )
- e. Ninguna, sin embargo se dictó la medida de protección ( )

**6. LA(S) MEDIDA(S) DE PROTECCION DICTADA(S) POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA QUE DERECHO(S) PRETENDEN PROTEGER:**

- Derecho a la vida. ( )
- Derecho al libre desarrollo de la personalidad (identidad personal). ( )
- Derecho a la integridad física. ( )
- Derecho a la integridad psicológica. ( )
- Derecho a una vida libre de violencia ( )
- Derecho a la dignidad. ( )

**6. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN HAN SIDO NOTIFICADAS**

- a. Sí. ( )      b. No. ( )

**SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, SE RESPONDERA LA SIGUIENTE PREGUNTA:**

**6.1.** Fecha en que se notifica a las partes: \_\_\_\_\_

**7. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN HAN SIDO EJECUTADAS POR LA COMISARIA DE FAMILIA DE CHICLAYO**

- a. Sí. ( )      b. No. ( )

**SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, SE RESPONDERA LA SIGUIENTE PREGUNTA:**

**7.1.** ¿Cuánto tiempo se demoró la Comisaria de Familia de Chiclayo para ejecutar las medidas de protección a favor del agraviado (a)?

\_\_\_\_\_

**CUESTIONARIO A LAS PERSONAS A CARGO DE LOS MENORES QUE CUENTAN CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO, EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2018.**

**EDAD:** \_\_\_\_\_

**SEXO:** \_\_\_\_\_

a. Femenino ( )

b. Masculino ( )

**VINCULO CON EL MENOR:** \_\_\_\_\_

**1. EN CUANTO TIEMPO SE HA TRAMITADO EL PROCESO POR VIOLENCIA FAMILIAR.**

(Entendiéndose el tramite desde la interposición de la denuncia hasta la obtención de la medida de protección)

a. Solo un mes. ( )

b. De dos meses a tres meses. ( )

c. De cuatro meses a cinco meses. ( )

d. Más de seis meses. ( )

**2. LE PARECE QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO ES:**

a. Breve ( ) b. Normal ( )

c. Excesivo ( )

**3. DESPUÉS DE HABER INTERPUESTO LA DENUNCIA. ¿EL MENOR DE EDAD HA VUELTO A SER AGREDIDO POR EL AGRESOR(A)?**

a. Sí. ( ) b. No ( )

**4. ¿AL REALIZAR LA DENUNCIA, EL JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO FAMILIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, HA DICTADO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, TALES COMO: ?**

a) Retiro del agresor del domicilio

b) Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma

c) Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación



- d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor
- e) Inventario sobre sus bienes.
- f) Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora
- g) Otras medidas de protección, destinadas a la protección de la integridad personal y la vida de la víctima o sus familiares.

**5. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL TIPO DE MEDIDA(S) DE PROTECCIÓN DICTADA(S) A FAVOR DEL MENOR O LOS MENORES DE EDAD?**

A) SI            B) NO

**6. DESPUÉS DE DICTADAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR EL JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO ¿EL MENOR HA VUELTO A SER AGREDIDO POR EL AGRESOR(A)?**

a.        Sí.        (        )        b.        No        (        )

**7. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL AGRESOR, DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, DICTADAS A FAVOR DEL MENOR O LOS MENORES, ¿UD. INFORMÓ AL JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO FAMILIA DE CHICLAYO, SOBRE ESTE INCUMPLIMIENTO?**

a) Si            b) No

**8. ¿UD. CREE QUE SE HA GARANTIZADO LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD DE MANERA EFECTIVA?**

a.        Si        (        )        b.        No        (        )

**9. ¿UD. CONSIDERA QUE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO SON EFECTIVAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD CUANDO SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR?**

a.        Si        (        )        b.        No        (        )

**10. ¿UD. CONSIDERA QUE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ CUMPLE EFICIENTEMENTE SU LABOR DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS POR EL JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO?**

a) SI es eficiente la labor de la PNP.        (        )

b) NO es eficiente la labor de la PNP.        (        )